



EL OMBUDSMAN

MUNICIPAL

EN MÉXICO Y EN EL MUNDO

Mauricio I. Ibarra Romo • Jorge Mena Vázquez



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
M É X I C O

MAURICIO I. IBARRA ROMO
JORGE MENA VÁZQUEZ

EL OMBUDSMAN
MUNICIPAL EN MÉXICO
Y EN EL MUNDO



COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

MÉXICO, 2002

Primera edición: agosto, 2002
ISBN: 970-644-262-6

© **Comisión Nacional
de los Derechos Humanos**
Periférico Sur 3469,
esquina Luis Cabrera,
Col. San Jerónimo Lídice,
C. P. 10200, México, D. F.

Diseño de portada:
Flavio López Alcocer

Impreso en México

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	7
II. EL <i>OMBUDSMAN</i> MUNICIPAL	11
III. LOS <i>OMBUDSMAN</i> MUNICIPALES O LOCALES EN EL MUNDO	17
IV. <i>OMBUDSMAN</i> Y MUNICIPIO EN MÉXICO	27
V. DIAGNÓSTICO NACIONAL DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	37
VI. REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA FIGURA DEL <i>OMBUDSMAN</i> MUNICIPAL EN MÉXICO	43
VII. CONCLUSIONES	49
VIII. FUENTES	51

ANEXOS

<i>Anexo 1.</i> King County Charter	57
<i>Anexo 2.</i> Anchorage Municipal Code	101

<i>Anexo 3.</i> Ordenanza 5930 que establece la oficina del <i>Ombudsman</i> en Boise City	117
<i>Anexo 4.</i> Excerpt from <i>City of Winnipeg Act</i> (Ss. 65 to 73, inclusive) Regarding the Responsibilities and Powers of the <i>Ombudsman</i> for the City of Winnipeg	125
<i>Anexo 5.</i> Legislación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires	137
<i>Anexo 6.</i> Extracto de la Constitución de la Ciudad de Zurich	149
<i>Anexo 7.</i> Verordnung über den Beauftragten in Bechwerdesachen von 21. Januar 1991).....	155
<i>Anexo 8.</i> Reglamento del <i>Ombudsman</i> de la Ciudad de Berna, Suiza	159
<i>Anexo 9.</i> Artículos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, referentes a las Comisiones Municipales de Derechos Humanos	163
<i>Anexo 10.</i> Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa de la Ciudad de Tepic	169
<i>Anexo 11.</i> Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Justicia Administrativa H. XXXI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit	181

I. INTRODUCCIÓN

La reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 23 de diciembre de 1999, reconoció expresamente al municipio como un ámbito de gobierno, al sustituir, en su fracción I, el término “administrar” por el de “gobernar”. Mediante dicha reforma se pretende excluir toda posibilidad no sólo de autoridades intermedias entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, sino la injerencia de cualquier otro ente en la esfera municipal.

No pasa inadvertido que hoy día el municipio cuenta con mayores facultades y obligaciones para realizar tareas en beneficio de la comunidad, así como para ordenar esa misma vida comunitaria local con independencia y bajo su propia responsabilidad, incluso con medidas coactivas en aquellos casos que la seguridad y el orden así lo requieran.

En el presente estudio se analiza, de manera breve y descriptiva, la institución del *Ombudsman* municipal, su desarrollo en el mundo y sus antecedentes en nuestro país; además, se realiza un diagnóstico sobre las violaciones de los Derechos Humanos de los gobernados en el ámbito municipal, al tiempo que se establecen los requisitos para incorporar al *Ombudsman* en esta esfera de gobierno. Para alcanzar los objetivos señalados fue indispensable dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es un *Ombudsman* municipal?, ¿qué países del mundo han adoptado la figura?, ¿qué atribuciones tienen y cuál es su estructura?, ¿qué experiencia hay en México al respecto?, ¿suelen ser respetuosas de los Derechos Humanos las autoridades municipales mexicanas? y ¿la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite la creación de *Ombudsman* municipales o es necesaria una reforma?

Para dar respuesta a estas interrogantes, esta investigación se basa en el análisis documental de diversas fuentes nacionales y extranjeras,¹ pero sobre todo, parte de la experiencia institucional de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Fundamentales.

Es necesario señalar que para efectos de este trabajo se está tomando al municipio como la base más pequeña de la división administrativa y política de un país, ya que debido a las diversas formas de gobierno, evidentemente habrá países en donde se le llamarán provincias, ciudades u otros sinónimos a lo que nosotros llamamos municipio; sin esta salvedad sólo habría *Ombudsman* municipales en los países que tuvieran esa denominación político-administrativa.

En el capítulo denominado “El *Ombudsman* municipal” se explican las características de la institución y se exponen las diferencias con otros tipos de *Ombudsman* que existen en el mundo.

En “Los *Ombudsman* municipales o locales en el mundo” se enumeran los países que han adoptado esta figura y se describen algunos de ellos.

En el siguiente capítulo, “*Ombudsman* y municipio en México”, se estudian las diversas instancias mexicanas (federales, estatales y municipales) que han tenido competencia para conocer de quejas en contra de autoridades municipales, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

¹ Los autores agradecen el apoyo a todas las personas que de alguna forma apoyaron esta investigación, pero en especial, al doctor Karl Stengel, *Ombudsman* de la ciudad de Winterthur; al doctor R. Steiner, Adjunto de la Oficina del Ombudsman de la ciudad de Zurich; a Iris Frey, asistente del *Ombudsman* de la ciudad de Berna, todos ellos de Suiza; a Mónica Zelaya, de la Oficina del Mediador de Montreal, Canadá; a Alan Muise, *Ombudsman* de la ciudad de Anchorage, Alaska, y a Duncan Flower, *Ombudsman* de la ciudad de King Country, Seattle, Washington, ambos en Estados Unidos, y a la licenciada Luz María Parra Cabeza de Vaca, Presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.

Posteriormente, se hace un diagnóstico nacional de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por servidores públicos municipales; lo anterior, con base en las Recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como por las Comisiones y Procuradurías Locales de Derechos Humanos del país.

Además, se realiza un análisis de los requisitos jurídicos para incorporar al *Ombudsman* municipal en México; igualmente, se mencionan cuáles son las autoridades facultadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crearlo. Por último, podemos señalar que los once anexos podrán ser de gran utilidad para quienes en el futuro, deseen realizar un estudio jurídico comparado a detalle sobre esa Institución.

II. EL OMBUDSMAN MUNICIPAL

La protección de la dignidad, la vida, la libertad, la seguridad y la certeza jurídicas ha sido una necesidad permanente de la convivencia humana. Sin embargo, en los tiempos modernos se ha tomado conciencia de que no sólo es una necesidad sino un deber del Estado. Para alcanzar este objetivo se han creado muchas instituciones y procedimientos en el mundo, entre ellos, el *Ombudsman*, cuyo éxito radica en ser considerado como un símbolo de todo Estado democrático. En este sentido, conviene destacar, siguiendo a Caiden, algunas de sus cualidades:

[...] entre sus tareas más importantes son la de fomentar el bienestar del ciudadano, defender las libertades individuales y velar para que la burocracia administrativa trate con equidad a todos los ciudadanos. El *Ombudsman* constituye un control independiente y despolitizado de las autoridades públicas o por lo menos de sus operaciones administrativas. Tiene la posibilidad de asegurar una administración pública más eficiente y promover reformas administrativas. Se presenta como una opción para corregir los errores de las administraciones públicas, puesto que se ofrece como un agente experto e imparcial cuya acción no acarrea ningún gasto económico a los reclamantes, sin dilaciones, sin la tensión de tener que litigar con un oponente.²

Dichas características han logrado que muchos países lo incorporen a su sistema jurídico y sea un gran auxilio en la labor del Estado de proteger los derechos fundamentales. En este trabajo se analizará dicha insti-

² Gerald E. Caiden, *International Handbook of the Ombudsman*, p. 17, citado por Luis Ernesto Salomón Delgado, *El Ombudsman*, p. 259.

tución en el ámbito municipal. Su estudio es indispensable porque fueron las primeras instituciones en incorporarse a otros sistemas jurídicos, distinto del sueco, incluido el mexicano, así lo demuestra la opinión del ilustre constitucionalista Héctor Fix-Zamudio, quien señala:

Como primer paso dirigido a la posibilidad de crear a la institución [*Ombudsman* ...] se han creado instrumentos paralelos, tales como las procuradurías del consumidor...

Una segunda etapa ha consistido en la consagración de organismos de fiscalización administrativa de acuerdo con el modelo del *Ombudsman* en legislaciones de carácter local, en especial, con ámbito municipal, y en este sentido podemos señalar al procurador de vecinos creado por el cabildo de la ciudad de Colima en 1984...

El primer paso será ubicar el *Ombudsman* municipal en relación con otras instituciones homólogas que hay en el mundo. Para alcanzar este objetivo utilizaremos la clasificación de la institución que realiza Donald Rowat, la cual se basa en la medida en que se apartan las instituciones de lo que él llama el modelo de *Ombudsman* clásico, el cual tiene cuatro características:

- Encontrarse establecido en la Constitución o en una ley expedida por el poder legislativo, la cual asegura su permanencia, neutralidad e independencia respecto de la administración pública en contra de la cual recibe quejas.
- Recibir quejas del público en general o iniciarlas de oficio, en contra de cualquier servidor público por mala administración.
- Ser una instancia de apelación en el sentido de que usualmente investiga quejas después de que la transgresión al orden jurídico ha sido cometida por la oficina de gobierno respectiva y ésta no ha sido reparada.
- Recomendar soluciones cuando encuentra una queja fundada, y si no es aceptada, hacer una recomendación al jefe del Ejecutivo y publicar un reporte al Poder Legislativo, pero sin emitir

resoluciones vinculatorias y en eso se distingue de una corte, tribunal o árbitro.³

Rowat señala que existen dos tipos de *Ombudsman* en el mundo, el del sector público y el del sector privado.⁴ La institución que estudiamos se encuentra en el primer sector.

Dicho autor establece dos tipos de *Ombudsman* del sector público, unos creados por el Poder Legislativo y otros por el Poder Ejecutivo, cada uno de ellos puede ser general o especializado. Los *Ombudsman* de competencia general conocen de quejas en contra de toda la administración pública y los que el autor denomina *Ombudsman* especializados son los que sólo conocen de violaciones cometidas por los servidores públicos de una área específica del gobierno.

Respecto del *Ombudsman* creado por el Legislativo con competencia general, señala que son aquellos estatuidos o creados por las legislaturas nacionales o locales o por los concejos municipales; por ello, generalmente reúne las cuatro características que establece el sistema clásico. El segundo es el sistema legislativo especializado que también satisface las cuatro características, pero sólo puede recibir quejas de un área específica de la administración, por ejemplo, el *Ombudsman* militar.

Respecto del *Ombudsman* ejecutivo, el autor menciona que es el creado por el Poder Ejecutivo y no cumple con la primera condición del sistema clásico, esto es, que sea independiente del poder contra el cual recibe las quejas.⁵

No obstante la clasificación anterior, es necesario considerar que cada país lo incluye con ciertas características y modalidades, dependiendo de sus necesidades sociales, sistema jurídico y evolución de su régimen democrático.

³ Cf. Donald Rowat, *A worldwide survey of Ombudsmen*, pp. 1-2.

⁴ *Idem*.

⁵ *Ibid.*, p. 2.

En el mundo existen *Ombudsman* municipales creados tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo. Los primeros, por lo general, reúnen las cuatro características del *Ombudsman* clásico; en el caso de los segundos, como ya se mencionó, no cumplen con la primera característica.

Creación y desarrollo de la figura del Ombudsman

La figura del *Ombudsman* surge en Suecia en 1809,⁶ como intermediario entre el Parlamento y el pueblo cuyo fin era salvaguardar los derechos de este último, así como vigilar el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad administrativa. Sus atribuciones eran recibir quejas ciudadanas por acciones u omisiones de los gobernantes y emitir recomendaciones no obligatorias a la autoridad infractora, pudiendo publicar dichos documentos recomendatorios mediante informes periódicos presentados ante el Legislativo. A partir de esta fecha y hasta hoy, atendiendo a la clasificación de Rowat existen en el mundo 191 *Ombudsman* pertenecientes al sistema legislativo con competencia general y 101 también legislativos pero especializados por área. De los establecidos por el Poder Ejecutivo existen 96 generales y 155 especializados por materia. Por último, en cuanto a los *Ombudsman* privados, existen 134 sólo en Estados Unidos y Canadá;⁷ en general, estamos hablando de 75 países que tienen algún tipo de *Ombudsman*.⁸ Por ello, sería imposible, teniendo en cuenta el propósito de este trabajo, desarrollar un estudio general de la evolución general de la institución en el mundo.⁹

⁶ Aun cuando la mayoría de los autores coinciden en este punto, existe un autor que argumenta que los orígenes del *Ombudsman* se encuentran en la antigua India. Cf. Misra Lokayukta, *A reflection on Ombudsman its origin in ancient India*, pp. 1 y ss.

⁷ D. Rowat, *op. cit.*, pp. 13-25.

⁸ Roberta Jamieson, *Ombudsman Institutions around the world, analysis and comparison of a plurality and practice*, p. 3.

⁹ Véase Héctor Fix-Zamudio, *Justicia constitucional, Ombudsman y Derechos Humanos*, pp. 203 y ss.

En el próximo rubro se estudiarán los diversos *Ombudsman* municipales que existen en el mundo y sus principales características. De manera breve se enuncian otras instituciones que tienen competencia para conocer de actos cometidos por autoridades municipales.

III. LOS *OMBUDSMAN* MUNICIPALES O LOCALES EN EL MUNDO

Algunos países han creado *Ombudsman* municipales o locales, entre ellos: en América 26 (Argentina, cinco; Brasil, uno; Canadá, dos; México, 11; Paraguay, uno, y Estados Unidos, seis); en Europa 16 (Bélgica, uno; Francia, uno; Holanda, ocho; Suiza, tres, y Reino Unido, tres), y en Medio Oriente, cinco, todos en Israel. En total son 47 *Ombudsman* municipales.¹⁰

1. *El Ombudsman municipal o local en América*

El primer *Ombudsman* municipal creado en América fue en Seattle/King Country, Washington, Estados Unidos, denominado King Country Office of Citizen Complaints/Tax Advisor; es un *Ombudsman* legislativo, su nombramiento dura cinco años y sólo puede ser removido por las dos terceras partes del Concejo Municipal; tiene amplias facultades para investigar y emitir recomendaciones, y es especial, porque, además de estas atribuciones, es el encargado tanto de cuidar la aplicación de un Código de Ética como de dar asesoría gratuita en materia fiscal.¹¹

El segundo *Ombudsman* municipal en América se creó en 1973 en la ciudad de Detroit; el nombramiento del titular es de 10 años, es nombrado por el voto de las dos terceras partes del Concejo Municipal de

¹⁰ D. Rowat, *op. cit.*, p. 2.

¹¹ Cf. artículos 2.52.030, 2.52.050, 2.52.080 y 2.52.90 del capítulo 2.52 que regula la actuación de la Oficina Receptora de Quejas de la Ciudadanía y Consejero Fiscal de King Country (en una traducción libre). En el anexo 1 se puede consultar su estatuto jurídico.

Detroit y sólo puede ser removido de su encargo por el mismo porcentaje de votación.¹²

En 1975 se creó el Anchorage Municipal *Ombudsman*.¹³ Es un comisionado de la Asamblea Municipal en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, electo por ese cuerpo legislativo que cuenta con 11 miembros,¹⁴ por lo cual es un *Ombudsman* legislativo. Su nombramiento dura dos años y puede ser removido por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea,¹⁵ no obstante, no tiene inmunidad para declarar ante cortes o tribunales por acciones que conoció con motivo de sus obligaciones como *Ombudsman*,¹⁶ lo cual puede impedir que haga adecuadamente su labor.

Un caso muy significativo es el del *Ombudsman* de la ciudad de Portland, Oregon, Estados Unidos, el cual fue creado en enero de 1993. Sin embargo, dicha oficina comenzó a trabajar con un *staff* de dos personas y siete voluntarios, los cuales atendían 6,000 quejas al año, difícil situación que duró 20 meses. Es de señalarse que, como en muchos casos en el mundo, este *Ombudsman* fue establecido por el alcalde de la ciudad de Portland, por ello, se trata de un *Ombudsman* ejecutivo.¹⁷ No es sino hasta julio de 2001 que esta institución se convirtió en una de tipo legislativa, ya que el Concejo Municipal de Portland dictó la ordenanza número 175568, en la cual se establece que esta institución

¹² Para mayor información véase el sitio web oficial: <http://www.ci.detroit.mi.us/ombudsman/> (consultado el 8 de marzo de 2002).

¹³ Para mayor información véase el sitio web oficial: <http://www.muni.org/assembly2/ombudsman.cfm> (consultada el 8 de marzo de 2002).

¹⁴ Ombudsman Ontario, *Municipal Ombudsman and the right of complaint: an overview*, http://www.ombudsman.on.ca/home/municipal_doc.html (consultada el 18 de julio de 2001).

¹⁵ Cf. artículos 2.60.010, 2.60.040 y 2.60.070 del Capítulo de la Oficina del Anchorage, en el Código Municipal de ese Municipio. En el anexo 2 se puede consultar el texto completo de dicho capítulo.

¹⁶ Michael Mills, *Municipal Government Ombudsman*, presentado en la Conferencia Internacional sobre el concepto de *Ombudsman* realizada en Taipei, Taiwan, el 23 de septiembre de 1994, p. 2.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 1-3.

es una oficina independiente, imparcial y accesible a todo el público, facultada para investigar actos administrativos realizados por las agencias u organismos de la ciudad, así como recomendar cambios apropiados para lograr estándares de eficiencia, competitividad y justicia en los servicios públicos que proporciona la ciudad de Portland.¹⁸

Otro ejemplo reciente de la institución en Estados Unidos se dio en la ciudad de Boise, Idaho, el Community Ombudsman of Boise City, que fue creado por el Concejo Municipal el 20 de julio de 1999, a través de la ordenanza 5930.¹⁹ Es un *Ombudsman* ejecutivo debido a que lo nombra el alcalde, pero tiene que ratificarlo el Concejo Municipal.

Otros *Ombudsman* municipales en Estados Unidos son los siguientes: *Legislative Ombudsman* en Flint, Michigan, y el *Ombudsman* de Jamestown, en Nueva York.

En Canadá existe el *Ombudsman* de Winnipeg, creado por el legislativo en 1994, a través de una reforma al Estatuto de la Ciudad de Winnipeg.²⁰ El titular dura en su encargo seis años, es nombrado por el Concejo Municipal y le reporta directamente, rindiendo un informe anual de actividades; además, tiene amplias facultades de investigación para conocer de actos u omisiones contrarios a la ley, injustos, opresores, discriminadores, arbitrarios o realizados bajo un procedimiento viciado, entre otros.²¹

El *Médiateur* de la ciudad de Montreal fue creado en 1994 por el alcalde de esa ciudad,²² lo cual lo identifica, a diferencia del anterior, como

¹⁸ Código de la Ciudad de Portlan, Oregon, Estados Unidos, capítulo 3.77 de la Oficina del Ombudsman, <http://ordlink.com/codes/portland/index.htm> (con fecha de acceso 8 de marzo de 2002).

¹⁹ El anexo 3 contiene la ordenanza 5930 que establece la Oficina del Ombudsman Comunitario de Boise City.

²⁰ En el anexo 4 se encuentra un extracto del decreto de ley de la ciudad de Winnipeg.

²¹ Cf. artículos 66(1), 66(4), 69(1), 70(2), 71(1) y 72(4) del extracto señalado en la nota anterior.

²² Véase la página de internet <http://www.ville.montreal.qc.ca/mediateur/english/mission/office.htm> (consultada el 27 de julio de 2001).

un *Ombudsman* ejecutivo. Esta institución se basó en la figura del *Médiateur* francés.

Respecto de Latinoamérica, Argentina cuenta con cinco *Ombudsman* municipales, entre ellos: Defensor del Pueblo de la Ciudad de Chilecito, La Rioja; Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Defensor del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto; Defensor del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero, y Defensor de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes.²³

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se estableció en 1996 al reformarse el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el cual señala:

Artículo 137. La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.

Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos.

Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir de las autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna.

Está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo número, áreas y funciones específicas y forma de designación son establecidas por la ley.

Es designado por la Legislatura por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública convocada al efecto.

Debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza de iguales inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los jueces.

Su mandato es de cinco años; puede ser designado en forma consecutiva por una sola vez, mediante el procedimiento señalado en el párrafo primero. Sólo puede ser removido por juicio político.

²³ Véase el sitio web oficial <http://www.defensoria.org.ar/> (consultado el 8 de marzo de 2002).

El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.

El 3 de febrero de 1998, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expidió la Ley No. 3 que regula a dicho Defensor.²⁴ La doctora Alicia Oliviera, titular de dicha dependencia, en su primer informe de actividades realizó un excelente resumen de la importancia de la Controladuría General Comunal, antecedente del *Ombudsman* de la ciudad de Buenos Aires, en los siguientes términos:

El antecedente institucional de la Defensoría, es la Controladuría General Comunal creada por el artículo 1 de la Ordenanza No. 40.831, cuyo objeto era supervisar la correcta actuación de los funcionarios y agentes dependientes del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de la administración descentralizada, organismos descentralizados y todo ente que funcionara en la esfera de competencia de aquel Departamento, así como la actividad de las oficinas ejecutivas dependientes de los Concejos Vecinales.

A su vez, el artículo 2 de la misma Ordenanza contemplaba como misión fundamental del Controlador General Comunal: proteger los derechos, intereses legítimos y difusos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires contra las arbitrariedades, las desviaciones de poder y los errores administrativos, dar satisfacción por el medio más idóneo posible, a quienes se consideren afectados por deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas en los trámites y todo otro acto que traduzca desconsideración hacia el público, dolo o irregularidad administrativa y evitar, a través de las recomendaciones que formule, la repetición de prácticas viciadas. Para todo lo cual, y para asegurar el cumplimiento de las funciones y atribuciones enunciadas en la referida Ordenanza Municipal, el inciso J del artículo 13 de este precepto autorizaba al Controlador a realizar toda acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones.²⁵

²⁴ Ver anexo 5.

²⁵ Véase la página de internet http://www.buenosaires.gov.ar/defensoria/documen1/la_defensoria.htm (consultada el 20 de septiembre de 2001).

En Asunción, Paraguay, la denominación es Defensora Vecinal de Asunción, y en Brasil se denomina Secretario de la Ouvidoria Geral do Estado, que se encuentra en la ciudad de Curitiba, Paraná.²⁶

En México existen antecedentes a este respecto: la Procuraduría de Vecinos de Colima, establecida en 1983; la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Huajuapán de León, Oaxaca; la Defensoría de los Derechos de los Vecinos de Querétaro, creada en 1988, y las Comisiones Municipales creadas en Nayarit. Conviene aclarar que las dos primeras ya no se encuentran funcionando. En el próximo capítulo se estudiarán con detalle cada una de estas instituciones.

Existen propuestas para incorporar esta figura en algunos países, respecto de la República de Uruguay, en la *Revista de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman*, Carlos López Dawson propuso que:

[Se crearan] a nivel municipal con las mismas características del Defensor del Pueblo nacional pero esta vez para intermediar ante el poder municipal, en representación del Concejo comunal y en defensa de los derechos de las personas.

En este caso el Defensor Comunal o vecinal sería elegido por el Concejo Comunal respectivo, ante quien daría cuenta de su actividad anual. Su acción estaría dirigida a defender los derechos en las personas ante las distintas instancias municipales y estatales radicadas en el territorio de la comuna.²⁷

Igualmente, el autor puntualiza lo que podría ser la labor de estas instituciones, en los siguientes términos: “[El] carácter mediador de esta institución evitará transformar todo conflicto entre el ciudadano y el Estado, o en su caso el ente municipal involucrado, en un problema

²⁶ Véase un directorio muy completo de *Ombudsman* en el mundo en la página de internet http://www.ombud.gov.bc.ca/links/int_ombuds/Ombdir_a-c.html (consultada el 24 de septiembre de 2001).

²⁷ Carlos López Dawson, “El *Ombudsman* y su relación con las Fiscalías Municipales”, en *Revista de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, Defensor del Pueblo*, núm. 2, pp. 7-8.

político sino que su actuación será síntoma del buen funcionamiento del régimen democrático”.²⁸

Por otro lado, en Brasil, José Luis Quadros de Magalhaes propuso la incorporación constitucional de la figura del *Ombudsman* municipal como “un receptor de quejas de la población [y] defensor de los derechos e intereses de la población que observa los controles legales y constitucionales en forma efectiva, evitando que los representantes o titulares del poder se distancien de sus representados, toda vez que ello es sumamente importante para el desenvolvimiento de la democracia”.²⁹

2. El Ombudsman municipal o local en Europa

El primer *Ombudsman* municipal europeo, denominado Ombudsmann der Stadt Zürich, se creó en 1970, en la ciudad de Zurich, Suiza, a través de la reforma al artículo 14 de la Constitución de la ciudad de Zurich. El titular es elegido por el Concejo Municipal. Entre sus funciones podemos mencionar la de mediar entre la ciudadanía y la administración municipal, y recibir quejas en contra de la administración municipal, en aquellos casos en que la autoridad actúe de manera ilegal o inequitativamente. Rinde un informe anual al Consejo Municipal.³⁰ En Suiza existen también en las ciudades de Berna y Winterhur, Ombudsmann der Stadt Bern³¹ y Ombudsmann der Stadt Winterhur.³²

²⁸ *Ibid.*, p. 9.

²⁹ José Luiz Quadros de Magalhães, *O Diretório não partidário, o legislativo municipal e o “Ombudsman”*. <http://www.reitoria.ufmg.br/pj/artigos/pag11.html> (consultada el 8 de marzo de 2002).

³⁰ Cf. artículos 25, 35 y 39 de la Constitución de la ciudad de Zurich. Ver anexo 6.

³¹ Véase la página de internet oficial de la institución <http://www.bern.ch/datenschutz/ombudsmann.cfm> (consultada el 8 de marzo de 2002). En el anexo 8 se encuentra el Reglamento del *Ombudsman* de la ciudad de Berna, Suiza.

³² Véase la página de internet oficial de la institución (consultada el 24 de agosto de 2001): <http://www.stadt-winterhur.ch/politik.asp?Sprache=E&Netz=SN&Thema=Politik&Seite=10000>. La normatividad se puede encontrar en el anexo 7.

3. *El Ombudsman municipal en Medio Oriente*

Israel es el único país en Medio Oriente que tiene esta institución en el ámbito municipal;³³ los municipios de ese país que cuentan con un *Ombudsman* son: Haifa, Herzliya, Jerusalén, Natahaniya y Tel Aviv.³⁴

4. *Otras autoridades con competencia para conocer de actos cometidos por autoridades municipales*

Si bien la idea de este trabajo es estudiar la institución del *Ombudsman* municipal, es necesario hacer una breve referencia a los *Ombudsman* ya sea nacionales o regionales que han tenido competencia sobre autoridades municipales.

El ilustre constitucionalista Víctor Frairén Guillén menciona algunas autoridades con facultades para conocer de quejas en contra de autoridades municipales, entre ellas: el National *Ombudsman* de Finlandia; el *Ombudsman* de Israel, denominado State Comptroller & Commissioner for Complaints from the Public, y el Parliamentary *Ombudsman* de Suecia.³⁵

Por otro lado, en Canadá existen tres *Ombudsman* provinciales que tienen competencia para conocer de quejas en contra de autoridades municipales, ellos pertenecen a las provincias de British Columbia, New Brunswick y Nova Scotia.³⁶

³³ Cf. P. Elman, "The Israel Ombudsman", en *Israel Law Review* (1975), 293-323; J. Hirsch, "The Genesis of the Israel Public Complaint Commission", en *Public Administration*, pp. 119-128.

³⁴ Véase la página de internet http://www.ombudsman.bc.ca/links/intl_ombuds/index.htm (consultada el 8 de marzo de 2002).

³⁵ Víctor Frairén Guillén, *El defensor del pueblo: Ombudsman*, pp. 260-273. Además, el autor expone ejemplos concretos sobre actuaciones de *Ombudsman* nacionales o regionales en materia municipal.

³⁶ Ombudsman Ontario, *op. cit.*, p. 5.

En Estados Unidos se pueden mencionar al Legislative *Ombudsman* of Hawaii, y al Citizen's Aide *Ombudsman* of Arizona.³⁷

En el Reino Unido se encuentran los Comisionados Locales para la Administración, creados en 1974 a través de la Local Government Act, cuyas atribuciones son

[...] similares a las del Comisionado británico, con algunas modalidades, entre las que destacan que los afectados deben acudir previamente ante los consejeros municipales, pero si éstos no transmiten la queja al comisionado respectivo, queda abierto el acceso directo del reclamante ante el Comisionado, los informes de los propios comisionados deben remitirse a los organismos representativos de las autoridades locales, al menos en Inglaterra y Gales, y por último, que la publicidad de las actividades de dichos Comisionados son más amplias que la del *Ombudsman* británico.³⁸

En el siguiente capítulo se estudiará la relación que se ha tenido entre la institución del *Ombudsman* y el municipio en México.

³⁷ *Idem.*

³⁸ H. Fix-Zamudio, *Protección jurídica de los Derechos Humanos. Estudios comparativos*, p. 365.

IV. OMBUDSMAN Y MUNICIPIO EN MÉXICO

En México también han existido instituciones de carácter municipal que tuvieron ciertas similitudes con el *Ombudsman* clásico. Esto, sin mérito de aquellas que aún con el carácter estatal o federal también tenían competencia para conocer de quejas en contra de autoridades municipales; en este rubro se hará una breve referencia a cada una de estas instituciones.

1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, competencia en materia municipal

En la actualidad, la Comisión Nacional puede conocer de violaciones a los derechos fundamentales realizadas por autoridades municipales, a través de dos vías: en segunda instancia, al recibir recursos de queja e impugnación, contemplados en el título III, capítulo IV, de las Inconformidades, previsto en los artículos 55 al 66 de la Ley de la Comisión Nacional; o en primera instancia, ejerciendo la facultad de atracción, siempre y cuando se den los supuestos del artículo 60 de dicha Ley. Sin embargo, no siempre ha sido así, por ello, es necesario estudiar ciertos antecedentes que permitían conocer al *Ombudsman* nacional, en primera instancia, de quejas por violaciones a los Derechos Humanos en contra de servidores públicos de los municipios.

Cuando en 1990 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un ente desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuyo objeto era la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación

de los Derechos Humanos, y tenía competencia para conocer de quejas, incluso en contra de autoridades municipales, a las cuales podía enviarles Recomendaciones, el artículo 28, fracción VII, del Decreto de Creación, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación del 6 de junio de 1990, así lo establecía:

Artículo 28. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades:

[...]

VII. Hacer las Recomendaciones y en su caso observaciones que resulten pertinentes a las autoridades administrativas del país sobre violaciones a los Derechos Humanos.

[...]

A pesar de que en los inicios del *Ombudsman* nacional se discutió si sería efectivo su desempeño, con el transcurso del tiempo su actuar culminó con el fortalecimiento de una cultura de los Derechos Humanos que trajo como consecuencia un destacado beneficio social, circunstancias que en conjunto dieron pauta a que a nivel constitucional se promoviera su creación.

Por ello, el 28 de enero de 1992 se publicó en el *Diario Oficial* de la Federación el Decreto mediante el cual se adicionó el apartado “B” del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando a rango constitucional la protección y defensa de los Derechos Humanos, ordenando el establecimiento de organismos de protección de los Derechos Humanos a nivel federal y estatal, que conocieran quejas en contra de acciones u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter administrativo, contando con la facultad de formular Recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, el artículo tercero transitorio del citado Decreto ordenó que la Comisión Nacional siguiera conociendo de los asuntos locales hasta que las legislaturas de las entidades federativas crearan sus propios organismos, en los siguientes términos:

3. En tanto el Congreso de la Unión para el Distrito Federal y las Legislaturas de los estados establezcan los organismos de protección de los Derechos Humanos a que se refiere el primer párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las quejas que deben ser de competencia local, de conformidad con lo establecido por dicha Constitución Política.

La Comisión Nacional conocerá también de las quejas e inconformidades que se presenten en relación con las Recomendaciones o acuerdos del organismo de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como de la insuficiencia en el cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades a las que le sean sometidas.

Por ello, la Comisión Nacional siguió conociendo de los asuntos locales, y en mayo de 1993 se habían remitido 1,045 expedientes de queja a 22 Organismos locales creados hasta ese momento, los cuales habían sido calificados como presuntas violaciones de Derechos Humanos por autoridades locales.³⁹

Debido a la adición de referencia se instauró lo que se ha denominado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, que constituye una nueva y diferente garantía de la justicia constitucional mexicana.

2. Organismos locales de protección y defensa de los Derechos Humanos con competencia para conocer de quejas en contra de servidores de los ayuntamientos

En la actualidad los Organismos locales de Derechos Humanos son los encargados, salvo las excepciones de la citada facultad de atracción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (ver *supra* página 27) y el caso especial de Nayarit que lo analizaremos más adelante, de conocer de las quejas por violaciones a los Derechos Humanos en contra

³⁹ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Informe Anual Mayo 1992-Mayo 1993*, p. 20.

de autoridades locales, incluyendo a aquellas en contra de servidores públicos municipales; lo anterior, con fundamento en la citada reforma del artículo 102, apartado B, constitucional; sin embargo, antes de esa reforma ya existían Organismos locales que podrían conocer de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos realizadas por servidores públicos municipales; por lo tanto, analizaremos dichas referencias históricas.

El antecedente más lejano se presentó en 1847, en el estado de San Luis Potosí, con la Ley de Procuradurías de Pobres, ordenamiento que defendió a personas desvalidas y que hubiesen sido dañadas por “cualquier exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía”⁴⁰ cometida por autoridad o servidor público alguno.

Podemos mencionar otros ejemplos de antecedentes más actuales que conocieron de quejas en contra de actos de autoridades municipales en México, entre ellos: en 1979 el Congreso del estado de Nuevo León expidió un decreto por el que se creó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos del estado de Nuevo León; no obstante, carecía de independencia, toda vez que fue creado por el Ejecutivo local. En 1986 en el estado de Oaxaca se creó la Procuraduría para la Defensa del Indígena, teniendo como base el Reglamento de la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio y Social de la entidad federativa. En 1987 se creó la Procuraduría Social de la Montaña en el Estado de Guerrero. El 14 de agosto de 1988 en la ciudad de Aguascalientes surge la Procuraduría de Protección Ciudadana, organismo que “tiene como finalidad desahogar las quejas que presenten las personas afectadas por obligaciones que tienen los servidores públicos”,⁴¹ la cual “posteriormente se integró como Secretaría Ejecutiva, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, establecida por decreto del Ejecutivo publicado el 17 de junio de 1990”.⁴² El 31 de enero de 1991 tiene lugar la creación de la

⁴⁰ *Ibid.*, p. 13.

⁴¹ Jorge Carpizo, *Derechos Humanos y Ombudsman*, p. 14.

⁴² H. Fix-Zamudio, *Justicia constitucional, Ombudsman y Derechos Humanos*, p. 158.

Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, con base en la iniciativa de ley presentada al Congreso local.

En enero de 1995 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México propuso “el proyecto de adiciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, mediante el cual se otorgaron facultades a los Ayuntamientos para el establecimiento de Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos que atiendan lo relativo a esta materia, en beneficio de la población”.⁴³

En el proyecto de mérito se apuntó la atribución de los ayuntamientos para crear en el ámbito de sus competencias una Coordinación Municipal de Derechos Humanos, dándole al Presidente Municipal la facultad para proponer al Ayuntamiento el nombramiento del titular de la citada Coordinación,⁴⁴ a quien se le otorgarían atribuciones y obligaciones para coordinarse con el Organismo estatal de Derechos Humanos; sin embargo, su función se constriñe únicamente a recibir quejas de la población municipal y a remitirlas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con excepción de las quejas de carácter estrictamente administrativo, en las que se tiene que solicitar la autorización del Organismo local para conciliar diferencias entre los quejosos y la autoridad o servidor público municipal, y con ello resolver en forma expedita el problema planteado.

3. Organismos municipales con competencia para conocer de quejas por violaciones a los Derechos Humanos

El primer antecedente de un *Ombudsman* con facultades exclusivas en el ámbito municipal en México se dio en 1983, cuando el Cabildo del

⁴³ Mireille Roccatti, *Los Derechos Humanos y la experiencia del Ombudsman en México*, p. 158.

⁴⁴ Cf. Carlos Quintana Roldán y Norma D. Sabido Peniche, *Derechos Humanos*, 179.

Ayuntamiento de la ciudad de Colima estableció la figura del Procurador de Vecinos, instancia que recibía e investigaba las inconformidades de la población contra los excesos de la administración municipal. Dicha instancia se inspiró

[...] claramente en la institución escandinava, es el primer caso de la implantación del *Ombudsman* en México a nivel municipal. El titular de la dependencia es el Procurador de Vecinos, designado por el cabildo a propuesta del Presidente Municipal. El artículo segundo del acuerdo le encomienda las siguientes funciones: recibir e investigar las quejas y reclamaciones y proposiciones que presenten los afectados por la actividad de la administración pública local; una vez realizada la investigación, formular recomendaciones a la autoridad respectiva sin carácter imperativo; rendir un informe anual de sus actividades al cabildo, incluyendo sus recomendaciones y las respuestas de las autoridades requeridas, en el que incluirá sugerencias para reformar tanto el procedimiento como las leyes que regulan la actividad de la administración pública local. Un año después se expide la Ley Orgánica Municipal del Estado de Colima, que recoge la misma figura con las características antes descritas.⁴⁵

Sin embargo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Colima que reguló la figura en comento, fue abrogada por la Ley Orgánica del Municipio Libre del 14 de enero de 1995, la cual, a su vez, fue abrogada por la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima publicada el 28 de marzo de 2001, en la cual tampoco se contempla la institución del Procurador de Vecinos.

Por otro lado, en diciembre de 1988, en el Municipio de Querétaro, se creó la Defensoría de los Derechos de los Vecinos, organismo que fue instalado por el propio Ayuntamiento; al respecto, el licenciado Alexei Julio Estrada señala lo siguiente:

El 22 de diciembre de 1988, se publica en el *Periódico Oficial* del Estado de Querétaro el “Reglamento General de la Defensoría de los Derechos de los

⁴⁵ Cf. Magdalena Aguilar Cuevas, *El defensor del ciudadano (Ombudsman)*, pp. 125-126, citado por Alexei Julio Estrada, “El *Ombudsman* en Colombia y en México, una perspectiva comparada”, en *Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica*, núm. 7, p. 29.

Vecinos”, entidad inspirada en la Procuraduría de Vecinos de la ciudad de Colima, que tiene a su cargo recibir e investigar las quejas y denuncias de los ciudadanos que se consideren afectados en sus derechos, por actos u omisiones de las autoridades y funcionarios del municipio (artículo 1o.). El defensor es nombrado por el ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal (artículo 3o.). Se excluyen de su competencia las violaciones respecto de las cuales existan en la legislación municipal medios de impugnación (artículo 6o.). El artículo séptimo establece el procedimiento ante la Defensoría, que debe sujetarse a los principios de intermediación (*sic*), concentración y rapidez. El personal de la entidad tiene acceso a la documentación que requiera, excepto si se considera confidencial, en cuyo caso deberá justificarse la negativa. Las recomendaciones que emita el defensor no tienen carácter imperativo. La Defensoría tiene la obligación de rendir un informe bimestral al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, de la labor realizada, en la cual incluirá recomendaciones que juzgue convenientes para mejorar la administración municipal.⁴⁶

A ese respecto, es menester precisar que la Defensoría de los Derechos de los Vecinos del Municipio de Querétaro tiene sustento jurídico sólo en su Reglamento del 25 de mayo de 1995; sin embargo, dicho ordenamiento jurídico no encuentra técnicamente apoyo ni en la Constitución Política de la entidad federativa ni en la Ley Orgánica correspondiente al municipio, lo que podría hacer presumir la inconstitucionalidad de dicho organismo (véase párrafos subsecuentes en relación con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional número 14/2000, sobre el caso del Ayuntamiento Constitucional de Huajuapán de León, Oaxaca).

En sesión de Cabildo del 18 de enero del 2000, el Ayuntamiento Constitucional de Huajuapán de León, Oaxaca, aprobó el Reglamento Interno por el que estatuyó la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Huajuapán de León, Oaxaca, la cual funcionaba de facto desde el 4 de marzo de 1996, por lo que la Representación Social de la entidad federativa promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional número 14/2000. El 15 de febrero de 2001

⁴⁶ A. J. Estrada, *op. cit.*, p. 31.

nuestro máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del Reglamento de referencia en virtud de que el mismo no tenía sustento jurídico, esto es, la Suprema Corte consideró que sólo el Congreso de la Unión, las Legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podían crear organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos; es decir, el Ayuntamiento de mérito no se apegó al procedimiento establecido por el artículo 112 de la Ley Orgánica de la entidad, pasando por alto el requisito necesario para crear un organismo público, como es el hecho de que éste fuera antes aprobado por el Congreso local.

La resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que sólo pueden crear *Ombudsman* los órganos que la propia Constitución faculta. En el ámbito municipal este supuesto se actualiza en las Legislaturas locales, ya sea a través de una adición a la Constitución de la entidad federativa o de una reforma a la legislación municipal.

Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no prohíbe la creación de *Ombudsman* municipales, sólo establece el procedimiento y las instancias constitucionales para hacerlo.

Por otro lado, en el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, publicada en el *Periódico Oficial* del Gobierno del estado de Nayarit del 4 de agosto de 2001, se encuentran reguladas las Comisiones municipales de Derechos Humanos como organismos auxiliares del municipio.⁴⁷

Asimismo, en el artículo 104 de la ley orgánica en cita, se enumeran las atribuciones que le son conferidas:

- I. Recibir quejas o denuncias y conocer e investigar de oficio de presuntas violaciones de los Derechos Humanos atribuidas a autoridades municipales y a particulares que presten un servicio público municipal concesionado;

⁴⁷ Véase el anexo 9 que contiene un listado de los artículos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que regulan a las Comisiones de Derechos Humanos en Nayarit.

II. Realizar denuncias de oficio o a instancia de cualquier persona ante las Comisiones nacional o estatal de Derechos Humanos, por presuntas violaciones que cometan autoridades federales o estatales;

III. Solicitar a las autoridades municipales señaladas como responsables, informe sobre el asunto sujeto a su investigación. Para dar cumplimiento a la atribución que se precisa en el inciso I, las autoridades municipales estarán obligadas a atender cualquier solicitud de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en el desempeño de sus funciones;

Las autoridades municipales que no atiendan y auxilien en las investigaciones a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, se harán acreedoras a las sanciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en las demás disposiciones jurídicas aplicables dictadas por el Ayuntamiento;

Los particulares que presten servicios públicos municipales concesionados que no colaboren con la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus investigaciones, serán sancionados por la autoridad municipal conforme a derecho;

IV. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, y denuncias y quejas en contra de las autoridades respectivas;

V. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades en los casos de faltas a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno por parte de aquéllos;

VI. Orientar a los particulares en la defensa de sus derechos cuando la queja o denuncia presentada ante ella no sea de su competencia;

VII. Tramitar las inconformidades que mediante los recursos de queja o impugnación promuevan en su contra los quejosos o denunciantes ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, previstos por el artículo 105, fracción X, del presente ordenamiento legal;

VIII. Presentar anualmente un informe al Ayuntamiento sobre el ejercicio de sus atribuciones, mismo que hará público por los medios adecuados;

IX. Formular propuestas de reforma a las disposiciones jurídicas municipales y a las prácticas administrativas que sean de la competencia del Ayuntamiento que redunden en una mejor protección de los Derechos Humanos de la población;

X. Fomentar la cultura de los Derechos Humanos en el municipio;

XI. Coordinarse con organismos estatales y nacionales tendientes a lograr una mejor defensa y promoción de los derechos en nuestro estado; y

XII. Las demás que le confiere el reglamento interno u otras disposiciones aplicables.

En esta Ley Municipal para el Estado de Nayarit se establece el único Sistema Estatal parcial de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos. Actualmente se encuentran en funcionamiento 10 Comisiones Municipales de Derechos Humanos funcionando en los municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Compostela, El Nayar, Huijicori, Ixtlán del Río, Jala, San Blas y Tepic.⁴⁸

⁴⁸ Los Reglamentos Internos de las Comisiones Municipales de Derechos Humanos de Tepic y Compostela se encuentran en los anexos 10 y 11, respectivamente.

V. DIAGNÓSTICO NACIONAL DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES⁴⁹

Este diagnóstico parte de la experiencia tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de las Procuradurías y Comisiones locales de Derechos Humanos. Si bien la Recomendación no es la única vía por la cual los organismos públicos de protección y defensa comprueban la violación de los Derechos Humanos (existe también la conciliación y el allanamiento de la autoridad a las pretensiones del quejoso), sí es la más significativa; por ello, la Recomendación será la base del presente diagnóstico, el cual permitirá observar de manera general cuántas y cuáles son las violaciones a los Derechos Humanos que cometen los servidores públicos municipales. El diagnóstico se divide en dos, primero respecto de la experiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la segunda en cuanto a las Procuradurías y Comisiones locales de Derechos Humanos.

La razón por la que el estudio se apoyó en los documentos recomendatorios es porque su trascendencia es tal que, a pesar de que tengan un carácter no vinculatorio, su resolución está fundada y motivada con objeto de que la autoridad estudie, acepte y subsane la irregularidad que propició que los Derechos Humanos de un gobernado fueran vulnerados.

La Recomendación no deja de ser un documento jurídico legalmente sólido por el hecho de no ser coercitivo, es decir, no requiere que sus

⁴⁹ Las estadísticas y datos contenidos en este apartado fueron compilados por el licenciado Eduardo Zamora Díaz Barriga.

determinaciones se funden en la imposición, ni mucho menos en la coacción, pues habrá que recordar que el *Ombudsman* convence con el uso de la razón y no vence por el uso de la fuerza.

Además, en un documento de esa naturaleza, que tiene como base una reclamación, su fuerza radica en una investigación apoyada en la inspección de campo, en un serio estudio jurídico, así como en su publicación a través de la que se concientiza, educa y regula el comportamiento en instituciones públicas.

1. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a autoridades municipales

El análisis que se ofrece en el presente capítulo sólo representa una parte de las tareas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha desarrollado en 12 años de vida institucional. Se efectuó un recuento de todas aquellas resoluciones (Recomendaciones) que se dirigieron a servidores públicos del ámbito municipal, contemplando dentro de este rubro reclamaciones que fueran consecuencia de los recursos de impugnación o de queja.

Del año 1990 al 2000, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 186 Recomendaciones dirigidas a autoridades municipales, de las cuales 82 se emitieron como consecuencia de recursos de impugnación presentados ante esta Comisión Nacional, lo que equivale al 44%; tal porcentaje indica que, a pesar de no ser la instancia nacional receptora primaria de quejas en contra de autoridades municipales, en segunda instancia se continúa conociendo con un alto índice de recursos ya sea de impugnación o de queja que provienen de las Comisiones o Procuradurías estatales, lo cual indica que aun cuando el Organismo local recomienda, la autoridad municipal persiste en su empeño de violar los Derechos Humanos y no acepta dicha Recomendación, propiciándose así el recurso.

Como se aprecia, la violación a los Derechos Humanos a cargo de autoridades municipales está latente, siendo real la problemática que existe, ya que las violaciones a los derechos fundamentales que la Comisión Nacional ha registrado, por parte de autoridades municipales, son: irregularidades en el sistema penitenciario, 55; deficiente prestación del servicio público, 30; detención arbitraria, 17; abuso de autoridad, 15; homicidio, nueve; desalojo, seis; daños en propiedad ajena, cinco; negativa al derecho de petición, cuatro; lesiones, cuatro; despojo, cuatro; tortura, cuatro; intimidación, tres; daño ecológico, tres; abuso de controles oficiales, tres; amenazas, tres; inconformidad contra resoluciones administrativas, tres; inejecución de sentencias, dos; robo, dos; cobros irregulares, dos; trato cruel y degradante, dos; falsa acusación, una; negativa a indemnizar, una; incumplimiento de orden de aprehensión, una; dilación en el procedimiento administrativo, una; deficiente atención a enfermos, una; negativa de registro, una; allanamiento de morada, una, e inseguridad pública, una.

De acuerdo con las cifras detectadas en el párrafo anterior, los sujetos activos de la violación se pueden dividir en tres grandes rubros: los primeros corresponden a las propias autoridades del ayuntamiento; en segundo término las encargadas de las cárceles municipales, y los terceros son los policías preventivos municipales.

2. Recomendaciones de los Organismos locales de Derechos Humanos dirigidas a autoridades municipales

Para la elaboración del presente apartado se tomaron muestras de los informes rendidos por las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos en las entidades federativas, con excepción del Distrito Federal, Baja California Sur, Aguascalientes y Quintana Roo. Cabe señalar que el balance que el estudio arrojó es aproximado puesto que no se

contó con todos los informes que a lo largo de la vida institucional de las instancias locales se han rendido.

La finalidad del presente rubro es conocer cuál es la tendencia de violaciones a los Derechos Humanos por parte de autoridades de la esfera municipal en las diferentes zonas o entidades federativas del territorio nacional; lo anterior permitirá tener una idea de cuáles son los estados de la República Mexicana en los que la incidencia es mayor, o bien, el tipo de reclamaciones presentadas por el gobernado, para ello, al igual que en el inciso anterior, se tomaron en cuenta los documentos recomendatorios emitidos, ubicando los que hubiesen sido dirigidos a la autoridad de la esfera municipal.

En total, los Organismos locales han emitido 2,648 Recomendaciones a autoridades municipales, lo cual representa, en promedio, 33.38 % de sus Recomendaciones.

Para tener una idea más clara de cuáles son las cifras que el estudio en comento arrojó, se considera que con la tabla siguiente se percibirá la secuencia que de mayor a menor se presentó por entidad federativa. La última columna representa el porcentaje del total de Recomendaciones emitidas.

	<i>Entidad federativa (periodo analizado)</i>	<i>Número de Recomendaciones emitidas por el Organismo local</i>	<i>Porcentaje que representa del total de Recomendacio- nes emitidas a autoridades municipales</i>
1	Guanajuato (1991, 1995-2000)	564	39.83
2	Veracruz (1993-2000)	239	28.37
3	Nuevo León (1993-2000)	165	41.42
4	Puebla (1994-2000)	158	50.28
5	Guerrero (1991-2000)	151	23.33
6	Tamaulipas (1997-1999)	150	33.33

7	Hidalgo (1995-2000)	141	51.00
8	Sinaloa (1994-2000)	138	59.28
9	Chihuahua (1997-2000)	133	40.00
10	México (1997-1998, 2000)	109	41.33
11	Zacatecas (1993-1996, 1998, 2000)	89	52.16
12	Sonora (1992-1999)	81	28.87
13	San Luis Potosí (1993-2000)	74	33.40
14	Tabasco (1998-2000)	72	58.66
15	Morelos (1998-2000)	72	35.66
16	Coahuila (1997, 1999-2000)	57	47.33
17	Michoacán (1996-1999)	56	20.50
18	Jalisco (1998-2000)	37	61.33
19	Chiapas (1993, 1995-1999)	32	8.66
20	Durango (1993-1995, 1997-1999)	30	19.50
21	Oaxaca (1998-2000)	29	32.33
22	Baja California (1991-1992, 1994-2000)	20	22.37
23	Querétaro (1993-1995)	13	28.33
24	Nayarit (1996-2000)	10	13.80
25	Yucatán (1993-1997)	10	23.20
26	Tlaxcala (1999-2000)	6	34.50
27	Colima (1997-1999)	6	21.33
28	Campeche (1994-1999)	6	4.25
		2,648	33.38

VI. REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA FIGURA DEL *OMBUDSMAN* MUNICIPAL EN MÉXICO

A manera de síntesis, podemos señalar que el número de *Ombudsman* en el mundo indica que la institución se ha convertido en una necesidad debido al enorme crecimiento de las actividades administrativas que podrían traer en sí mismas irregularidades e injusticias. Esta situación no es la excepción en el ámbito municipal, sin embargo, el número de Recomendaciones emitidas también pone de manifiesto el cuidado que han puesto los Organismos locales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el respeto de los derechos fundamentales por autoridades municipales.

Posiblemente el éxito de la figura del *Ombudsman* se debe a que los instrumentos administrativos, como son los ejercidos por los órganos de control interno, los recursos administrativos o bien los procedimientos contenciosos administrativos, frente a una organización tan compleja como lo es el Estado, hayan quedado rebasados y resulten insuficientes para proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los gobernados.

Por lo tanto, la figura del *Ombudsman* como medio jurídico previene conflictos entre autoridades administrativas y los particulares que puedan resultar afectados; en el supuesto de la existencia de problemas auxilia en su pronta solución sin que haya necesidad de acudir a la vía judicial y, asimismo, es útil al señalar los defectos de la actividad administrativa, proponiendo los medios para corregirlos, lo que implica que complemente y refuerce la justicia social y administrativa.

A lo largo del presente trabajo se ha demostrado que tanto a nivel nacional como internacional la presencia de la figura del *Ombudsman*

ha sido adoptada y está presente en todos los órdenes de poder, llámense federal, estatal y municipal, o bien, provincial, regional o cantonal.

Por ello, el establecimiento de la figura en comento sería importante en el orden de gobierno municipal de nuestro país, en virtud de que en el Estado de Derecho en el que vivimos la protección de los Derechos Humanos no pueden quedar rezagada y bajo la tutela solamente en los ámbitos federal y local; ello en razón de que, con la reforma constitucional al artículo 115, se requiere que el ámbito municipal sea reforzado y complementado con organismos defensores de Derechos Humanos, cuyo fin será prevenir que la carga administrativa, que en razón de la ampliación de funciones y competencias que la citada reforma trajo consigo, no permita la existencia de violaciones a los derechos e intereses de sus administrados.

Además, es necesario que la figura del *Ombudsman* se incluya en ámbitos municipales, con objeto de que capacite e instruya a los servidores públicos del Ayuntamiento en la materia; que divulgue y difunda cuáles son sus alcances y metas, pero es necesario que primero cuente para ello con rasgos de legitimidad constitucional y después en las leyes secundarias, que le permitan colaborar eficazmente con la administración pública municipal, toda vez que señalaría los errores e irregularidades cometidos por sus funcionarios; controlaría sirviendo de contrapeso al poder público del ayuntamiento; y como organismo antiburocrático supervisaría el buen funcionamiento del gobierno municipal, entre otras funciones.

Un organismo de tal naturaleza no sólo debe de ser receptor de quejas, para luego canalizarlas como en el caso del Estado de México, que aún siendo valiosa su aportación, debido a que puede realizar la conciliación entre el quejoso y la autoridad, resulta insuficiente. Hay que recordar que el *Ombudsman* debe brindar una respuesta inmediata al gobernado y, en su caso, emitir resoluciones.

Una de las razones para establecer el *Ombudsman* municipal es que complementaría la justicia administrativa que se sustenta en el texto

constitucional relativo al párrafo segundo e inciso a) de la fracción II del artículo 115, en el que se establece que:

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

- a) Las bases generales de la administración pública municipal y el procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.⁵⁰

Dentro de los avances encontramos que también se actualizan algunas competencias reconociéndolas como exclusivas, facultándolas con otras funciones y servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, como son la dotación de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, etcétera.

A ese respecto, es menester precisar que se resolvió en favor de los Presidentes Municipales el mando de las policías preventivas municipales, dejando un vínculo de mando de éstas con los gobernadores sólo para los casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

⁵⁰ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 93.

Asimismo, se facultó al Ayuntamiento para expedir su propia normatividad otorgándole autonomía, lo cual le permite fijar las bases de la administración pública municipal y el procedimiento administrativo, en el que se incluyan medios de impugnación; así como los órganos encargados de dirimir controversias administrativas entre el ayuntamiento y los particulares.

De igual forma, destaca el hecho de que los municipios puedan manejar libremente su hacienda fiscal, incorporándose a ésta el pago del impuesto predial del sector paraestatal, así como los bienes públicos utilizados por particulares (concesiones), garantizándoles, además, el derecho de iniciativa en materia tributaria, a efecto de hacer propuestas a la legislatura para que cada municipio en lo individual cuente con todos los elementos de sus contribuciones fiscales.

Como se puede apreciar en los puntos señalados con antelación, existieron modificaciones y adiciones a la reforma en cuestión, en beneficio del municipio y por ende en sus gobernados. Es bien sabido que la administración pública implica redistribución de bienes y servicios a través de innumerables actos de autoridad cuyo objetivo es lograr la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional. Por ello, el ciudadano enfrenta una realidad jurídica bastante compleja, como son actos u omisiones de autoridades o servidores públicos que en no pocas ocasiones lesionan o vulneran sus derechos elementales y por otra parte la abundante reglamentación jurídico-administrativa les puede resultar incomprensible.

Ésa es precisamente una de las razones por las que se considera de suma importancia que en el ámbito municipal exista la figura de un *Ombudsman* que estimule la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos que les competan, que erija a la opinión pública como una fuerza moral que persuada, con objeto de que el ente público corrija omisiones u acciones defectuosas o irregulares cometidas en contra de los derechos del ciudadano, ya sea en forma particular o colectiva.

De lo anterior se infiere que un régimen de Derecho se consolida cuando existe el respeto, la defensa y la protección integral de las libertades y derechos esenciales de la persona humana y, en este rubro, un ente protector de los Derechos Humanos resulta útil, constituyéndose como baluarte para la estabilidad social y como medio para el bienestar social.

Por último, como complemento a la propuesta de reforma antes citada, será necesario instituir campañas de difusión cuyo fin sea divulgar el establecimiento del *Ombudsman* en el ámbito municipal, tanto a la población como a los mismos servidores públicos de los Ayuntamientos. Esto permitirá que gobernantes y gobernados tengan mejor conocimiento de su existencia y de la obligatoriedad que tienen de respetar las disposiciones ya establecidas.

Autoridades facultadas en México para crear la institución del Ombudsman municipal

Es claro que la citada reforma al artículo 115 constitucional otorga mayores facultades al municipio para autorregularse, esto es, le otorga una gran autonomía normativa; no obstante, el mandato constitucional es claro,⁵¹ sólo tres instancias, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para crear la figura del *Ombudsman* en México, y son: el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Lo anterior significa que no es indispensable una nueva reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, obliga a las Legislaturas de los estados a modificar su ordenamiento jurídico vigente, esto es, Constitución local, Ley Orgánica, Código Mu-

⁵¹ Cf. artículos 102, apartado B, y 122, Base Primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

nicipal o su equivalente en el estado para crear la institución del *Ombudsman* en el ámbito municipal. En todo caso, el municipio puede regular a dicha institución y darle forma según sus propias necesidades, ejerciendo así la mencionada autonomía normativa.

De lo antes expuesto se puede inferir que uno de los requisitos, sino es que el más importante, que se debe cubrir para instaurar un organismo de Derechos Humanos al interior del ámbito municipal es la legitimidad, la cual se lograría mediante reformas o adiciones tanto en el marco constitucional del estado como en la Ley Orgánica Municipal respectiva.

VII. CONCLUSIONES

Primera. La institución del *Ombudsman* municipal es una instancia que se encuentra arraigada en 12 países del mundo, con 47 instituciones funcionando, 11 de ellas en México.

Segunda. Existen antecedentes claros de que en el país surgieron primero instancias que funcionaron como *Ombudsman* a nivel municipal, para posteriormente, con la reforma al apartado B del artículo 102 constitucional, crearse el Sistema No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, mediante el cual se busca fortalecer el Estado de Derecho. Actualmente funcionan 11 instituciones municipales en México, 10 en Nayarit y una en Querétaro.

Tercera. Nayarit es el único estado de República que tiene un Sistema No Jurisdiccional Estatal de Derechos Humanos funcionando parcialmente, tomando en cuenta las facultades y atribuciones que tienen las Comisiones municipales de Derechos Humanos, que a diferencia de otras entidades pueden investigar presuntas violaciones a los Derechos Humanos y emitir Recomendaciones directamente a la autoridad cuando así lo considere necesario.

Cuarta. El diagnóstico realizado en el presente trabajo muestra que los servidores públicos municipales sí vulneran los Derechos Humanos en México; igualmente, el diagnóstico realizado es una prueba de que estas violaciones han sido señaladas, en su momento, tanto por las Co-

misiones y Procuradurías locales de Derechos Humanos como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Quinta. La tendencia y el espíritu de la reforma al artículo 115 constitucional están orientados para darle mayor autonomía normativa al municipio en México. En este sentido, un *Ombudsman* municipal sería un excelente complemento de la nueva justicia administrativa municipal.

Sexta. La existencia del *Ombudsman* en el medio municipal es necesaria ya que inhibe la mala conducta de los servidores públicos que son señalados por la opinión pública, siendo ésta el arma poderosa en la que reside su fuerza moral, toda vez que sus Recomendaciones no son coercitivas como las sentencias, pero el peso moral con que cuentan es debido al prestigio y calidad de la institución.

Séptima. Respecto de la instancia facultada para crear el *Ombudsman* municipal, el mandato constitucional es claro, sólo tres instancias, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden hacerlo, y son: el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo anterior significa que no es indispensable una nueva reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, obliga a las Legislaturas de los estados a modificar su ordenamiento jurídico vigente (Constitución local, Ley Orgánica, Código Municipal o su equivalente en el estado) para crear la institución del *Ombudsman* en el ámbito municipal.

VIII. FUENTES

Libros

- AGUILAR CUEVAS, Magdalena, *El defensor del ciudadano (Ombudsman)*. México, UNAM, 1991, citado por Alexei Julio Estrada, *El Ombudsman en Colombia y en México, una perspectiva comparada*. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 7. México, UNAM/ Corte de Constitucionalidad República de Guatemala/Procurador de Derechos Humanos de Guatemala/Centro de Estudios Constitucionales México/Centroamérica, 1994.
- CAIDEN, Gerald E., *International Handbook of the Ombudsman*. Greenwood Press, 1983, citado por Luis Ernesto Salomón Delgado, *El Ombudsman*. Guadalajara, Jal., Universidad de Guadalajara.
- CARPISO, Jorge, *Algunas reflexiones sobre el Ombudsman y los Derechos Humanos*. México, CNDH, 1992. 32 pp.
- CARPISO, Jorge, *Derechos Humanos y Ombudsman*. México, CNDH/IIJ, 1993.
- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO. *Derechos Humanos. Reflexiones*. México, Codhem, 1995.
- COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, *Informe Anual Mayo 1992-Mayo 1993*. México, CNDH, 1993.
- ELMAN, P., “The Israel Ombudsman”, en *Israel Law Revie* (1975), 293-323; J. HIRSCH, “The Genesis of the Israel Public Complaints Commissions”, en *Public Administration* (Jerusalem, 1972), pp. 119-128.

- FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Justicia constitucional, Ombudsman y Derechos Humanos*. México, CNDH, 1997.
- FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Los instrumentos procesales internos de protección de los Derechos Humanos en los ordenamientos de Europa continental y su influencia en otros países”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, año XII, núm. 35, mayo-agosto, 1979.
- FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Protección jurídica de los Derechos Humanos. Estudios comparativos*. México, CNDH, 1999.
- FRAIRÉN GUILLÉN, Víctor, *El Defensor del Pueblo: Ombudsman*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982.
- INDETEC. *Hacienda Municipal*. Revista trimestral, núm. 71, junio, 2000.
- JAMIESON, Roberta, *Ombudsman Institutions around the world, analysis and comparison of a plurality and practice*. Edmonton, Instituto Internacional del Ombudsman, 1997.
- LOKAYUKTA, Misra, *A reflection on Ombudsman its origin in ancient India*. Edmonton, Instituto Internacional del Ombudsman, 1991.
- LÓPEZ DAWSON, Carlos, “El Ombudsman y su relación con las Fiscalías Municipales”, *Revista de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman*. Defensor del Pueblo, núm. 2. [Uruguay], septiembre-diciembre, 1993, pp. 7-8.
- LÓPEZ RÍOS, Pedro, “La administración pública estatal y municipal y los Derechos Humanos”, en *Boletín de Investigaciones Jurídicas*, vol. XII, núm. 46. Guanajuato, abril-junio, 1992.
- MILLS, Michael, *Municipal Government Ombudsman*, presentado en la Conferencia Internacional sobre el Concepto de *Ombudsman*, realizada en Taipei, Taiwan, el 23 de septiembre de 1994.
- QUINTANA ROLDÁN, Carlos, *Derecho municipal*. 3a. ed. México, Porrúa, 1998, p. 640.
- QUINTANA ROLDÁN, Carlos y Norma D. Sabido Peniche, *Derechos Humanos*. 2a. ed. México, Porrúa, 2001.
- ROCCATTI, Mireille, *Los Derechos Humanos y la experiencia del Ombudsman en México*. Toluca, Codhem, 1995.

- RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Jesús, *Estudios sobre Derechos Humanos. Aspectos nacionales e internacionales*. México, CNDH, 1990. 228 pp.
- ROWAT, Donald, *A worldwide survey of Ombudsmen*. Edmonton, Instituto Internacional del Ombudsman, 1997.
- Secretaría de Gobernación. *La autoridad municipal y su compromiso con la democracia*. Centro Nacional de Desarrollo Municipal.
- SEPÚLVEDA, Cesar, “La internacionalización de los derechos del hombre: expansión y movimiento. Algunos obstáculos para su progreso actual”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, año XXI, núm. 61, enero-abril, 1998.
- SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, “Derechos Humanos. ¿Necesidad o moda?”, en *Universidad de México*, vol. XLIX, núm. 516-517. México, enero-febrero, 1994.
- TORRES RAMÍREZ, Alicia, “La lucha por los Derechos Humanos en el municipio libre”, en *Alegatos*. México, núms. 25-26, septiembre, 1993-abril, 1994.

Legislación

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, CNDH, 2001.
- Legislación de Derechos Humanos para el Estado de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 1993.
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
- Centro Estatal de Estudios Municipales. *Compilación Legislativa del Estado de Michoacán*, tt. I-II.

Páginas de internet

- http://www.ci.detroit.mi.us/ombudsman/frecuetly_ asked_ questions.htm (consultada el 18 de julio de 2001).

Ombudsman Ontario, *Municipal Ombudsman and the right of complaint: an overview*: http://www.ombudsman.on.ca/home/municipal_doc.html (consultada el 18 de julio de 2001).

http://ordlink.com/codes/portland/_DATA/TITLE03/Chapter_3_77_OFFICE_OF_THE_OMBUDS/3_77_010_Purpose_.html (consultada el 20 de septiembre de 2001).

http://www.buenosaires.gov.ar/defensoria/sec_defensoria_masdefensores.asp (consultada el 20 de agosto de 2001).

<http://www.ville.montreal.qc.ca/mediateur/english/mission/office.htm> (consultada el 27 de julio de 2001).

http://www.buenosaires.gov.ar/defensoria/documen1/la_defensoria.htm (consultada el 20 de septiembre de 2001).

http://www.ombud.gov.bc.ca/links/int_ombuds/Ombdir_a-c.html (consultada el 24 de septiembre de 2001).

<http://www.bern.ch/datenschutz/ombudsmann.cfm> (consultada el 20 de septiembre de 2001).

<http://www.stadt-winterhur.ch/politik.asp?Sprache=E&Netz=SN&Thema=Politik&Seite=10000> (consultada el 24 de agosto de 2001).

ANEXOS

ANEXO 1
KING COUNTY CHARTER

Article 2, Section 260. Office of Citizen Complaints

The county council shall establish by ordinance an office to receive complaints concerning the operation of county government and shall grant it sufficient power to permit it quickly and efficiently to investigate and to make and publicize recommendations concerning its findings, including the power to subpoena witnesses, documents and other evidence and to administer oaths. The subpoena power of the office of citizen complaints shall be limited to matters under written complaint by a citizen of the county, and any witness shall have the right to be represented by counsel. Any individual who is the subject of a complaint shall have the right to present witnesses in his own behalf.

Chapter 2.52
KING COUNTY OFFICE
OF CITIZEN COMPLAINTS/TAX ADVISOR

Sections:

2.52.010 Definitions. As used in this chapter, the term:

A. “Administrative agency” means any department, office or other governmental unit, or any employee of King County acting or purporting to act by reason of a connection with the county; but “administrative agency” does not include:

1. Any court or judge or appurtenant judicial staff,
2. The members or staffs of the county council,
3. The King County executive or his respective personal staff,
4. The county prosecuting attorney or his staff. For purposes of this chapter “administrative agency” shall specifically include the Board of Equalization/Appeals.

B. “Administrative act” includes every action (such as decisions, omissions, recommendations, practices, or procedures) of an administrative agency. (Ord. 11107 § 2, 1993: Ord. 5869 § 1, 1982: Ord. 473 § 1, 1970).

2.52.020 Establishment of office. The King County office of citizen complaints/tax advisor is established. (Ord. 11107 § 3, 1993: Ord. 5869 § 2, 1982: Ord. 473 § 2, 1970).

2.52.030 Appointment of director. The director of the office of citizen complaints/tax advisor shall be appointed by a majority of the members of the county council. (Ord. 11107 § 4, 1993: Ord. 5869 § 4, 1982).

2.52.040 Qualifications. The director shall be a registered voter of the United States, shall hold a degree from an accredited college or its equivalent in service to government, shall have a working knowledge of legal and administrative procedures, and shall have experience, and/or knowledge in local government commensurate to the powers of the office. During the term of which he is appointed, he shall be ineligible to hold any other public office of employment. He shall not be a candidate for any public office for a period of two years following the completion of his term as director of the King County office of citizen complaints/tax advisor. The director shall not be included in the classified civil or career service of the county. (Ord. 11107 § 5, 1993: Ord. 5869 § 5, 1982: Ord. 473 § 4, 1970).

2.52.050 Term of office. The director shall serve for a term of five years, unless removed by a vote of two-thirds of the members of the county council upon their determination that he has become incapacitated or has been guilty of neglect of duty, misconduct or political activity. The council may appoint an interim director pending the appointment of a new director whenever the term of the director has expired or the office otherwise becomes vacant. (Ord. 10340 § 1, 1992: Ord. 5869 § 6, 1982: Ord. 473 § 5, 1970).

2.52.080 Organization of office. A. The director shall with concurrence of the council, appoint a tax advisor. The tax advisor shall not be included in the classified civil or career service of the county.

B. The director may with concurrence of the council select, appoint, and compensate, within the amount available or budgeted by appropriation, such other assistants and employees as he may deem necessary to discharge his responsibilities under this chapter. Such assistants and employees shall not be included in the classified civil or career service of the county.

C. The director may delegate to other members of his staff any of his authority or duties under this chapter except this power of delegation and the duty formally to make recommendations to administrative agencies or reports to the King County executive and/or the county council. (Ord. 11107 § 6, 1993: Ord. 5869 § 9, 1982: Ord. 473 § 8, 1970).

2.52.090 Powers. The director shall have the following powers:

A. To investigate, on complaint or on his own, any administrative act of any administrative agency;

B. To prescribe the methods by which complaints are made, received and acted upon; he may determine the scope and manner of investigations to be made; and, subject to the requirements of this chapter, to determine the form, frequency and distribution of his conclusions and recommendations;

C. To request and he shall be given by each administrative agency the assistance and information he deems necessary for the discharge of his responsibilities; he may examine the records and documents of all administrative agencies; and he may enter and inspect premises within administrative agencies' control;

D. To administer oaths and hold hearings in connection with any matter under inquiry;

E. To issue a subpoena to compel any person to appear, give sworn testimony or produce documentary or other evidence reasonable in scope and generally relevant to a matter under inquiry; however, the subpoena power shall be limited to matters under written complaints by a citizen of the city or county;

F. To undertake, participate in, or cooperate with general studies or inquiries, whether or not related to any particular administrative agency or any particular administrative act, if he believes that they may enhance knowledge about or lead to improvements in the functioning of administrative agencies.

G. To investigate and enforce the provisions of the Code of Ethics, K.C.C. Ch. 3.04, pursuant to the terms thereof.

H. To provide advice to any person liable for payment of property taxes in King County, including the process for appealing property tax assessments and other matters related to property taxes. (Ord. 11107 § 7, 1993; Ord. 9704 § 11, 1990; Ord. 473 § 9, 1970).

2.52.100 Matters appropriate for investigation. A. In selecting matters for his attention, the director shall address himself particularly to an administrative act that might be:

1. Contrary to law or regulation;
2. Unreasonable, unfair, oppressive, or inconsistent with the general course of an administrative agency's functioning;
3. Arbitrary in ascertainment of facts;

4. Improper in motivation or based on irrelevant considerations;
5. Unclear or inadequately explained when reasons should have been revealed;
6. Inefficiently performed; or
7. Otherwise objectionable.

B. The director also may recommend strengthening procedures and practices of administrative agencies. (Ord. 473 § 10, 1970).

2.52.110 Action on complaints. A. The director shall receive complaints from any source concerning any administrative act. He shall conduct a suitable investigation into the subject matter of the complaint within a reasonable time, unless he believes that:

1. The complainant has available to him another remedy or channel of complaint which he could reasonably be expected to use;
2. The grievance pertains to a matter outside the power of the office of citizen complaints/tax advisor;
3. The complainant's interest is insufficiently related to the subject matter;
4. The complaint is trivial, frivolous, vexatious or not made in good faith;
5. The complaint has been too long delayed to justify present examination of its merit.

B. After completing his consideration of a complaint (whether or not it has been investigated) the director shall suitably inform the complainant and the administrative agency or agencies involved.

C. A letter to the director of the office of citizen complaints/tax advisor from a person in a place of detention or in a hospital or other institution under the control of an administrative agency shall be for-

warded immediately, unopened, to the director. (Ord. 11107 § 8, 1993: Ord. 473 § 11, 1970).

2.52.120 Right to present witnesses - Consultation with agency. A. Any individual who is the subject of a complaint shall have the right to present witnesses and other evidence in his own behalf prior to disclosure of any conclusions or recommendations by the director.

B. Before publishing a conclusion or recommendation that criticizes an administrative agency or any person, the director shall consult with the agency or person and shall disclose fully the critical findings he intends to publish. (Ord. 473 § 12, 1970).

2.52.130 Recommendations. A. If, having considered a complaint and whatever material he deems pertinent, the director is of the opinion that an administrative agency should:

1. Consider the matter further;
2. Modify or cancel an administrative act;
3. Alter a regulation or ruling;
4. Explain more fully the administrative act in question; or
5. Take any other step, he shall state his recommendations to the administrative agency. If the director so requests, the agency shall inform him, within the time he has specified, about the action taken on his recommendations or the reasons for not complying with them.

B. If the director believes that an administrative action has been dictated by laws whose results are unfair or otherwise objectionable, he shall bring to the attention of the council his views concerning desirable legislative change. (Ord. 5869 § 10, 1982: Ord. 473 § 13, 1970).

2.52.140 Publication of recommendations. The director may publish his conclusions, recommendations and suggestions by transmitting them to

the county executive, the county council or to any appropriate committee of the council, the press and others who may be concerned. When publishing an opinion criticizing an administrative agency or person, the director, unless excused in writing by the agency or individual affected, shall include such statement or document that may have been made available to him by way of explaining past conduct or present rejection of the director's proposals. The director shall not publish any interim or confidential reports. (Ord. 5869 § 11, 1982: Ord. 473 § 14, 1970).

2.52.150 Written reports. In addition to whatever reports he may make from time to time, the director on the fifteenth day of January, May and September of each year shall report to the county council concerning the exercise of his functions during the preceding calendar period. In discussing matters with which he has dealt, the director need not identify those immediately concerned if to do so would cause unnecessary hardship. Insofar as the report may criticize named agencies or persons, it must also include their replies to the criticism. (Ord. 5869 § 12, 1982: Ord. 473 § 15, 1970).

2.52.160 Disciplinary action against public personnel. If the director has reason to believe that any public official, employee or other person has acted in a manner warranting criminal or disciplinary proceedings, he shall refer the matter to the appropriate authorities. (Ord. 473 § 16, 1970).

2.52.170 Rights and duties of witnesses - Enforcement of subpoenas.
A. A person required by the director to provide information shall be paid the same fees and allowances, in the same manner and under the same conditions, as are extended to witnesses whose attendance has been required in the courts of this state, excepting that city or county employees who are receiving compensation for the time that they are witnesses shall not be paid the set fees and allowances.

B. A person who, with or without service of compulsory process, provides oral or documentary information requested by the director shall be accorded the same privileges and immunities as are extended to witnesses in the courts of this state.

C. Any witness in a proceeding before the office of citizen complaints/tax advisor shall have the right to be represented by counsel.

D. If a person fails to obey a subpoena, or obeys a subpoena but refuses to testify when requested concerning any matter under examination or investigation at the hearing, the director may petition the Superior Court of King County for enforcement of the subpoena. The petition shall be accompanied by a copy of the subpoena and proof of service, and shall set forth in what specific manner the subpoena has not been complied with, and shall ask an order of the court to compel the witness to appear and testify before the office of citizen complaints/tax advisor. The court upon such petition shall enter an order directing the witness to appear before the court at a time and place to be fixed in such order and then and there to show cause why he has not responded to the subpoena or has refused to testify. A copy of the order shall be served upon the witness. If it appears to the court that the subpoena was properly issued and that the particular questions which the witness refuses to answer are reasonable and relevant, the court shall enter an order that the witness appear at the time and place fixed in the order and testify or produce the required papers and on failing to obey the order the witness shall be dealt with as for a contempt of court. (Ord. 11107 § 9, 1993; Ord. 473 § 18, 1970).

Chapter 3.04
EMPLOYEE CODE OF ETHICS¹

Sections:

- 3.04.010 Code of ethics.
- 3.04.015 Policy.
- 3.04.017 Definitions.
- 3.04.020 Just and equitable treatment.
- 3.04.030 Conflict of interest.
- 3.04.035 Conflict of interest - former employees and members of county boards and commissions.
- 3.04.037 Duty to notify supervisor.
- 3.04.040 Board of equalization appeals.
- 3.04.050 Statement of financial and other interests.
- 3.04.055 Complaints, Investigations.
- 3.04.057 Appeal.
- 3.04.060 Penalties.
- 3.04.070 Constitutionality.
- 3.04.080 Board of ethics - Membership and terms.
- 3.04.090 Board of ethics - Purpose.
- 3.04.100 Board of ethics - Authority.
- 3.04.110 Board of ethics - Income disclosure.
- 3.04.120 Disclosure of interests by consultants.
- 3.04.130 Authorization to Implement Procedures.
- 3.04.140 Forwarding to District and Superior Courts.
- 3.04.150 Severability.
- 3.04.160 Effective Date.

¹.[For regulations prohibiting discrimination in employment by contractors, subcontractors, or vendors, see K.C.C. chapter 12.16.]

3.04.010 Code of ethics. There is established a code of ethics for all county officials and employees to provide guidance for public employees in the event of conflicts and to prevent conflicts of interest. (Ord. 1308 § 2, 1972).

3.04.015 Policy. It is the policy of King County that the private conduct and financial dealings of public officials and employees and of candidates for public office shall present no actual or apparent conflict of interest between the public trust and private interest.

Public confidence in government is essential and must be sustained by establishing and enforcing rules to assure the impartiality and honesty of officials and employees in all public transactions and decisions. Each affected agency of county government should inform its employees of the provisions of this chapter and strive to effectively enforce its requirements by seeking appropriate assistance from the office of citizen complaints, the board of ethics and the prosecuting attorney when considering and acting upon allegations of misconduct. (Ord. 9704 § 1, 1990).

3.04.017 Definitions. All words shall have their ordinary and usual meanings except those defined in this section which shall have, in addition, the following meanings. In the event of conflict, the specific definitions set forth in this section shall presumptively, but not conclusively, prevail.

A. “Accomplice” means a person who with knowledge that an action will promote or facilitate the commission of a crime or violation of an ordinance:

1. Solicits, commands, encourages, or requests another person to commit it; or
2. Aids or agrees to aid such other person in planning or committing it.

B. “Compensation” means anything of economic value, however designated, which is paid, granted or transferred, or is to be paid, granted or transferred for, or in consideration of, personal services to any person.

C. “County action” means any action on the part of the county, including, but not limited to:

1. Any decision, determination, finding, ruling or order; and
2. Any grant, payment, award, license, contract, transaction, sanction, or approval, or the denial thereof, or the failure to act with respect thereto. “County action” shall not include actions of the county’s judicial branch but shall include employees of the department of judicial administration.

D. “County employee” or “employee” means any individual who is appointed as an employee by the appointing authority of a county agency, office, department, council, board, commission or other separate unit or division of county government, however designated, but does not include employees of the county’s judicial branch. The term “county employee” also includes county elected officials and members of county boards, commissions, committees, or other multi-member bodies, but does not include officials or employees of the county’s judicial branch but does include employees of the department of judicial administration.

E. “Department” means:

1. In the executive branch, an executive department or administrative office which reports to the executive or the deputy county executive, as applicable;
2. The department of assessments;
3. The office of the prosecuting attorney;
4. In the legislative branch, the council together with any subordinate legislative branch agency;

5. The department of judicial administration.

F. “Doing business with the county” or “transactions with the county” means to participate in any proceeding, application, submission, request for ruling or other determination, contract, claim, case, or other such particular matter which the county employee or former county employee in question believes, or has reason to believe:

1. Is, or will be, the subject of county action; or
2. Is one to which the county is or will be a party; or
3. Is one in which the county has a direct and substantial proprietary interest.

G. “Gift” means anything of economic value, but shall not include campaign contributions regulated by the provisions of Chapter 42.17 RCW, the charter and ordinances implementing them, informational materials exclusively for official or office use, memorials, trophies, and plaques of no commercial value, gifts of \$20.00 or less for bona fide, non-recurring, ceremonial occasions or any gifts which are not used and which within thirty days after receipt are returned to the donor, or donated to a charitable organization without seeking a tax deduction.

H. “Immediate family” means a county employee’s spouse, domestic partner, employee’s child or the child of an employee’s domestic partner, and other dependent relatives if living in his or her household.

I. “*Ombudsman*” means the director of the office of citizen complaints established pursuant to Section 260 of the charter and K.C.C. 2.52, or his or her designee.

J. “Participate” means, in connection with a transaction involving the county, to be involved in a county action personally and substantially as a county employee either directly, or through others through approval, disapproval, decision, recommendation, the rendering of advice, investigation, or otherwise.

K. “Person” means any individual, partnership, association, corporation, firm, institution, or other entity, whether or not operated for profit. The term does not include governmental units of the State of Washington or the United States unless so specified.

L. “Respondent” means the person against whom a complaint is filed or an investigation is conducted.

M. “Retaliatory action” means any action by a supervisor or other employee which is intended to embarrass or to harass any person as a result of such person having filed a written complaint with the office of citizen complaints or having raised privately or publicly any concern or question regarding an actual or apparent violation of the provisions of this chapter.

N. “Thing of value” means anything of tangible worth which is not compensation or a gift. (Ord. 12014 § 2, 1995).

3.04.020 Just and equitable treatment. A. Use of Public Property. No county employee shall request or permit the use of county-owned vehicles, equipment, materials or property or the expenditure of county funds for personal convenience or profit. Use or expenditure is to be restricted to such services as are available to the public generally or for such employee in the conduct of official business.

B. Obligations to Citizens. No county employee shall grant any special consideration, treatment or advantage beyond that which is available to every other citizen.

C. Except as authorized by law and in the course of his or her official duties, no county employee shall use the power or authority of his or her office or position with the county in a manner intended to induce or coerce any other person to provide such county employee or any other person with any compensation, gift, or other thing of value directly or indirectly.

D. No county employee may ask for or receive, directly or indirectly, any compensation, gift, or thing of value, or promise thereof, for per-

forming or for omitting or deferring the performance of any official duty, or action by the county other than the compensation, costs or fees provided by law.

E. Campaign activities. County employees are encouraged to participate in the political process on their own time and outside of the workplace by working on campaigns for the election of any person to any office or for the promotion of or opposition to any ballot proposition, but shall not use or authorize the use of the facilities of King County for such purposes except as authorized by the provisions of RCW 42.17.130. (Ord. 9704 § 3, 1990: Ord. 1308 § 3, 1972).

3.04.030 Conflict of interest. No county employee shall engage in any act which is in conflict with the performance of official duties. A county employee shall be deemed to have a conflict of interest if the employee directly or indirectly:

A. Receives or has any financial interest in any purchase, sale or lease to or by the county of any service or property when such financial interest was received or obtained with the prior knowledge that the county intended to purchase, sell or lease such property or service;

B. Is beneficially interested, directly or indirectly, in any contract, sale, lease, option or purchase that may be made by, through, or under the supervision of the employee, in whole or in part, or accepts, directly or indirectly, any compensation, gift or thing of value from any other person beneficially interested therein;

C. Accepts or seeks for others, directly or indirectly, any employment, travel expense, service, information, compensation, gift or thing of value on more favorable terms than those granted to other county employees or the public generally, from any person, doing business, or seeking to do business with the county for which the employee has responsibility or with regard to which he or she may participate, provided that this subsection shall not apply to the receipt by elected officials, or by employees who are supervised directly by an elected official, of meals,

refreshments or transportation within the boundaries of the county when given in connection with meetings with constituents or meetings which are informational or ceremonial in nature;

D. Accepts, directly or indirectly, any gift, favor, loan, retainer, entertainment, travel expense, compensation or other thing of value from any person doing business or seeking to do business with the county when such acceptance may conflict with the performance of the employee's official duties.

A conflict shall be deemed to exist where a reasonable and prudent person would believe that the gift, compensation, thing of value, or more favorable terms, was given for the purpose of obtaining special consideration or to influence county action.

The financing of the conduct of county election campaigns shall continue to be governed by the provisions of RCW 42.17 and the provisions of the charter and ordinances;

E. Participates in, influences, or attempts to influence, directly or indirectly, the selection of, or the conduct of business or a transaction with a person doing or seeking to do business with the county if the employee has a financial interest in or with said person;

F. Discusses or accepts an offer of future employment with any person doing or seeking to do business with the county if either:

1. The employee knows or has reason to believe that the offer of employment was or is intended, in whole or in part, directly or indirectly, as compensation or reward for the performance or nonperformance of a duty by the employee during the course of county employment or to influence county action pertaining to the business, or
2. The employee has responsibility for a matter upon which the person is doing or seeking to do business with the county unless the employee has first disclosed in writing to his or her appointing authority that the employee intends to discuss future

employment with a specific person and the appointing authority has designated, in a memorandum filed with the *Ombudsman* and the clerk of the council, a method of providing for an alternative decisionmaker with regard to matters involving such person for which the employee otherwise would have responsibility;

G. Within one year of entering county employment awards a county contract or participates in a county action benefiting a person that formerly employed him or her provided, that participation other than contract award may be authorized in a memorandum by the appointing authority following written disclosure by the affected employee and that such authorization shall be filed with the *Ombudsman* and the clerk of the council;

H. Is an employee, agent, officer, partner, director or consultant of any person doing or seeking to do business with the county, unless such relationship has been disclosed as provided by this chapter;

I. Engages in or accepts compensation, employment or renders services for any person or a governmental entity other than the county when such employment or service is incompatible with the proper discharge of official duties or would impair independence of judgment or action in the performance of official duties. In addition, the following employees must obtain the prior written consent of their highest ranking supervisor authorizing either new or continued employment, or the acceptance of any compensation or any thing of value for services performed outside King County government:

1. The deputy county executive, the chief officer of each executive department or administrative office as defined by the provisions of the charter, the manager of each division of such department or office, and all persons who report directly to such individuals;

2. All non-elected council employees, provided that the personal staff of each individual councilmember shall obtain such consent from such councilmember;
3. All non-elected employees of the prosecuting attorney;
4. All non-elected employees of the department of judicial administration;
5. All non-elected employees of the department of assessments.

If such employment or service is deemed by the highest-ranking supervisor to pose a conflict of interest, the employee immediately shall divest such employment and failure to do so shall be grounds for dismissal;

J. Enters into a business relationship outside county government with any other employee for whom he or she has any supervisory responsibility;

K. Enters into a business relationship outside county government with any person with regard to a matter for which the employee has responsibility as a county employee;

L. Appears on behalf of a person before any regulatory governmental agency, or represents a person in any action or proceeding against the interest of the county in any litigation to which the county is a party, unless the employee has a personal interest in the litigation and this personal interest has been disclosed to the regulatory governmental agency or adjudicating individual or body. A county council member may appear before regulatory governmental agencies on behalf of constituents in the course of his or her duties as a representative of the electorate or in the performance of public or civic obligations; however, no official or employee shall accept a retainer or compensation, or any gift or thing of value that is contingent upon a specific action by a county agency;

M. Directly or indirectly possesses a substantial or controlling interest in any person which does or seeks to do business with the county,

without disclosing such interest as provided by this chapter. A substantial interest is an interest that exceeds one-tenth of one percent of the outstanding securities of the person; or, if the interest is in an unincorporated business concern, exceeds one percent of the net worth of such concern; or the financial interest of a person exceeds five percent of the net worth of the employee and his or her immediate family;

N. As a county council member has a financial or other private interest in any legislation or other matter coming before the council, and fails to disclose such an interest on the records of the county council. This provision shall not apply if the county council member disqualifies himself or herself from voting by stating the nature and extent of such interest. Any other employee who has a financial or other private interest, and who participates in an action or proposed action of the county council and fails to disclose on the records of the county council the nature and extent of such interest, shall be deemed in violation of this chapter;

O. Has an interest in any property being considered for revaluation by the county board of appeals and equalization or has a personal interest or connection with another person's petition for revaluation while:

1. An elected county official,
2. Deputy county executive and his/her confidential secretary,
3. The executive's administrative assistants and office manager,
4. County councilmembers' executive secretaries,
5. County administrative officer, his/her administrative assistants and his/her confidential secretary,
6. Chief officer of each executive department, his/her administrative assistants, and his/her confidential secretary,
7. Chief officer of each administrative office, his/her administrative assistants, and his/her confidential secretary,
8. Council administrator, his/her administrative assistants, and his/her secretary,

9. The *Ombudsman* and his/her staff,
10. All employees of the department of assessments,
11. All employees assigned to the board of equalization and/or the board of appeals,
12. Any other county employee who has direct contact with the board of appeals and equalization in the carrying out of his or her duties, and
13. Member of the county board of appeals and/or board of equalization,
14. Clerk of the council, his/her secretaries;

All persons listed in subsections 1-14 above, who wish to appeal to the county board of equalization on a matter of property revaluation shall be governed by the procedure set forth in K.C.C. 3.04.040;

P. As an appointive member of a board or commission, has a close relative serving on the same board or commission. For the purposes of this subsection, close relative is defined as:

Husband	Wife
Father	Father-in-law
Mother	Mother-in-law
Brother	Brother-in-law
Sister	Sister-in-law
Son-in-law	Daughter-in-law
Niece	Nephew
Grandparent	Grandchild
Uncle	Aunt
Child	Child of domestic partner
Domestic partner	

In addition, the relatives of a domestic partner shall be considered close relatives to the same extent such relatives would be included in this paragraph if the employee and the domestic partner were married.

Q. Discloses or uses for the personal benefit of the employee or his or her immediate family any information acquired in the course of official duties which is not available as a matter of public knowledge or public record;

R. Acts as an accomplice in any act by an immediate family member which, if such act were performed by the employee would be prohibited by the provisions of paragraphs A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, O or Q of this section; provided, however, that it shall not be a conflict of interest for such family member to enter into a bona-fide contract of employment which is not intended to influence the action of the county employee;

S. The provisions of paragraphs B, E, and N of this section are not violated by the possession by an employee of a financial interest in a person or other entity which is not a substantial interest as defined by paragraph M of this section. (Ord. 12014 § 3, 1995).

3.04.035 Conflict of Interest - former employees and members of county boards and commissions. A. A conflict of interest shall be deemed to exist if any individual who has served as a member of a county board or commission, does within a period of two years after the termination of such service, appear before such board or commission, or receives compensation for any services rendered on behalf or in assistance of any person in relation to any action with respect to which such individual was directly concerned and in which he or she personally participated, either directly or indirectly, during the period of his or her service. The foregoing will also apply during the same period of time to any individual who is a partner, associate, or member of a person with which the former board or commission member has a financial interest;

B. All other county employees are prohibited from attempting to influence for compensation their former departments within one year after termination of county employment: provided, that such prohibition shall not apply to former deputy prosecuting attorneys with respect to their representation of defendants in criminal proceedings; and, provided further that such prohibition shall not apply to former career service employees whose termination of county employment is solely the result of a reduction in force due to lack of work, lack of funds or considerations of efficiency so long as such former employee does not participate in work related to any application, permit, approval or contract on which, while a county employee, he or she personally participated or acquired information in the course of official duties which is not available as a matter of public knowledge or public record. For two years after leaving the county's employ, former employees are required to disclose past county employment prior to participation in any county action;

C. No former county employee may assist any person for compensation or share in compensation received by any person on matters concerning which the former employee is prohibited from participating personally. (Ord. 10841 § 1, 1993: Ord. 9704 § 5, 1990: Ord. 6144 § 2, 1982).

3.04.037 Duty to notify supervisor. Any employee who becomes aware that he or she may have a potential conflict of interest which arises in the course of his or her official duties shall notify in writing his or her supervisor or appointing authority of such potential conflict.

Upon receipt of such notification the supervisor or appointing authority shall take action to resolve the potential conflict of interest, including but not limited to designating within a reasonable time an alternative employee to perform the duty which is involved in the potential conflict. The disposition of the potential conflict shall be stated in writing in files maintained by the supervisor or official. The supervisor or

official may request an advisory opinion from the board of ethics before disposing of such potential conflict. (Ord. 11185 § 3, 1993: Ord. 9704 § 8, 1990).

3.04.040 Board of Equalization Appeals. All persons deemed to have a conflict of interest, pursuant to Section 3.04.030(O), and wishing to appeal to the county board of equalization shall be governed by the following procedure;

The appeal shall be automatically denied by the county board of equalization without hearing and a minute entry shall be made. The petitioner may then take action to appeal the decision of the county board of equalization to the State Board of Appeals in accordance with RCW 84.08.130.

However, the Board of Equalization may grant a change of venue to a Board of Equalization of another county, as provided in Title 2, K.C.C., in lieu of automatic denial, when:

A. A quorum cannot be achieved due to members of the board disqualifying themselves because of conflicts of interest or the appearance of fairness doctrine; or

B. When equalization is the basis for an appeal by a member of the board, assistants to the board, or any member of the county governmental authority or his or her own property or on property in which that person has an interest. (Ord. 11185 § 4, 1993: Ord. 6411, 1983: Ord. 1308 § 5, 1972).

3.04.050 Statement of financial and other interests. A. All candidates for county elective office, except for judicial candidates, and nominees for appointment to county boards and commissions, within two weeks of becoming a candidate or nominee, and all elected officials who are defined as county employees under K.C.C. 3.04.017, paid in whole or in part by county funds shall file with the division of records and elections a code of ethics statement of financial and other interests as

defined in this section. These requirements may be satisfied by filing with the division of records and elections a copy of the report required to be filed by RCW 42.17.240, if this report contains an original signature of the person filing the report. The division of records and elections shall forward a copy of such statements, reports and forms to the board of ethics within 10 days of their receipt.

B. Within ten days of employment or appointment and on or before April 15 of each year thereafter, the following employees shall file a written statement of financial and other interests, as defined in this section, with the board of ethics: all employees appointed by the county executive; all employees appointed by the deputy county executive or department directors and who are subject to the approval of the county executive; all employees of the council; and such additional employees as may be determined in accordance with criteria adopted by the board of ethics under subsection C of this section.

C. The board of ethics shall adopt by rule criteria for determining which employees, in addition to those designated in subsection B of this section, are required to complete and file statements of financial and other interests. The criteria must consider the association between the duties and responsibilities of employees and the conflict of interest provisions in K.C.C. 3.04.030.

D. The statement of financial and other interests required to be filed under this section must include the following information of which the employee has, or reasonably should have, knowledge for the reporting year:

1. Compensation, gifts and things of value:
 - a. the name of each person engaged in a transaction, as defined by K.C.C. 3.04.017F, with King County in which the employee may participate or has responsibility for, from whom the employee or a member of the employee's immediate family received any compensation, gift or thing of value; and

- b. the name of the individual who received the compensation, gift or thing of value and the individual's relationship to the employee;
2. Financial interests:
 - a. the name of each person engaged in a transaction, as defined by K.C.C. 3.04.017F, with King County in which the employee may participate or has responsibility for, in whom the employee or a member of the employee's immediate family possessed a financial interest; and
 - b. the name of the individual who possessed the financial interest and the individual's relationship to the employee;
3. Positions:
 - a. the name of each person engaged in a transaction, as defined by K.C.C. 3.04.017F, with King County in which the employee may participate or has responsibility for, with whom the employee or a member of the employee's immediate family held a position;
 - b. the name of the individual who held the position and the individual's relationship to the employee; and
 - c. the title of the position; and
4. Real property:
 - a. real property, listed by street address, assessor parcel number or legal description that was either involved in or the subject of an action by King County, in which the employee or a member of the employee's immediate family possessed a financial interest;
 - b. the name of the individual who possessed the financial interest and the individual's relationship to the employee; and
 - c. the name of the King County department involved in the transaction.

Property for which the only county action was valuation for tax purposes does not have to be reported except by those employees of the

department of assessments and the board of appeals who are required to file a report. The use of the individual made of the real property, such as recreation, personal residence or income, does not have to be reported.

E. For purposes of the statements of financial and other interests required to be filed annually, the “reporting year” means the preceding calendar year. For purposes of the statements of financial and other interests to be filed within ten days of employment or appointment, the “reporting year” means the preceding twelve calendar months.

F. An individual filing a statement of financial affairs under subsection A of this section shall swear that the statement is a complete copy of the statement filed under state law and that the information contained in the statement is true and accurate. A county employee filing a statement of financial and other interests under subsection B of this section shall swear that the information in the statement is true and accurate.

G. The financing of election campaigns shall continue to be governed by other applicable local, state, and federal laws, and not by the provisions of this chapter.

H. Filing of the written statement of financial and other interests, as defined in this section, does not relieve the employee of the duty to notify his or her supervisor of a potential conflict of interest as required by K.C.C. 3.04.037.

I. The board may adopt rules and regulations by which affected employees may request suspension or modification of the requirements to disclose financial and other interests set forth in this section if the literal application of the requirements would cause a manifestly unreasonable hardship and the suspension or modification would not frustrate the purposes of this chapter.

J. The board of ethics may adopt necessary and appropriate rules, regulations and forms related to completing, filing, maintaining and disclosing statements of financial and other interests under this section. The board, if adopting the rules, regulations and forms, shall adopt them

as provided in K.C.C. chapter 2.98. (Ord. 13657 § 1999: Ord. 9704 § 6, 1990: Ord. 4808 § 1, 1980: Ord. 2294 § 1, 1975: Ord. 2184 § 2, 1974: Ord. 1308 § 6, 1972).

3.04.055 Complaints, Investigations. A. It shall be the responsibility of the *Ombudsman* to investigate and report apparent criminal violations of this chapter to the appropriate law enforcement authorities and to enforce this ordinance according to the powers granted herein;

B. Complaints alleging a violation of any of the provisions of this chapter shall be filed with the *Ombudsman*. Any such complaint shall be in writing, verified and signed by the complainant. The complainant may state in writing whether the complainant wishes his or her name not to be disclosed pursuant to the provisions of RCW 42.17.310(e). The complaint shall describe the basis for the complainant's belief that this chapter has been violated;

C. Upon receipt of a complaint meeting the requirements of subsection B of this section, the *Ombudsman* shall cause to be served or mailed, by certified mail, return receipt requested, a copy of the complaint to the person alleged to have violated this chapter within twenty days after the filing of said complaint, and shall promptly make an investigation thereof;

D. The investigation by the *Ombudsman* shall be directed to ascertain the facts concerning the violation or violations of this chapter alleged in the complaint and shall be conducted in an objective and impartial manner and in furtherance of such investigation the *Ombudsman* is authorized to use the subpoena power to compel sworn testimony from any person and require the production of any records relevant or material to the investigation except information which is legally privileged or otherwise required by law not to be disclosed;

E. During the investigation, the *Ombudsman* shall consider any statement of position or evidence with respect to the allegations of the complaint which the complainant or respondent, wishes to submit;

F. The results of the investigation shall be reduced to written findings of fact and the finding shall be made that there either is or is not reasonable cause for believing that the respondent has violated one or more of the provisions of this chapter.

G. If a finding is made that there is no reasonable cause, said finding shall be served or mailed, by certified mail, return receipt requested, to the complainant and the respondent, and a copy shall be provided to the board of ethics;

H. If the finding is made that reasonable cause exists to believe that the respondent has violated one or more of the provisions of this chapter, the *Ombudsman* shall prepare an order to that effect, copies of which shall be served or mailed, by certified mail, return receipt requested, to the complainant and the respondent, and the original thereof filed with the division of records and elections. Copies of the order shall also be provided to the highest ranking supervisor of the respondent, the office of the prosecuting attorney, and the board of ethics. Such reasonable cause order shall include:

1. A finding that one or more violations of the chapter has occurred;
2. The factual basis for such finding.
3. A notice informing the respondent that the respondent has the right to request a hearing before the board of ethics as set forth in Section 3.04.057. (Ord. 11185 § 5, 1993; Ord. 9704 § 9, 1990).

3.04.057 Appeal. A. Any respondent aggrieved by an order of the *Ombudsman* may request in writing within twenty days of the service of the order upon the respondent an appeal hearing before the board of ethics. The request shall cite the order appealed from and specify with particularity the findings being contested. The request shall be filed with the board of ethics, with a copy provided to the *Ombudsman*;

B. Any order issued by the *Ombudsman* pursuant to K.C.C. 3.04.055 shall become final twenty days after service of the order unless a written request for an appeal hearing as set forth above is received by the board of ethics within the twenty-day period;

C. If an order of the *Ombudsman* has been timely appealed, a hearing shall be conducted by the board of ethics for the purpose of affirming, denying, or modifying the order. The parties to the hearing shall be the respondent and the *Ombudsman* or his or her designee. There shall be a verbatim record kept of the hearing and the board of ethics shall have the power to administer oaths and affirmations, issue subpoenas, and compel attendance, take evidence, and require the production of any books, papers, correspondence, memoranda, or other records relevant or material to the hearing. The burden of proving that a violation occurred shall at all times be upon the *Ombudsman*. The board of ethics' decision shall be based upon a preponderance of the evidence. Such hearing shall be conducted within a reasonable time after receipt of the request for appeal. Written notice of the time and place of the hearing shall be given at least ten days prior to the date of the hearing to the parties;

D. At the hearing, each party shall have the following rights:

1. To call and examine witnesses on any matter relevant to the issues raised by the order of the *Ombudsman* or his or her designee;
2. To introduce documentary and physical evidence;
3. To cross-examine opposing witnesses on any relevant matter;
4. To impeach any witness regardless of which party first called the witness to testify;
5. To rebut evidence against him or her; and
6. To represent himself or herself or to be represented by anyone of his or her choice who is lawfully permitted to do so;

E. Following review of the evidence submitted, the board shall within a reasonable time enter written findings and conclusions and shall affirm or modify the order previously issued if the board finds that one or more violations of this chapter has occurred. The board shall reverse the order if it finds no violations of this chapter have occurred. A copy of the board's decision shall be served or mailed, by certified mail, return receipt requested, to the *Ombudsman* and the respondent, and the original thereof filed with the division of records and elections. Copies of the board's decision shall also be provided to the highest ranking supervisor of the respondent, the office of the prosecuting attorney, and the complainant. (Ord. 11185 § 6, 1993: Ord. 9704 § 10, 1990).

3.04.060 *Penalties*. A. Criminal Penalties. Any negligent or willful violation of the provisions of this chapter shall constitute a misdemeanor and upon conviction be punishable by a fine not to exceed \$1,000 or imprisonment in the county jail not to exceed ninety days; or both;

B. Civil Penalties and Disciplinary Action.

1. Any elected official who commits a violation of this chapter shall be subject to penalties as provided by RCW 42.12.010 and King County Charter and shall be subject to a civil penalty of an amount not to exceed the lesser of one month of the respondent's county pay or the amount authorized by law. Any person having an existing contract with King County or seeking to obtain a contract who willfully attempts to secure preferential treatment in his/her dealings with the county by offering any valuable consideration, thing of value or gift, whether in the form of services, loan, thing or promise, in any form to any county official or employee, shall have his/her current contracts with the county canceled and shall not be able to bid on any other county contract for a period of two years.
2. An employee of the county who commits a violation of this chapter shall be subject to disciplinary action, up to and inclu-

ding termination from employment; provided that such disciplinary action is consistent with Career Service Guidelines and collective bargaining agreements. An employee of the county who commits a violation of this chapter shall also be subject to a civil penalty; provided that such penalty shall not exceed the lesser of one month of the respondent's county pay or the amount authorized by law.

3. Members of boards and commissions who commit a violation of this chapter shall be subject to immediate removal from such appointment.

C. Civil and criminal liability under the provisions of this section shall be imposed on any person who either directly or as an accomplice commits a violation of this chapter.

D. A county employee who engages in retaliatory action as defined herein shall be subject to civil and criminal penalties as set forth in this section. (Ord. 11185 § 7, 1993: Ord. 9704 § 7, 1990: Ord. 1308 § 7, 1972).

3.04.070 Constitutionality. Should any section, subsection, paragraph, sentence, clause or phrase of Sections 3.04.010 through 3.04.060 be declared unconstitutional or invalid for any reason, such decision shall not affect the validity of the remaining portions of Sections 3.04.010 through 3.04.060. (Ord. 1308 § 8, 1972).

3.04.080 Board of ethics - Membership and terms. There is created a board of ethics, composed of five members, two to be appointed by the county executive, two to be appointed by the county executive from a list of nominees submitted by the county council, and the fifth, who shall be chairman, to be appointed by the county executive from a list of nominees submitted by the other four members. All appointments are to be confirmed by the county council. The terms of the board members

shall be three years. The first three members shall be appointed for one, two and three-year terms respectively. The chairman shall have a three-year term; the other terms are to be determined by lot. A member of the board of ethics may be removed for just cause by a two-thirds vote of the county council, after written charges have been served on the member and a public hearing has been held by the county council. The board shall be advisory and shall meet as frequently as it deems necessary. A majority of the board shall constitute a quorum. (Ord. 11185 § 8, 1993: Ord. 1321 § 2, 1972).

3.04.090 Board of ethics - Purpose. The purpose of the board of ethics shall be to insure proper implementation of the code of ethics and to investigate and report on conflicts of interest. (Ord. 1321 § 3, 1972).

3.04.100 Board of ethics - Authority. A. Whenever requested by a county officer or employee, or whenever it deems it in the public interest, the board of ethics shall render advisory opinions, in writing, concerning questions of ethics, conflicts of interest, and the applicability of the code of ethics. Copies of the opinion shall be delivered to the *Ombudsman*, the county executive and all members of the King County council. Such opinion may also be released to the public at the discretion of the board with such omissions as may be necessary to protect the confidence and privacy of county officers or employees. A written copy of the board's opinion shall be delivered to the officer or employee requesting the opinion.

B. The board shall hear appeals from orders of the *Ombudsman* as provided in this chapter. (Ord. 9704 § 12, 1990: Ord. 1321 § 4, 1972).

3.04.110 Board of ethics - Income disclosure. The board of ethics shall adopt and promulgate rules and regulations delineating personnel employed by the county, not included in the county code of ethics, who shall be required to complete and file statements of disclosure of income

and investments. The statements of elected officials, candidates, department directors, division managers, the deputy county executive and the county executive's administrative assistants shall be public record. All other statements shall not be made public without written approval of the board of ethics. (Ord. 3434 § 1, 1977; Ord. 1321 § 5, 1972).

3.04.120 Disclosure of interests by consultants. A.1. Each consultant entering into a contract to provide professional or technical services to the county costing in excess of two thousand five hundred dollars shall file both with the King County board of ethics and the executive a sworn written statement disclosing the following information:

- a. any office or directorship in the consultant held by any county employee or any member of his or her immediate family;
- b. any financial interest in the consultant held or received by any county employee or any member of his or her immediate family as follows:
 - 1) ownership of over five percent of the stock or other form of interest in the consultant; and
 - 2) receipt of any compensation, gift or thing of value from the consultant;
- c. a list of all contracts between the consultant and the county in the five years immediately preceding the presently contemplated contract including the amount of money paid by the county to the consultant pursuant to each contract;
- d. any position or positions on any county board or commission, whether salaried or unsalaried, held by any officer or director of the consultant in the five years immediately preceding the presently contemplated contract; and
- e. any other information known to the consultant about any interest or relationship whatsoever between any county

employee, including any member of his or her immediate family, and the consultant, other than that disclosed pursuant to subsection A.1.a. through d. of this section.

2. Unless otherwise specified in this section, the information disclosed shall cover the period twenty-four months before and including the date of filing the sworn statement.

B. No payment shall be made on any contract with any consultant until five days after receipt by the board of ethics and the executive of the information required to be disclosed by this section.

C. For purposes of this section, “consultant” means a person, as defined in K.C.C. 3.04.017, who by experience, training and education has established a reputation or ability to provide professional or technical services, as defined in K.C.C. 4.16.010, on a discrete, nonrecurring basis over a limited and preestablished term as an independent contractor to the county. (Ord. 13710 § 1, 2000; Ord. 12138 § 4, 1996).

3.04.130 Authorization to Implement Procedures. The *Ombudsman* and the board of ethics are each authorized to implement such forms, administrative processes, and operational procedures as are necessary to comply with the provisions of this chapter; provided that any rules governing the conduct of contested hearings shall be promulgated in compliance with K.C.C. 2.98, Rules of County Agencies.

The executive is directed to prepare, with the assistance of council staff, the office of the prosecuting attorney, the *Ombudsman* and the board of ethics, information regarding the provisions of this chapter to be made available to employees and members of boards and commissions the availability of these materials and of copies of this chapter shall be described in a summary form which shall be distributed to all county employees on or before April 20, 1994 and an acknowledgment of receipt of such form shall be signed and returned by each employee to the

office of human resource management on or before May 20, 1994. Each new employee shall sign and return such form prior to commencing work for King County. (Ord. 11185 § 9, 1993; Ord. 9704 § 13, 1990).

3.04.140 Forwarding to District and Superior Courts. The executive is directed to forward a copy of Ordinance 9704 to the presiding judges of the district and superior courts for consideration by the courts in their evaluation of possible future amendments to existing codes of judicial conduct and personnel administration. (Ord. 9704 § 14, 1990).

3.04.150 Severability. The provisions of this chapter are declared to be separate and severable. The invalidity of any clause, sentence, paragraph, subdivision, section or portion of this chapter, or the invalidity of the application thereof to any person or circumstances shall not affect the validity of the remainder of this chapter, or the validity of its application to other persons or circumstances. (Ord. 9704 § 15, 1990).

3.04.160 Effective date. Ordinance 9704 shall take effect on March 31, 1991; provided, that in the event that any provision herein is in conflict with the provisions of a collective bargaining agreement in effect upon such date, the agreement shall control as to employees in such bargaining unit during the term of such agreement. (Ord. 9704 § 16, 1990).

Chapter 3.42 WHISTLEBLOWER PROTECTION

Sections:

- 3.42.010 Policy - Purpose.
- 3.42.020 Definitions.

- 3.42.030 Right to report.
- 3.42.040 Confidentiality.
- 3.42.050 Investigation.
- 3.42.060 Reporting and adjudicating retaliation.
- 3.42.200 Severability.

3.42.010 Policy - Purpose. Unless prohibited by State law, County employees are encouraged to report on improper governmental action to the appropriate county or other government official. To assist such reporting and to implement Sections 42.41.030 and 42.41.040 of the Revised Code of Washington (“RCW”), this ordinance provides county employees a process for reporting improper governmental action and protection from retaliatory action for reporting and cooperating in the investigation and/or prosecution of improper governmental action in good faith in accordance with this subchapter. (Ord. 11687 § 3, 1995).

3.42.020 Definitions. As used in this ordinance, the following terms shall have these meanings:

A. “Investigating official” means, each in connection with a report of improper governmental action within his, her, or its respective jurisdiction; the *Ombudsman*; a person to whom sexual harassment was properly reported according to county policy; the agency designated by the executive to receive unfair employment complaints filed under K.C.C. 12.18; the Washington State Commission on Judicial Conduct; the department of public safety’s internal investigations unit; the county prosecuting attorneys of the State of Washington; the presiding judge of the district and superior courts; the executive; the department director of any executive agency; the assessor; the director of the department of judicial administration/clerk of the superior court; the chair of the council; and any authorized assistant or representative of any of them in cases within their respective appropriate jurisdictions.

B. “Employee” or “county employee” means any individual who is appointed as an employee by the appointing authority of a county agency, office, department, council, board, commission or other separate unit or division of county government, however designated. The term “employee” or “county employee” also includes county elected officials and members of county boards, commissions, committees, or other multi-member bodies.

C. “Improper governmental action” means any action by a county officer or employee that is undertaken in the performance of the officer’s or employee’s official duties, whether or not the action is within the scope of employment, and:

1. Violates any state or federal law or rule or county ordinance or rule, or
2. Constitutes an abuse of authority, or
3. Creates a substantial or specific danger to the public health or safety, or
4. Results in a gross waste of public funds.

“Improper governmental action” excludes personnel actions, including but not limited to: employee grievances, complaints, appointments, promotions, transfers, assignments, reassignments, reinstatements, restorations, performance evaluations, reductions in pay, dismissals, suspensions, demotions, reprimands, violations of collective bargaining or civil service laws, or alleged violations of agreements with labor organizations under collective bargaining. A properly authorized county program or activity does not become an “improper governmental action” because an employee or investigating official dissents from the county policy or considers the expenditures unwise.

D. “Retaliate,” and its kindred nouns, “retaliation” and “retaliatory action,” means to make, because of a report of improper governmental action, any unwarranted adverse change in an employee’s employment

status or the terms and conditions of employment including, but not limited to, denial of adequate staff to perform duties; frequent staff changes; frequent and undesirable office changes; refusal to assign meaningful work; unsubstantiated letters of reprimand or unsatisfactory performance evaluations; demotion; reduction in pay; denial of promotion; transfer or reassignment; suspension or dismissal; or other unwarranted disciplinary action; or, hostile actions by another employee towards a local government employee that were encouraged by a supervisor or senior manager or official.

E. “Emergency” means a circumstance that if not immediately changed may cause harm or injury to person or property. (Ord. 11687 § 2, 1995).

3.42.030 Right to report. A. Every county employee shall have the right to report, in good faith in accordance with this ordinance, information concerning an improper governmental action.

B. Limitations. This section does not authorize a county employee to report information that is subject to an applicable privilege against disclosure at law (e.g., RCW 5.60.060 privileged communications) unless waived, or to make disclosure where prohibited at law. The only purpose of this chapter is to protect and encourage employees who know or in good faith believe improper governmental action has occurred to report those actions in good faith in accordance with this ordinance. Except in cases of emergency where the employee believes in good faith that substantial damage to persons or property will result unless a report is made immediately to a person or entity who is not the appropriate investigating official listed in Section 3.42.020A, the employee shall, before making a report to a person who is not the appropriate investigating official, first make a written report of the improper governmental action to the appropriate investigating official. No emergency under this subsection exists where prompt attention and reporting under this chapter by the employee could have avoided the perceived need

to report immediately to a person not the appropriate investigating official. An employee making a written report as required by this subsection is encouraged to wait at least thirty (30) days from receipt of the written report by the appropriate investigating official before reporting the improper governmental action to a person who is not an appropriate investigating official. However, reporting to a person who is not an appropriate investigating official prior to this thirty (30) day period will not result in the loss of the protections contained in this ordinance. An employee's reporting of his or her own improper action does not grant an employee immunity from discipline or termination insofar as his or her improper action would be cause for discipline.

C. Employee protection. The following conduct by employees is protected if carried out in good faith under this chapter:

1. Reporting sexual harassment to the employee's supervisor, department head, or other government official as set out in the county's adopted procedure for reporting sexual harassment complaints; reporting violations of the fair employment practices ordinance (K.C.C. 12.18) to the executive or his or her designee; reporting police misconduct to the department of public safety's internal investigation unit; reporting violations of the Code of Judicial Conduct to the Washington State Commission on Judicial Conduct; reporting improper governmental action occurring within the district court to the presiding judge of the district court; reporting improper governmental action occurring within the legislative branch to the chair of the council; reporting improper governmental action occurring within the executive branch to the executive or to the department director of the executive agency in which the alleged improper governmental action occurred or to the *Ombudsman*; reporting improper governmental action occurring within the department of judicial administration to the director/clerk of

the superior court or to the *Ombudsman*; reporting improper governmental action occurring within the department of assessments to the assessor or to the *Ombudsman*; reporting improper governmental action occurring within the superior court to the presiding judge of the superior court; reporting violations of criminal laws to the county prosecuting attorney; and reporting violations of the Ethics Code, and any actions for which no other appropriate recipient of a report is listed in this subsection, to the *Ombudsman*.

2. Cooperating in an investigation by an “investigating official” related to “improper governmental action”; and/or
3. Testifying in a proceeding or prosecution arising out of an “improper governmental action.”

D. Retaliation prohibited. No county officer or employee shall retaliate against any employee because that employee has in good faith utilized the provisions of this chapter.

E. Penalty. Any county officer or employee who engages in prohibited retaliatory action is subject to disciplinary action up to and including termination.

F. Distribution of policy and procedures. Upon entering county service, every county officer and employee shall receive a written summary of this chapter, the procedures for reporting improper governmental actions to investigating officials, the procedures for obtaining the protections extended, and the prohibition against retaliation in this section. Copies of these summaries shall be copies conspicuously posted where all employees will have reasonable access to them. (Ord. 11687 § 4, 1995).

3.42.040 Confidentiality. To the extent allowed by law, the identity of an employee reporting information about an improper governmental action shall be kept confidential unless the employee in writing waives confidentiality. (Ord. 11687 § 5, 1995).

3.42.050 *Investigation. A. Referral or retention.* The *Ombudsman* is the appropriate investigating official for all improper governmental actions not specifically referred to in Section 3.42.030C.1. The *Ombudsman* is also an appropriate investigating official for alleged improper governmental action occurring within an executive branch agency, including the department of assessments and the department of judicial administration. If, in accordance with the guidelines of Section 3.42.030C.1, the *Ombudsman* is not the appropriate investigating official, the *Ombudsman* shall, immediately upon receipt, refer reports alleging improper governmental action to the appropriate investigating official listed in Section 3.42.020. If the report of improper governmental meets the definition of a complaint under K.C.C. 3.04.055 (the Employee Code of Ethics), the *Ombudsman* shall investigate that allegation according to the ordinances and rules applicable to the ethics code. If the *Ombudsman* is an appropriate investigating official and the report does not meet the definition of a complaint under the ethics code, the *Ombudsman* may refer the report to the department director of the agency in which the alleged improper governmental action occurred or to the chief elected official of the branch of government implicated in the allegation, who shall ensure that the appropriate officer or agency responds to the complainant in writing within thirty (30) days of the receipt of the report, with a copy of the response to the *Ombudsman*. If the *Ombudsman* does not refer to another official, or if the other official's response is not timely or satisfactory to the *Ombudsman*, the *Ombudsman* may conduct an investigation. If a report of improper governmental action is filed with the executive or a department director, including the clerk of the superior court or the assessor, and a report is concurrently filed with the *Ombudsman*, the *Ombudsman* should defer action until the investigation is completed by the affected department. When the *Ombudsman* chooses to conduct a concurrent investigation the *Ombudsman* shall notify the executive and the chair of the council. The procedures in Sections 3.42.050B through E shall apply only to the

Ombudsman when he or she is investigating a report of an improper governmental action that is not investigated according to the rules applicable to the ethics code in accordance with Section 3.42.050A. The procedures in Section 3.42.050B through E do not apply to any other government official.

B. *Ombudsman's* investigation. If at any stage in an investigation of an alleged "improper governmental action", the *Ombudsman* may issue subpoenas, administer oaths, examine witnesses, compel the production of documents or other evidence, refer the matter to the State Auditor, law enforcement authorities or other governmental agency, and/or issue reports, each as deemed appropriate. Within thirty (30) days after receiving information about an "improper governmental action" from a county employee, the *Ombudsman* shall conduct a preliminary investigation, and provide the complainant with a written report of the general status of the investigation which may include matters for further research or inquiry.

C. Completion and reports. Upon completion of the investigation, the *Ombudsman* shall notify the complainant in writing of any determinations made. If the *Ombudsman* determines that an improper governmental action has occurred, the *Ombudsman* shall report the nature and details of the activity to the complainant; to the head of the department with responsibility for the action and if a department head is implicated, to the executive and county council; and to such other governmental officials or agencies as the *Ombudsman* deems appropriate. If satisfactory action to follow up the report is not being taken within a reasonable time, the *Ombudsman* shall report his or her determination to the executive and advise the county council.

D. Closure. The *Ombudsman* may close an investigation at any time he or she determines that no further action is warranted and shall so notify the complainant.

E. Decisions of the *Ombudsman* under this section may not be appealed to the Board of Ethics. (Ord. 11687 § 6, 1995).

3.42.060 *Reporting and adjudicating retaliation.* A. Complaint. In order to seek relief, an employee who believes he or she has been retaliated against in violation of K.C.C. 3.42.030D must file a signed written complaint within 30 days of the occurrence alleged to constitute retaliation. The complaint shall be filed with the *Ombudsman* and must specify the alleged retaliatory action and the relief requested.

B. Investigation and Response. The *Ombudsman* shall immediately forward the complaint to the head of the executive office or department in which the retaliation is alleged to have occurred; or to the prosecuting attorney, if his office is implicated in the complaint; or to the chair of the county council or to the presiding judge of the superior or district courts if their respective branches are implicated in the complaint. The head of the department, office, or branch to which the complaint was referred shall ensure that the complainant is sent a response within thirty (30) days after the filing of the complaint with the *Ombudsman*. If the head of an executive office or department is alleged to have retaliated in violation of K.C.C. 3.42.030D, the executive shall ensure that the complainant is sent a response within thirty (30) days after the filing of the complaint with the *Ombudsman*.

C. Hearing. If an employee who has filed a complaint of retaliation under this section is dissatisfied with the response and desires a hearing pursuant to RCW 42.41.040, or the employee has not received a response within forty-five (45) days of having filed the complaint with the *Ombudsman*, the employee shall deliver a request for hearing to the head of the branch within which retaliation is alleged to have occurred within fifteen (15) days of receipt of the response from the county or, if no response is received within the forty-five (45) day response period, within fifteen (15) days of the expiration of the response time period. Within five (5) working days of receipt of the request for hearing, the county shall apply to the state office of administrative hearings for a hearing to be conducted as provided in RCW 42.41.040.

D. Extension. If the chief elected official in the branch of government where the retaliation is alleged to have occurred finds that additional time is needed to make a proper response to the complaint of retaliation, he or she shall notify the complainant in writing prior to the expiration of the forty-five (45) day response period. The effect of such notice is to extend for an additional forty-five (45) days the time period in which a response must be made. Only one forty-five (45) day extension may be obtained, provided, however, an employee shall not have the right to seek a hearing under this section pursuant to RCW 42.41.040 if the complaint of retaliation is pursued under and falls within the subject matter jurisdiction of a collective bargaining agreement grievance procedure ending in binding arbitration or the career service grievance procedure ending in a hearing before the personnel board. (Ord. 11687 § 7, 1995).

3.42.200 Severability. The provisions of this chapter are declared to be separate and severable. The invalidity of any clause, sentence, paragraph, subdivision, section, or portion of this chapter, or the invalidity of the application thereof to any person or circumstance shall not affect the validity of the remainder of this chapter, or the validity of its application to other persons or circumstances (Ord. 11687 § 8, 1995).

ANEXO 2
ANCHORAGE MUNICIPAL CODE

Chapter 2.60
OFFICE OF THE OMBUDSMAN

Sections:

- 2.60.010 Purpose
- 2.60.020 Definitions
- 2.60.030 Office of the *Ombudsman*
- 2.60.040 Appointment of the *Ombudsman*
- 2.60.050 Qualifications-Prohibitions
- 2.60.060 Term of office
- 2.60.070 Removal
- 2.60.080 Staff and delegation
- 2.60.090 Compensation
- 2.60.100 Office facilities and administration
- 2.60.110 Jurisdiction
- 2.60.120 Investigations of complaints
- 2.60.130 Investigative powers
- 2.60.140 Recommendations
- 2.60.150 Notice to the complainant
- 2.60.155 Notice to citizens
- 2.60.160 Reports
- 2.60.170 Misconduct by municipal personnel
- 2.60.180 Penalty

2.60.010 Purpose

The municipality hereby establishes, in addition to other remedies or rights of appeal, an independent, impartial municipal office, readily available to the public, responsible to the Assembly, empowered to investigate the acts of administrative agencies and to recommend appropriate changes toward the goals of safeguarding the rights of persons and of promoting higher standards of competency, efficiency and equity in the provision of municipal services. (AO 77-94).

2.60.020 Definitions. In this chapter:

A. “Administrative act” means an action, omission, decision, recommendation, practice, policy or procedure.

B. “Agent of the municipality” includes a department, office, institution, corporation, authority, board, commission, committee, or council of the municipality, including boards and commissions established in Title 4, a contractor providing service to the public on behalf of the municipality, and any officer, employee, or member of the foregoing entities acting or purporting to act in the exercise of their official duties.

C. “Municipality” and “municipal” refer to the Municipality of Anchorage and the Anchorage School District. (AO 77-94, AO 89-45, AO 92-20).

2.60.030 Office of the Ombudsman. There is established in the legislative branch of the municipality the Office of Ombudsman. (Charter, 4.07).

2.60.040 Appointment of the Ombudsman. A person may be nominated for appointment as the *Ombudsman* by a selection committee made up of Assembly members. The appointment shall become effective if approved by a majority of the Assembly. (AO 77-94).

2.60.050 Qualifications-Prohibitions.

A. No person may serve as *Ombudsman*:

1. while he is engaged in any other occupation for which he receives compensation;
2. within one year of the last day on which he served as an elected official;
3. while he is a candidate for or holds any national, state or municipal elective office; and
4. unless he has been a resident of the municipality for at least one year.

B. A person shall not serve in any federal, state or municipal elective office until one year has elapsed from the last day on which he served as the *Ombudsman*.

C. The *Ombudsman* and any permanent office staff may not actively participate in any municipal, state or federal election campaign. An additional restriction shall prohibit the making of political contributions to Assembly or mayoral candidates. Members of the *Ombudsman's* office shall not be prohibited from expressing private opinion, serving as a delegate to party convention or voting. (AP 77-94).

2.60.060 Term of office. The term of office shall be two years, ending on December 31 of the even-numbered years. (AO 77-94).

2.60.070 Removal. The *Ombudsman* may be removed from office during his term by a majority vote of the Assembly. (AO 77-94).

2.60.080 Staff and delegation. A. The *Ombudsman* may appoint an assistant or deputy. He may also appoint other personnel necessary to carry out the provisions of this chapter, when in keeping with the Assembly-adopted budget for the *Ombudsman's* office.

B. The *Ombudsman* may delegate to his assistant or deputy any of his duties. However, those responsibilities of subsection 2.60.130B may

be delegated only in writing and only by reason of the *Ombudsman's* absence due to illness, vacation or business.

C. The assistant or deputy shall succeed to all duties and responsibilities of the *Ombudsman*, including those specified in subsection 2.60.130B, when he is serving as the acting *Ombudsman*.

D. The ombudsman's staff shall be selected in accordance with the provisions of the personnel regulations relating to classified employees. (AO 77-94).

2.60.090 Compensation. A. The *Ombudsman's* salary shall be set annually by the Assembly. The *Ombudsman's* salary may not be reduced during his term.

B. The salary and benefits of the *Ombudsman* and his staff shall accrue according to the effective personnel regulations of the municipality. (AO 77-94).

2.60.100 Office facilities and administration. A. The municipality shall provide suitable office facilities for the *Ombudsman* and staff in a location convenient for the public.

B. The *Ombudsman* shall annually prepare a budget proposal for submission to the Assembly. Copies shall be provided to the mayor for informational purposes to assist in the preparation of the municipal budget.

C. The *Ombudsman* shall comply with all administration procedures prescribed by ordinance except as provided in this section. Request for executive approval of office matters, such as office supplies, budget and personnel, shall be submitted to the administration in proper form. In order to assure the independence and objectivity of the *Ombudsman*, the executive's discretionary decisions shall be considered advisory. The executive branch shall retain the authority to deny any request which is otherwise contrary to ordinance or which exceeds the Assembly-adopted budget for the office. (AO 77-94).

2.60.110 Jurisdiction. A. The *Ombudsman* may investigate the administrative acts of agents of the Municipality of Anchorage including the directors and employees of the Anchorage Telephone Utility.

B. The *Ombudsman* may investigate the administrative act of an agent of the municipality on his own motion if he reasonably believes that it is an appropriate subject for review.

C. An appropriate subject for investigation by the *Ombudsman* is an administrative act which the *Ombudsman* has reason to believe might be:

1. contrary to law;
2. unreasonable, unfair, oppressive; arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or unnecessarily discriminatory even though in accordance with law;
3. based on a mistake of fact;
4. based on improper or irrelevant grounds;
5. unsupported by an adequate statement or reasons;
6. performed in an inefficient or discourteous manner; or
7. otherwise erroneous.

D. The *Ombudsman* shall be barred from inquiry into acts of the mayor, Assembly or the Anchorage School Board. The *Ombudsman* shall retain the authority to appeal complaints through the executive branch and mayor to the Assembly. (AO 77-94, AO 91-173(S), AO 92-20).

2.60.120 Investigations of complaints. A. The *Ombudsman* may cease his investigation of a complaint when the complainant has brought the same matter to the attention of the courts for resolution.

B. The *Ombudsman* may cease his investigation when he reasonably believes that:

1. there is presently available an adequate remedy for grievance stated in the complaint;

2. the complaint relates to a matter that is outside the jurisdiction of the *Ombudsman*;
3. the complaint relates to an administrative act of which the complainant has had knowledge for an unreasonable length of time before the complaint was submitted.
4. the complainant does not have a sufficient personal interest in the subject matter of the complaint;
5. the complaint is trivial or made in bad faith;
6. the resources of the *Ombudsman's* office are insufficient for adequate investigation.

C. The *Ombudsman* shall protect the confidentiality of complainants or witnesses coming before him except insofar as disclosures may be necessary to enable the *Ombudsman* to carry out his duties.

D. No fees shall be charged for the submission, investigation or pursuit of complaints.

E. The *Ombudsman* may request that complaints charging serious personal improprieties, particularly when the complaint may result in disciplinary action against an employee, be filed in writing.

F. The *Ombudsman* may by regulation establish procedures for receiving and processing complaints, conducting investigations and reporting findings.

2.60.130 *Investigative powers.* A. In an investigation the *Ombudsman* may:

1. enter without notice to inspect the premises of a department during normal business hours and when departmental personnel are present;
2. review any municipal document or take testimony which he deems relevant to an investigation. Under no circumstance, however, shall the *Ombudsman* make public comment upon or

otherwise publicly disseminate any material or information received by him during the course of an investigation which is accorded confidential or privileged status by federal, state or local law, or which would otherwise result in an unwarranted invasion of personal privacy if released.

B. Subject to the privileges which witnesses have in courts of this state, the *Ombudsman* may:

1. compel by subpoena, at a specified time and place, the appearance and sworn testimony of a person whom the *Ombudsman* reasonably believes may be able to give information relating to a matter under investigation; and
2. compel a person, by subpoena, to produce documents, papers or objects which the *Ombudsman* reasonably believes may relate to the matter under investigation.

C. If a person refuses to comply with a subpoena issued under subsection B hereof, the superior court may, on application of the *Ombudsman*, compel obedience by proceedings for contempt in the same manner as in the case of disobedience to the requirements of a subpoena issued by the court or refusal to testify in the court. (AO 77-94 and AO 77-144).

2.60.140 *Recommendations.* A. The *Ombudsman* may make recommendations for the resolution of complaints and inquiries in accordance with this chapter.

B. In seeking a resolution to a complaint or inquiry the *Ombudsman* may draw the matter to the attention of any department head, the manager, the mayor, the Assembly or the public.

C. Before offering a report or recommendation which is critical of a department or person, the *Ombudsman* shall consult with that department or person.

D. The *Ombudsman* may require a department to notify him within a reasonable specified time of any action taken on his recommendation. (AO 77-94).

2.60.150 Notice to the complainant. The *Ombudsman* shall notify the complainant of the actions taken by the *Ombudsman* and the department within a reasonable time after the conclusion of the matter. (AO 77-94).

2.60.155 Notice to citizens. The *Ombudsman* shall post notices and use other appropriate means to inform citizens of their rights and protections under Sections 2.60.010-2.60.180. These notices shall be posted in public areas of all buildings owned or leased by the municipality or the Anchorage School District. Nothing in this section is to be construed as repealing any other provisions of contract, ordinance or law. (AO 92-106).

2.60.160 Reports. The *Ombudsman* shall submit to the Assembly a report of his activities at least once a year. (AO 77-94).

2.60.170 Misconduct by municipal personnel. If the *Ombudsman* believes there is a breach of duty or misconduct by an officer or employee of the municipality, the *Ombudsman* shall refer the matter to the appropriate department head, to the mayor, or when appropriate, to the municipal prosecutor, district attorney, grand jury or any other agency. (AO 77-94).

2.60.180 Penalty. A person who willfully hinders the lawful actions of the *Ombudsman* or staff, or who willfully refuses to comply with their lawful demands, is guilty of a misdemeanor and upon conviction by a court of competent jurisdiction is punishable by a fine of not more than \$500.00. This provision shall not be construed so as to require adminis-

trative officials to implement the *Ombudsman's* recommendations for resolving complaints. (AO 77-94).

Regulation 2.60
OFFICE OF THE OMBUDSMAN

Sections:

- 2.60.001 Complaints
- 2.60.002 Exclusions to jurisdiction
- 2.60.003 Investigations
- 2.60.004 Confidentiality
- 2.60.005 Conflicts of interests
- 2.60.006 Grievances against the *Ombudsman*
- 2.60.007 Definitions

2.60.001 Complaints. A. Any person may contact the *Ombudsman* by phone, letter, fax or in person. If information or referral assists the person with solving a problem, that information will be provided. (See Exhibit 1.)

B. When possible, complaints will be informally resolved through discussion with the complainant, review of agency action and consultation with both sides. If no basis for the complaint is discovered upon preliminary review, the complaint will be closed.

C. The *Ombudsman* will review and investigate complaints substantially in order of the date received. When the resources of the office do not allow review of all complaints within a reasonable time, the *Ombudsman* may prioritize reviews according to, but not limited to, the following considerations:

1. complaints of an emergency nature requiring immediate review to prevent serious harm;

2. complaints involving time constraints, such as pending administrative or legislative action or public hearings;
3. complaints involving recurring systematic prejudice, harm or disadvantage as result of administrative action or decision. (Authority: AMC 3.40, 2.60.120(F), AO 77-94.)

2.60.002 *Exclusions to review or investigation.* A. In addition to the specific jurisdictional exclusions in AMC 2.60.110(D) and 120(A) and (B), the *Ombudsman* may cease review or investigation of a complaint when the *Ombudsman* determines that:

1. the administrative decision complained about may be more appropriately resolved by hearing or appeal for which the complainant may make timely application.
2. the complaint relates to an action which the complainant has known about for more than a year before filing the complaint;
or
3. the complaint involves the grievance of an employee covered by a collective bargaining agreement, if the agreement provides a method for settling disputes arising under the agreement.

B. The *Ombudsman* will, in her or his discretion, decline to investigate a complaint when:

1. the complainant has not given the agency an opportunity to resolve the complaint;
2. disclosure of the complainant's identity is necessary to enable investigation of the complaint and the complainant refuses to allow such disclosure;
3. it appears an applicable law or administrative procedure provided an adequate remedy which the complainant did not pursue, with no reasonable justification for the failure to do so;

4. the complaint is presented anonymously and the *Ombudsman* declines to initiate investigation on her or his own motion under AMC 2.26.110(B);
5. the subject of the complaint was recently investigated, the complaint presents no new issue and the *Ombudsman* believes that further investigation would not advance the interests of the complainant or a significant public interest;
6. the information provided by the complainant provides no specific or credible evidence to indicate an investigation is warranted; or
7. the complainant has no interest in the result of the investigation other than that of a member of the general public. (Authority: AMC 3.40, 2.60.120(F), AO 77-94.)

2.60.003 *Investigations*. A. At the discretion of the *Ombudsman*, a complaint may be formally investigated to obtain information sufficient to allow a determination on the merits of the complaint. (See Exhibit 1.)

B. *Ombudsman* staff may interview the complainant and agency employees and officials, review files and documents from the agency or other sources, research ordinances, statutes, regulations, practices or procedures and utilize any comparable information to assist in the determination.

C. The *Ombudsman* may examine, under oath, persons believed to have information relevant to the investigation. Testimony or production of documents may be compelled by subpoena.

D. Notice of investigation, including an allegation stating the complaint in general terms using the standard from AMC 2.60.110(C) by which the action will be evaluated, will be provided to the agency or person against whom a complaint is made. Written notice is preferable.

E. If during the course of an investigation, information is exchanged which leads to satisfactory resolution for the complainant, the investigation may be discontinued.

F. A preliminary investigation report containing proposed finding(s) and recommendation(s) may be presented to the agency at the termination of the investigation. Consultation is required by AMC 2.60.140(C), when the report is critical of an agency. The preliminary report will be distributed as a draft report to agency personnel designated by the *Ombudsman*. The report may be modified, at the discretion of the *Ombudsman*, if additional information is provided by the agency or modifications are requested.

G. The *Ombudsman* will, in her or his discretion, make a finding that is based on the evidence obtained during the investigation, the complaint or allegation is:

1. “justified,” if the *Ombudsman* determines or believes the complainant’s criticism is valid;
2. “partially justified,” if the *Ombudsman* determines or believes that the complaint is justified and that action or inaction by the complainant affected the outcome or constraints of law, policy or procedure limited agency response; or only a portion of the complaint’s criticism is valid;
3. “not supported,” if the *Ombudsman* determines or believes the complainant’s criticism is not valid; or
4. “indeterminate,” if investigation does not provide sufficient evidence for the *Ombudsman* to determine conclusively whether the complainant’s criticism is valid or not valid.

H. When the *Ombudsman* presents findings or recommendations to an agency, official or employee, seeking resolution to a complaint, the agency will accept the findings and recommendations or request modifications and notify the *Ombudsman* of any action taken on the recommendations within 30 days.

I. The final investigation report is a public document and may be noticed to the public by an Assembly Information Memorandum. The

final investigation report will be distributed to the complainant and appropriate government officials.

J. A report on the status of a complaint under investigation will be provided to a complainant at 60 day intervals after notice of investigation until the investigation is completed. A status report will be provided in response to a complainant request at any time. (Authority: AMC 3.40, 2.60.120(F), AO 77-94, AO 77-144).

2.60.004 Confidentiality. A. The names of complainants and witnesses may only be revealed when disclosure is necessary to facilitate investigation of a complaint.

B. Records or documents provided to the *Ombudsman* which are accorded confidential or privileged status under municipal, state or federal law shall not be disclosed.

C. Denial of a request for access to information which is in the custody of the *Ombudsman* will be automatically appealed to the Assembly if the request involves information related to a complaint about the Municipality of Anchorage, or to the School Board if the request involves information related to a complaint about the Anchorage School District. (Authority: AMC 3.40, AMC 3.90.060(B), 2.60.120(F), AO 77-94, AO 92-20).

2.60.005 Conflicts of interest. A. If, during the review or investigation of a complaint, the *Ombudsman* determines that response by the *Ombudsman* or *Ombudsman* staff involves a conflict of interest or may have the appearance of a conflict of interest, the *Ombudsman* will promptly transfer the complaint to another staff member.

B. The *Ombudsman* may, in her or his discretion, review and present findings and recommendations for a complaint transferred under this section. Any conflict or appearance of a conflict of interest of the *Ombudsman* will be disclosed to the agency and the complainant. (Authority: AMC 3.40, 2.60.120(F), AO 77-94).

2.60.006 Grievances against the *Ombudsman*. A. Any person may file a grievance against the *Ombudsman*. The grievance must be filed in writing to the *Ombudsman* and may include:

1. the grievant's objection to a decision to decline or discontinue a review or investigation;
2. an allegation of undue delay in the review or investigation of a complaint;
3. a specification of error or omission in the review or investigation of a complaint; or
4. an allegation of discourteous behavior by a member of the staff of the *Ombudsman's* office during the course of an investigation.

B. The *Ombudsman* will respond in writing to the grievant within 15 days after receipt of the grievance. If the information necessary to respond to the grievance is not readily available to the *Ombudsman*, the period for response may be extended in 15-day intervals at the discretion of the *Ombudsman*. Notice of any extension and the reasons for it shall be provided in writing to the grievant.

C. A copy of the grievance and the *Ombudsman's* response will be maintained for five years in a file that is open to public inspection and will be disclosed to the Assembly upon request.

D. When a grievance is received which involves a complaint that is under review or investigation or reveals confidential or privileged information, the grievance and response will be available for public inspection after the review or investigation is completed and confidential information is expunged. (Authority: AMC 3.40, 2.60.120(F), AO 77-94).

2.60.007 *Definitions*. A. "Allegation" means a statement describing the complaint about an administrative act which is to be investigated.

B. “Complaint” means the problem or concern presented to the *Ombudsman*.

C. “Complainant” means the person who presents a complaint to the *Ombudsman*.

D. “Critical” means a finding which is “justified” or “partially justified” or a recommendation which requests remedial action by an agency.

E. “Finding” means the determination made by the *Ombudsman* about an allegation.

F. “Grievance” means a complaint against the *Ombudsman* or a member of the *Ombudsman’s* staff.

G. “Investigation” means a formal inquiry about a complaint and will result in notice of an allegation(s), a written report detailing the evidence considered, finding(s) and recommendation(s) made to the agency by the *Ombudsman* and the agency’s response.

H. “Recommendation” means the action proposed to the agency by the *Ombudsman* intended to resolve the complainant’s concern, as well as those of all citizens who may be similarly impacted and to promote higher standards of competency, efficiency and equity in the provision of municipal and school district services.

I. “Standard” means the criterion by which an agency’s actions will be evaluated, as established in AMC 2.60.110(C). (Authority: AMC 3.40, 2.60.120(F), AO 77-94).

ANEXO 3
ORDENANZA 5930 QUE ESTABLECE LA OFICINA
DEL *OMBDUSMAN* EN BOISE CITY

ORDINANCE 5930

BY THE COUNCIL: BAKER, FORNEY, HAUSRATH, MAPP,

TERTELING AND WETHERELL

AN ORDINANCE ADDING TITLE 2, CHAPTER 22, BOISE CITY CODE, TO ESTABLISH THE OFFICE OF COMMUNITY OMBUDSMAN SPECIFYING DUTIES AND RESPONSIBILITIES, REQUIRING CONFIDENTIALITY OF RECORDS, AND AUTHORIZING MEDIATION, RECOMMENDATIONS, COMMUNITY OUTREACH AND REPORTING; APPROVING AN ORDINANCE SUMMARY; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE.

WHEREAS, the professionalism and accountability of Boise City law enforcement agencies will be enhanced by establishing an independent investigative and review process by the creation of the Office of Community Ombudsman to receive, investigate and monitor citizen complaints against the police and to provide recommendations regarding improvements to police policies, practices and training; and

WHEREAS, public confidence in the internal investigation process of Boise City law enforcement agencies will be enhanced by establishing an independent investigative and review process.

NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY OF BOISE CITY, IDAHO:

Section 1. That Title 2, Boise City Code, be and the same is hereby amended by the addition thereto of a new Chapter 22 to read as follows:

2-22-01. Community Ombudsman

There is hereby created an administrative unit of the City to be known as the Office of Community Ombudsman.

2-22-02. Appointment and Removal of Ombudsman

A) The Community Ombudsman shall be appointed by the Mayor and confirmed by the City Council.

B) The Community Ombudsman may not be removed from office except for misconduct, inefficiency, incompetence, inability or failure to perform the duties of such office or negligence in the performance of such duties. In such cases that warrant removal from office, said removal shall be accomplished only by a resolution adopted in public hearing by either the majority of the full City Council upon recommendation of the Mayor or by a vote of no less than five (5) members of the full City Council; nothing contained herein shall prevent the Council from eliminating the Office of Community Ombudsman by the normal ordinance process which action shall not be considered a removal for cause but simply a change in policy by the City.

2-22-03. Scope

The Office of Community Ombudsman shall have the authority to exercise its duties and responsibilities, as outlined below, with regard to any and all law enforcement and police activities or personnel operating under authority of the City of Boise City.

2-22-04. Duties and Responsibilities

A) Citizen Complaints

Any person may file with the Office of Community Ombudsman a complaint or allegation of wrongdoing against a Boise City law enforcement or police employee. Upon receipt of such complaint or allegation, the Office of Community Ombudsman shall:

- i) Ensure that a timely, thorough, complete, objective and fair investigation into the complaint or allegation is conducted. This investigation may, at the discretion of the Community Ombudsman, be conducted by either the Office of Community Ombudsman, the Boise City Police Department or any other competent investigative agency.
- ii) Provide timely updates on the progress of the investigation to the complainant and the employee who is the subject of the investigation, unless the specific facts of the investigation would prohibit such notification.
- iii) Based on the results of the investigation, reach an independent finding as to the facts.
- iv) Communicate these findings on a timely basis to the complainant, the employee who is the subject of the investigation, and the Chief of Police or the head of the other Department.

B) Review of Internal Investigations conducted by Police Department.

The Office of Community Ombudsman shall review internal investigations conducted by Boise City Police or other Departments to determine if the investigations are complete, thorough, objective and fair.

C) Appeals of Internal Investigation Findings

Any person may file with the Office of Community Ombudsman an appeal of the findings of an internal investigation conducted by the Boise City Police, or other Departments. Upon receipt of such an appeal, the Office of Community Ombudsman shall:

- i) Review the completed investigation.
- ii) Determine whether or not further investigation is warranted and, if necessary, ensure that a timely, thorough, complete, objective and fair follow-up investigation into the complaint or allegation is conducted. This follow-up investigation may, at the discretion of the Community Ombudsman, be conducted by the Office of Community Ombudsman, the Department involved or any other competent investigative agency.
- iii) Provide timely updates on the progress of the review and any follow-up investigation to the complainant and the employee who was the subject of the original investigation, unless the specific facts of the investigation would prohibit such notification.
- iv) Based on the review of the original investigation and the results of any follow-up investigation (if conducted), reach an independent finding as to the facts.
- v) Communicate these findings on a timely basis to the person filing the appeal, the employee who was the subject of the original investigation, and the Chief of Police or relevant department head.

D) Mediation

The Office of Community Ombudsman shall develop an alternative dispute resolution process for resolving those citizen complaints which involves conduct which may most appropriately be corrected or modified through less formal means.

E) Policy Recommendations

The Office of Community Ombudsman shall develop specific recommendations as to the policies, procedures, practices and training of Boise City police and law enforcement employees. Such recommendations should have as their goal improved.

- professionalism,
- safety,
- effectiveness and
- accountability

of Boise City Police and law enforcement employees. The Office of Community Ombudsman may make recommendations to the Chief of Police, Department Heads, the Mayor and/or the City Council as appropriate.

F) Community Outreach

The Office of Community Ombudsman shall develop and maintain a regular program of community outreach and communication for the purpose of listening to and communicating with the citizens of Boise City.

G) Reporting

The Community Ombudsman shall file semi-annual public reports with the City Clerk for transmittal to the City Council and Mayor which shall:

- i) Include a statistical analysis documenting the number of complaints by category, their disposition and any actions taken;
- ii) analyze trends and patterns;
- iii) make recommendations, as appropriate.

The reports shall include all complaints received by the Office of Community Ombudsman and Police and other law enforcement activities of the City.

H) Critical Incidents

In the event that an employee of the Boise Police or the Airport Peace Officers Division of the Aviation and Transportation Departments is involved as a principal, victim, witness or custodial officer, where death or bodily injury results, the Community Ombudsman shall be notified

immediately and shall act as an observer to any criminal, administrative or civil investigation conducted by or on behalf of the such Departments. The Office of Community Ombudsman may also conduct an independent administrative investigation into such a critical incident. Critical incidents include but are not limited to situations involving the following:

- i) Use of force or any other Department action that results in death or serious bodily injury. (Serious bodily injury is an injury that results in the subject being admitted to a hospital.)
- ii) Use of Deadly Force where only minor bodily injuries occur.
- iii) Intentional use of Deadly Force but no injury occurs (excluding animals).
- iv) Vehicle pursuits, roadblocks or intercepts resulting in death or serious bodily injury.
- v) Police employee involved in a traffic accident resulting in death or serious bodily injury, while operating a city vehicle or a private vehicle while on City business.

2-22-05. Confidentiality of Records and Information

The Office of Community Ombudsman shall comply with all state and federal laws requiring the confidentiality of law enforcement records, information, and confidential personnel records; and respect the privacy of all individuals involved.

2-22-06. Relationship Between the Office of Community Ombudsman and Boise City Police and Other Departments

A) The Chief of Police and all Department Heads with employees who perform law enforcement duties shall each, jointly with the Community Ombudsman, develop standard operating procedures to govern the relationship and flow of communication and work products between the Office of Community Ombudsman and each of their respective departments.

B) The Office of Community Ombudsman is to be given full, unrestricted and complete access to any and all information, files, evidence or other material which the Community Ombudsman shall deem necessary in the performance of the duties specified and responsibilities set forth in this chapter.

C) The Office of Community Ombudsman is to provide the appropriate Chief or Department Head with timely notification of complaints, investigations, appeals and findings and with such information and cooperation as is appropriate and necessary.

2-22-07. Cooperation with the Office of Community Ombudsman

A) All City employees shall be required as a condition of their employment to cooperate fully and truthfully with the Office of Community Ombudsman operating within the course and scope of this chapter, by providing the Office of Community Ombudsman with any and all information, evidence, interviews, or other material as requested.

B) No person shall directly or indirectly force, or by any threats to person or property, or in any manner wilfully intimidate, influence, impede, deter, threaten, harass, obstruct or prevent, another person, including a child, from freely, fully and truthfully cooperating with the Office of Community Ombudsman.

2-22-8. Independence of the Community Ombudsman

A) The Community Ombudsman and any employee of the Office of Community Ombudsman shall, at all times, be totally independent. Any investigations, findings, recommendations and requests made by the Office of Community Ombudsman shall reflect the views of the Office of Community Ombudsman alone.

B) No person shall attempt to unduly influence or undermine the independence of the Community Ombudsman or any employee of the Office of Community Ombudsman in the performance of the duties and responsibilities set forth in this Chapter.

2-22-9. False Reports

The Office of Community Ombudsman shall have the discretion to decline further action on a complaint filed with the Office of Community Ombudsman if it is found that there is a reasonable belief that the alleged acts of misconduct in the complaint are false and that the person(s) filing the complaint knew them to be false at the time the complaint was filed.

Section 2. That the summary of this Ordinance, attached hereto as Exhibit "A" is approved as to both form and content.

Section 3. This Ordinance shall be in full force and effect from and after its passage, approval and publication.

PASSED by the Council of the City of Boise, Idaho, this 20th day of July, 1999.

APPROVED by the Mayor of the City of Boise, Idaho, this 20th day of July, 1999.

ATTEST: APPROVED:

Signed
CITY CLERK MAYOR

ANEXO 4
EXCERPT FROM *CITY OF WINNIPEG ACT* (SS. 65 TO 73,
INCLUSIVE) REGARDING THE RESPONSIBILITIES
AND POWERS OF THE *OMBUDSMAN* FOR THE CITY
OF WINNIPEG

OMBUDSMAN

Definition

65 In sections 66 to 73, “municipal unit” means a board, commission, association, department or other body of persons, whether incorporated or unincorporated, of which all the members, or all the members of the board of management or board of directors,

(a) are appointed by council, or

(b) if not appointed by council are, in the discharge of their duties, employees of the city or are, directly or indirectly, responsible to the city. (<organisme municipal>)

S.M. 1989-90, c.8, S.4; S.M. 1989-90, c.51, s.6.

Appointment of Ombudsman

66(1) Subject to the provisions of this Act, council shall by by-law establish the position of *Ombudsman*, who shall be a person appointed by council or retained by the city to perform the duties of the *Ombudsman*.

By-law

66(2) A by-law passed under subsection (1) shall provide for the following, in regard to the *Ombudsman*:

(a) qualifications;

(b) procedures for appointment;

- (c) salary and expenses;
- (d) grounds for suspension and removal;
- (e) the appointment of an acting *Ombudsman* when the office is vacant for any reason; and guidelines may be established in the by-law for the *Ombudsman* to follow in performing the duties of the position.

Term of office

66(3) Unless the *Ombudsman* sooner resigns, dies or is removed from office, the *Ombudsman* shall hold office for six years from the date of the appointment by council or, where the person is retained, from the date of the contract with the city, and may be re-appointed directly to council.

Reporting

66(4) The *Ombudsman* shall report directly to council.

Rstrictions on employment

66(5) The *Ombudsman* is not eligible to hold any other public office, or to be nominated or elected as a member of council or the Legislative Assembly, or to carry on a trade, business or profession.

Classification of position

66(6) Where appointed as an employee of the city, the *Ombudsman* shall not be covered by a collective agreement but is entitled to benefits similar to those of other employees of the city, as determined by council.

Declaration by Ombudsman

66(7) Before beginning to perform the duties of the position, the *Ombudsman* shall make a declaration before council to faithfully and impartially perform the duties of the office, and not to divulge any information received under this Act, except as provided in this Act.

S.M. 1989-90, c. 8, s. 4; S.M. 1989-90, C. 51, S.6.

Budget

67(1) The *Ombudsman* shall prepare and submit an annual budget to executive policy committee.

Organization of office

67(2) Subject to the approval of Council, the *Ombudsman* may select, appoint and compensate, within the budget approved by council, such employees as the *Ombudsman* considers necessary to perform the duties conferred under this Act.

Employees

67(3) An employee in the office of the *Ombudsman* shall not be covered by a collective agreement but is entitled to benefits similar to those of other employees of the city, as determined by council.

Declaration by employee

67(4) A person employed in the office of the *Ombudsman* shall, before performing the duties of the position, make a declaration before the *Ombudsman* that the person will not divulge any information obtained in the course of the employment, except as permitted by this Act.

Secrecy

67(5) The *Ombudsman* and every person employed by the *Ombudsman* shall maintain secrecy in respect of all matters that come to their knowledge in the exercise of their duties and functions under this Act.

Delegation

67(6) The *Ombudsman* may delegate any of the powers of the *Ombudsman* to an employee, except the power of delegation and the duty to make a report under section 71.

S.M. 1989-90, c. 8, s. 4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6

Jurisdiction

68(1) Subject to subsections (3) and (4), the *Ombudsman* may, on receiving a written complaint, or on the *Ombudsman's* own initiative, investigate

- (a) a decision or recommendation;
- (b) an act done or omitted; or
- (c) a procedure;

relating to a matter of administration in or by a municipal unit of the city, whereby a person is or may be aggrieved.

Reference by council

68(2) Council may refer to the *Ombudsman* a matter that is before council for consideration, and the *Ombudsman* shall, subject to any special directions of council, investigate the matter, so far as it is within the jurisdiction established under subsection (1), and report to Council.

Limit on jurisdiction

68(3) Nothing in this Part authorizes the *Ombudsman* to investigate a decision or recommendation, an act done or omitted, or a procedure used by council, a committee of council or a community committee; or to investigate a matter where an adequate remedy or right of appeal exists, whether or not the complainant uses it.

Questions as to jurisdiction

68(4) Where a question arises as to the jurisdiction of the *Ombudsman* to investigate a matter; the *Ombudsman* may apply to the Court of Queen's Bench for a declaration to determine the question.

S.M. 1989-90, c. 8, s. 4; S.M. 1989-90, c. 51, s.6.

Refusal to investigate

69(1) The *Ombudsman* may refuse to investigate, or may cease to investigate a matter where

- (a) an adequate remedy or right of appeal already exists, whether or not the complainant uses the remedy or right of appeal;
- (b) the complaint, in the opinion of the *Ombudsman*, is frivolous, vexatious or not made in good faith, or concerns a trivial matter;
- (c) the complaint relates to a decision, recommendation, act or omission of which the complainant had knowledge for more than one year before making a complaint to the *Ombudsman*;
or
- (d) having regard to all the circumstances, further investigation of the matter is, in the opinion of the *Ombudsman*, unnecessary.

Report of decision not to investigate

69(2) Where the *Ombudsman* decides not to investigate, or to cease to investigate, a complaint, the *Ombudsman* shall in writing inform the complainant and any other interested person of the decision and shall state the reason for the decision.

Notification of investigation

69(3) Where the *Ombudsman* decides to investigate a complaint, the *Ombudsman* shall notify the head of a municipal unit to which the complaint relates.

S.M. 1989-90, c. 8, s. 4; S.M. 1989-90, c. 51, s.6.

Access to information

70(1) The *Ombudsman* may receive and obtain information from any person and in a manner that the *Ombudsman* considers appropriate, and may conduct hearings.

S.M. 1989-90, c.8, s.4: S.M. 1989-90, c.51, s.6

Further powers

70(2) Without restricting the generality of subsection (1), the *Ombudsman* may

- (a) at a reasonable time enter, remain on and inspect premises occupied by a municipal unit, converse in private with any person on the premises and otherwise investigate matters within the jurisdiction of the *Ombudsman*;
- (b) require a person to furnish information, or produce a document or thing in the person's possession or control that relates to an investigation at a time and place specified by the *Ombudsman*, whether or not the person is a past or present employee of a municipal unit, and whether or not the document or thing is in the custody or under the control of a municipal unit;
- (c) make copies of a document produced under this section;
- (d) summon and examine on oath a person that the *Ombudsman* believes is able to give information relating to an investigation, whether or not the person is a complainant or a member or employee of a municipal unit, and for that purpose may administer an oath; and
- (e) receive and accept, on oath or otherwise, evidence that the *Ombudsman* considers appropriate, whether or not it is admissible in a court.

S.M. 1989-90,c.8, s.4; S.M. 1989-90,c 51, s.6.

Return of thing to municipal unit

70(3) Where the *Ombudsman* obtains a document or thing under subsection (2) and the municipal unit requests its return, the *Ombudsman* shall, within two working days after receiving the request, return it to the municipal unit, but the *Ombudsman* may again require it to be produced under this section.

S.M. 1989-90, c.8, s 4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Application of laws on disclosure

70(4) A rule of law that authorizes or requires the withholding of a document, paper or thing, or the refusal to answer a question, on the ground that the disclosure or answering would be injurious to the public interest does not apply in respect of an investigation by or proceedings before the *Ombudsman*.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Provisions relating to secrecy

70(5) No provision of a by-law or resolution of council requiring a person to maintain secrecy in relation to, or not to disclose information relating to, a matter shall apply in respect of an investigation by the *Ombudsman*; and no person required by the *Ombudsman* to furnish his information or to produce a document, paper or thing, or who is summoned by the *Ombudsman* to give evidence, shall refuse to furnish the information, produce the document, paper or thing, or to answer questions on the ground of any such provision .

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90,c. 51, s. 6.

Admissibility of evidence

70(6) Except on the trial of a person for perjury, no statement made, or answer or evidence given by the person or any other person in the course of an investigation by, or any proceedings before, the *Ombudsman* is admissible in evidence against a person in a court or at an inquiry or in any other proceeding, and no evidence respecting a proceeding before the *Ombudsman* shall be given against any person.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Investigations to be private

70(7) An investigation by the *Ombudsman* shall be conducted in private.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90,c. 51, s. 6.

Hearings and right to be heard

70(8) The *Ombudsman* may hold hearings, obtain information from any person, and make such inquiries as the *Ombudsman* considers necessary; and no person is entitled, as of right, to be heard by the *Ombudsman*.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Opportunity to make representation

70(9) Where it appears to the *Ombudsman* that there may be sufficient grounds for making a report under section 71 that may adversely affect a municipal unit or a person, the *Ombudsman* shall give the head of the municipal unit or the person an opportunity to make representations, orally or in writing, at the discretion of the *Ombudsman*, before making the report.

Report on investigation

71(1) Where, after completing an investigation, the *Ombudsman* is of the opinion that a decision, recommendation, act, omission or procedure of a municipal unit

- (a) is contrary to law;
- (b) is unjust, oppressive or improperly discriminatory;
- (c) is based on a rule of law or practice that is unjust, oppressive or improperly discriminatory;
- (d) is based in whole or in part on a mistake of law or fact or on an irrelevant ground or consideration;
- (e) is related to the application of arbitrary, unreasonable or unfair procedure; or
- (f) was made without providing adequate reasons;

the *Ombudsman* shall provide a written report of the opinion, with reasons, to the head of the municipal unit.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Nature of recommendations

71(2) In making a report under subsection (1), the *Ombudsman* may recommend that

- (a) a matter be referred to a municipal unit for further consideration;
- (b) an omission or delay be rectified;
- (c) a decision or recommendation be revoked or varied;
- (d) reasons be given by a municipal unit for a decision;
- (e) a practice or procedure be altered;
- (f) a statute, regulation or by-law be reconsidered; or
- (g) such other steps be taken as the *Ombudsman* considers reasonable and just.

Notice or proposed steps

71(3) Where a recommendation is made under subsection (2), the *Ombudsman* may request the head of the municipal unit to notify the *Ombudsman* within a specified time of steps taken, or that are proposed, to give effect to the recommendation.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Further report on recommendations

71(4) If, within a reasonable time after a request is made under subsection (3), no action is taken that in the opinion of the *Ombudsman* is adequate and appropriate, the *Ombudsman* may report the matter to council.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90,c. S 1, s. 6.

Report to complainant

71(5) Where an investigation is made of a complaint, the *Ombudsman* shall report the result of the investigation to the complainant, in such manner and at such time as the *Ombudsman* considers proper.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90,c. S1, s. 6.

Review of Ombudsman's decision

72(1) No proceeding of the *Ombudsman* is void for want of form, and no proceeding or decision of the *Ombudsman* shall be challenged, reviewed, quashed or called in question in a court except on the ground of lack of jurisdiction.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

No proceeding against Ombudsman

72(2) No proceedings lie against the *Ombudsman* or against an employee of the *Ombudsman* for anything done in the course of the exercise or performance, or intended exercise or performance, of functions and duties under this Act, unless it is done in bad faith.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Ombudsman not to be called as witness

72(3) The *Ombudsman* and any employee of the *Ombudsman* shall not be called to give evidence in a court or in any proceeding of a judicial nature in respect of anything coming to their knowledge in the performance of functions and duties under this Act.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Annual report to council

72(4) The *Ombudsman* shall in each year make a written report to council on the performance of functions and duties by the *Ombudsman* under this Act in the previous year.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Publication of reports

72(5) Where the *Ombudsman* considers it to be in the public interest, or in the interest of a person or municipal unit, the *Ombudsman* may publish a report relating generally to the performance of duties under

this Act or to a case investigated by the *Ombudsman*, whether or not the matters in the report are the subject of a report to council under this Act.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

Offence and penalty

73 A person who wilfully and without lawful justification,

- (a) obstructs, hinders or resists the *Ombudsman* or any other person in the performance of the functions and duties of the *Ombudsman* under this Act;
- (b) fails to comply with a lawful request of the *Ombudsman* or an employee of the *Ombudsman*; or
- (c) makes a false statement to, or misleads or attempts to mislead, the *Ombudsman* or any other person in the exercise or performance of the functions and duties of the *Ombudsman* under this Act;

is guilty of an offence and liable to a fine of not more than \$500. or to imprisonment for a term not exceeding three months, or to both.

S.M. 1989-90, c.8, s.4; S.M. 1989-90, c. 51, s. 6.

ANEXO 5
LEGISLACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY NÚM. 3
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Título I

Designación. Cese y condiciones. Atribuciones

Artículo 1o. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Ejerce las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Artículo 2o. Es misión de la Defensoría la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.

Quedan comprendidos también los actos de naturaleza administrativa de los poderes Judicial, Legislativo y de los Órganos de control.

Artículo 3o. La Defensoría está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo designado por Resolución de la Legislatura de la Ciudad por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública convocada al efecto con diez días de anticipación.

Artículo 4o. Previo a la convocatoria de la sesión, la Legislatura, a través de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, debe abrir por un periodo de diez (10) días un registro para que los ciudadanos, por si o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus propuestas respecto de postulantes con antecedentes curriculares que las fundamenten. Sólo son considerados candidatos aquellos postulantes que sean propuestos por algún legislador.

Con una antelación no menor de tres (3) días y durante tres (3) días deben ser anunciadas las fechas de apertura y cierre del registro de postulantes y la celebración de la audiencia pública, por la emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires y el Boletín Oficial y al menos en tres (3) diarios de amplia circulación, en una emisora de radiodifusión de A.M y en una de televisión abierta.

Vencido el plazo de cierre del registro debe darse a publicidad durante dos (2) días y en igual forma que la detallada en el párrafo anterior, la nómina de candidatos propuestos por los Diputados y Diputadas y los postulantes anotados en el Registro.

La totalidad de los antecedentes curriculares presentados deben estar a disposición de la ciudadanía.

Quienes deseen formular impugnaciones u observaciones respecto de los candidatos propuestos, deben hacerlo por escrito en los siguientes cinco (5) días, bajo su firma y fundarlas en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes. Los candidatos tienen acceso a las mismas durante los tres (3) días siguientes.

Cumplido lo expuesto en el párrafo anterior, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control deben celebrar la audiencia pública a efectos de considerar las impugnaciones con la participación de los candidatos.

Artículo 5o. La Resolución que designa al Defensor o Defensora del Pueblo debe publicarse en el Boletín Oficial.

El Defensor o Defensora del Pueblo toma posesión de su cargo ante la Legislatura prestando juramento o compromiso de desempeñar debidamente el cargo.

Artículo 6o. El Defensor o Defensora del Pueblo debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza de iguales inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los Jueces. Le está vedada la actividad político partidaria.

Artículo 7o. La duración del mandato del Defensor o Defensora del Pueblo es de cinco (5) años, pudiendo ser designado en forma consecutiva por una sola vez.

Artículo 8o. El Defensor o Defensora del Pueblo percibe igual remuneración que los diputados o diputadas de la Ciudad.

Artículo 9o. Son de aplicación al Defensor o Defensora del Pueblo, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial vigente en la Ciudad.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su designación y antes de tomar posesión del cargo, el Defensor o Defensora del Pueblo debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo.

Artículo 10. La actividad de la Defensoría del Pueblo no se interrumpe en el periodo de receso de la Legislatura ni durante la feria judicial.

Artículo 11. El Defensor o Defensora del Pueblo cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

- a) Muerte.
- b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
- c) Por renuncia presentada y aceptada por la Legislatura.
- d) Por remoción, a través de juicio político, fundado en las causales que prevé el Artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 12. En caso de muerte, renuncia o remoción del Defensor o Defensora del Pueblo, la Legislatura debe iniciar en el plazo máximo de 10 días el procedimiento tendiente a la designación del nuevo titular.

Artículo 13. Para el cumplimiento de sus funciones el Defensor o Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Comprobar el respeto a los derechos humanos en unidades carcelarias y penitenciarias, dependencias policiales e institutos de internación o guarda, tanto públicos como privados sujetos al control de la administración.
- b) Solicitar vista de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil a los efectos de la investigación, aun aquellos clasificados como reservados o secretos, sin violar el carácter de estos últimos.
- c) Realizar inspecciones a oficinas, archivos y registros de los entes y organismos bajo su control.
- d) Solicitar la comparencia personal de los presuntos responsables, testigos, denunciantes y de cualquier particular o funcionario que pueda proporcionar información sobre los hechos o asuntos que se investigan.
- e) Ordenar la realización de los estudios, pericias y la producción de toda otra medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.
- f) Fijar los plazos para la remisión de informes y antecedentes y para la realización de diligencias.
- g) Requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada.
- h) Promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive el federal.
- i) Ejercer la iniciativa legislativa.
- j) Proponer la modificación o sustitución de normas y criterios administrativos.
- k) Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados, el concurso de empleados y funcionarios de la Administración.
- l) Requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de su labor de investigación.
- m) Asistir a las comisiones y juntas de la Legislatura, en las cuestiones relativas a su incumbencia con voz pero sin derecho a voto.

- n) Dictar el reglamento interno, nombrar y remover a sus empleados y proyectar y ejecutar su presupuesto.
- ñ) Determinar la estructura orgánico-funcional, la dotación de personal permanente y transitorio, el nivel de sus remuneraciones y el régimen de concurso público abierto por el cual se selecciona al personal permanente.
- o) Realizar toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones.

Artículo 14. Las actuaciones del Defensor o Defensora del Pueblo están exentas del pago de cualquier tasa administrativa o judicial. También está eximido del pago de las costas cuando la Defensoría del Pueblo litigue contra entes públicos o empresas prestadoras de servicios públicos.

Título II

De los Adjuntos

Artículo 15. El Defensor o Defensora es asistido por cuatro (4) adjuntas o adjuntos que lo sustituyen provisoriamente en forma rotativa, en el orden en que lo establezca el Reglamento interno, en caso de ausencia o inhabilidad temporal o permanente. Las adjuntas o adjuntos no pueden ser todos del mismo sexo.

Artículo 16. Las adjuntas o adjuntos son designados por la Legislatura mediante el mismo procedimiento, en la misma oportunidad y por el mismo periodo que el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 17. Rigen para las adjuntas o adjuntos las mismas condiciones, inmunidades, prerrogativas, inhabilidades e incompatibilidades que para el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 18. Las adjuntas o adjuntos sólo cesan en sus funciones por las causas enunciadas en los incisos a), b) y c) del artículo 11 o por remoción por causa de mal desempeño, resuelta por la Legislatura con el

voto de las dos terceras partes del total de sus miembros en sesión especial y pública convocada al efecto.

Artículo 19. Las áreas de especialización de las adjuntas y adjuntos, en virtud de los derechos, garantías y políticas especiales enumeradas en el preámbulo y en el Libro Primero de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, son:

- a) Políticas sociales en general, y en particular destinadas a personas mayores, personas con necesidades especiales, trabajo, seguridad social, turismo y mediación comunitaria;
- b) Administración Pública y prestación de servicios públicos de la Ciudad en general y en particular, políticas de salud, cultura, educación, ciencia y tecnología, juventud, deporte, consumidores, usuarios, economía, finanzas y presupuesto;
- c) Seguridad y derechos humanos, fuerzas policiales y de seguridad, institutos carcelarios, igualdad entre varones y mujeres, derechos de los niños y adolescentes, derechos de las minorías y derecho a la libertad de expresión, y
- d) Ambiente, comunicaciones, hábitat y urbanismo.

Artículo 20. Son atribuciones de las adjuntas o adjuntos, sin perjuicio de las que les asigne el Defensor o Defensora del Pueblo, las que enuncian los incisos a), b), c), d), e), f), l) del artículo 13, respecto del área de su incumbencia.

Artículo 21. Las adjuntas o adjuntos perciben una retribución equivalente al 80% de la remuneración del titular.

Título III *Del procedimiento*

Artículo 22. El Defensor o Defensora del Pueblo debe dictar el Reglamento Interno de los aspectos procesales de su actuación, dentro de los límites fijados por esta Ley y respetando los siguientes principios:

- a. Impulsión e instrucción de oficio;
- b. Informalidad;
- c. Gratuidad;
- d. Celeridad;
- e. Imparcialidad;
- f. Inmediatez;
- g. Accesibilidad;
- h. Confidencialidad
- i. Publicidad
- j. Pronunciamiento obligatorio.

Artículo 23. El Defensor o Defensora del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento o rectificación de los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos o de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente de sus funciones y que sean susceptibles de afectar derechos y garantías e intereses individuales, difusos o colectivos.

Artículo 24. Cuando el Defensor o Defensora del Pueblo detecte fallas sistemáticas o generales de la administración, debe dar intervención al órgano de control que corresponda, sin perjuicio de poder continuar con su actuación.

Artículo 25. Puede dirigirse al Defensor o Defensora del Pueblo cualquier persona física o jurídica que se considere afectada por los actos, hechos u omisiones previstos en el artículo 2. No constituye impedimento ni restricción alguna para ello la nacionalidad, el lugar de residencia, la edad, la internación en centro penitenciario o de reclusión.

La correspondencia entre el Defensor o Defensora del Pueblo y los reclusos y las conversaciones telefónicas que el Defensor o Defensora del Pueblo mantenga con ellos no puede ser objeto de ningún tipo de censura.

Artículo 26. La actuación ante el Defensor o Defensora del Pueblo no está sujeta a formalidad alguna. Procede de oficio o por denuncia del damnificado o de terceros. En caso de ser oral, el funcionario que la reciba debe labrar un acta. Todas las actuaciones ante el Defensor o Defensora del Pueblo son gratuitas para el interesado y no requieren patrocinio letrado. En todos los casos debe acusar recibo del hecho, queja o denuncia recibida. El rechazo debe hacerse por escrito fundado, dirigido al reclamante por medio fehaciente, pudiendo sugerirle alternativas de acción. En caso de presentarse denuncia o queja anónima, sólo se le debe dar curso si se verifica la verosimilitud de los hechos denunciados.

El quejoso puede pedir que su reclamo sea confidencial o su identidad reservada. El Defensor o Defensora debe informar sin demora a la persona que envía la queja el curso que dio a la misma.

Artículo 27. Si la queja se formula contra personas u organismos, o por actos, hechos u omisiones que no están bajo su competencia, el Defensor o Defensora del Pueblo está obligado a derivar la queja a la autoridad competente.

Artículo 28. El Defensor o Defensora del Pueblo no debe dar curso a las quejas en los siguientes casos:

- a) Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial.
- b) Asuntos ya juzgados.

Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas.

Artículo 29. Las decisiones sobre la admisibilidad de las quejas presentadas son irrecurribles.

Artículo 30. La queja no interrumpe los plazos para interponer los recursos administrativos o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico, circunstancia que en todos los casos debe advertirse al quejoso.

Artículo 31. Cuando el Defensor o Defensora del Pueblo tome conocimiento de una posible afectación de los derechos por parte de algún organismo o ente bajo su competencia, debe promover una investigación sumaria, en la forma que establezca el Reglamento interno. En todos los casos debe dar cuenta de su contenido al organismo o ente involucrada, a fin de que por intermedio de autoridad responsable se remita respuesta por escrito. Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el informante son justificadas a criterio del Defensor o Defensora del Pueblo, éste debe dar por concluida la actuación.

Artículo 32. Todos los organismos, los entes y sus agentes contemplados en el artículo 2, y los particulares, están obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. En ningún caso puede impedirse u obstaculizarse la presentación de una queja o el desarrollo de una investigación.

Artículo 33. El incumplimiento de lo prescrito en el artículo anterior por parte de un empleado o funcionario público, es causal de mal desempeño y falta grave, quedando habilitado el Defensor o Defensora del Pueblo para propiciar la sanción administrativa pertinente, sin perjuicio de las acciones penales que puedan corresponder.

Artículo 34. Cuando el Defensor o Defensora del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tome conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, debe denunciarlo de inmediato al juez competente.

Artículo 35. El Defensor o Defensora del Pueblo debe comunicar al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones, así como la respuesta que hubiese dado el organismo o funcionario implicados, salvo en el caso que ésta, por su naturaleza, sea considerada de carácter reservado o secreta.

Asimismo, debe poner en conocimiento del órgano de control pertinente, en los casos que corresponda, los resultados de sus investigaciones.

Artículo 36. Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas. Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor o Defensora del Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o secretario del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.

Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.

Título IV *Del informe*

Artículo 37. El Defensor o Defensora del Pueblo da cuenta anualmente a la Legislatura de la labor realizada en un informe que le presenta el 15 de marzo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar informes especiales. Los informes anuales y los especiales son públicos y deben ser enviados al Poder Ejecutivo para su conocimiento.

Artículo 38. El informe anual debe contener el número y tipo de quejas presentadas, de aquéllas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, de las que fueron objeto de investigación, de las medidas adoptadas para su resolución y del resultado de las mismas. En el informe no deben constar datos personales que permitan la pública identificación de los quejosos.

El informe debe contener un anexo que incluya la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado en el periodo que corresponda.

Título V
Recursos humanos y materiales

Artículo 39. Los recursos para atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente provienen de las partidas que la ley de presupuesto asigne a la Defensoría del Pueblo.

Artículo 40. La Defensoría del Pueblo es continuadora jurídica de la Controladuría General Comunal

Artículo 41. Comuníquese, etc.

Buenos Aires, 3 de febrero de 1998

ANEXO 6
EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA CIUDAD DE ZURICH

A. TRADUCCIÓN NO OFICIAL AL INGLÉS

The Ombudsperson of the City of Zurich: Legal basis

Constitution of the City of Zurich (of April 26, 1970 with amendments of June 21, 1992):

Art. 14

The following decisions by the city legislative council cannot be voted on by the municipality:

- 1) Decisions regarding the adjustment of inflation allowances and inflation-related adjustments to the salaries of employees of the City of Zurich. The employees concerned include teachers, the Mayor, other members of the city executive council, the Ombudsperson, debt collection officers, magistrates, school principals and members of the guardianship court.

Art. 25

The Ombudsperson attends council meetings at which his/her reports are dealt with. He/she is given the opportunity to comment during discussions on matters which concern his/her duties at the pre-consultation commission and in the council.

Art. 35.

The city legislative elects:

h) the Ombudsperson and his/her deputies.

Art. 37

The commission examines the reports of the Ombudsperson.

Art. 39

The Ombudsperson mediates in matters concerning citizens on the one hand and the city administration on the other. He/she reviews complaints lodged against the city administration. Every interested natural or legal entity is authorised to engage the services of the Ombudsperson which are free of charge.

The Ombudsperson clarifies whether the city authorities have proceeded legally and fairly. He/she comments in appropriate ways on the matter in question but has no authority to make decisions or give instructions. His/her comments are disclosed to the interested parties, the relevant supervisory administrative authorities and to other appropriate parties in accordance at his/her discretion.

The Ombudsperson acts independently. He/she regulates the procedure and appoints his/her employees. He/she can obtain written or verbal information from the city administration at any time, carry out inspections and consult files. Members of the authorities and employees of the City of Zurich are released of their obligation to secrecy when dealing with the Ombudsperson, who maintains official secrecy inasmuch as public or private interests require such protection.

The Ombudsperson compiles a report on his/her activities at least once a year. In these reports, he/she can point out instances where relevant laws are lacking or areas where there is a lack of administrative activity. The Ombudsperson can also suggest changes and improvements.

The Ombudsperson's deputies take over all his/her responsibilities in cases of his/her prolonged or exceptional absence. The city legislative council regulates compensation.

Art. 41

The city legislative council is entitled to:

h) set the salaries of the following: the Mayor and other members of the city executive council; the Ombudsperson, the debt-collection officials, the magistrates, the school principals and the members of the guardianship courts;

stipulate the conditions of employment of the above-mentioned officials.

Art. 118

The members of the city executive council, the Ombudsperson, the debt-collection officials, the magistrates, the school principals and the members of the guardianship courts shall be insured in the same way.

B. TEXTO OFICIAL EN ALEMÁN

Ombudsmann der Stadt Zürich

Rechtsgrundlagen:

Gemeindeordnung der Stadt Zürich

(vom 26. April 1970, mit Aenderungen bis 15. März 1998)

Die Gemeindeordnung, die "Stadtverfassung" von Zürich, ist nicht nur die Rechtsgrundlage für die Existenz des "Beauftragten in Beschwerdesachen", d.h. des Ombudsmannes, sondern sie enthält in Art.39 zugleich die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. In der Stadt Zürich wird das aus 125 Mitgliedern bestehende Parlament, das den Ombudsmann jeweils für vier Jahre wählt, als "Gemeinderat" bezeichnet.

Art. 14 [Teuerungszulagen, Anpassung der Besoldung an die Teuerung]

Art. 25 Abs.2 [Teilnahme des Ombudsmannes an Sitzungen des Gemeinderates]

Die bzw. der Beauftragte in Beschwerdesachen sowie die bzw. der Datenschutzbeauftragte nehmen anlässlich der Behandlung ihrer bzw. seiner Berichte im Rat an den Sitzungen teil. Bei der Beratung von Geschäften, die ihre bzw. seine Aufgabe betreffen, ist ihr bzw. ihm Gelegenheit zur Stellungnahme in der vorberatenden Kommission und im Rat zu geben.

Art. 35 Abs.1 [Wahl des Ombudsmannes]

Der Gemeinderat wählt: ...

h) den Beauftragten/die Beauftragte in Beschwerdesachen und dessen Stellvertreter / deren Stellvertreterin.

Art. 37 Abs.3 [Vorprüfung des Jahresberichts/Rechenschaftsberichts des Ombudsmannes durch die Geschäftsprüfungskommission des Gemeinderates]

Die Kommission prüft die Berichte der bzw. des Beauftragten in Beschwerdesachen sowie der bzw. des Datenschutzbeauftragten.

Art. 39 Abs.1-5 [Aufgaben, Kompetenzen, Verfahren]

¹ Der/die Beauftragte in Beschwerdesachen vermittelt im Verkehr zwischen Bürgern und Bürgerinnen einerseits und der Stadtverwaltung andererseits. Er/sie prüft Beschwerden, die gegen die Stadtverwaltung erhoben werden. Seine/ihre Inanspruchnahme steht jeder natürlichen und juristischen Person frei, die daran ein Interesse hat, und ist kostenlos.

² Der/die Beauftragte klärt ab, ob die Stadtverwaltung nach Recht und Billigkeit verfährt. Er/sie nimmt in geeigneter Weise zur untersuchten Angelegenheit Stellung, hat aber keine Entscheidungs- und Weisungs-

befugnis. Seine/ihre Stellungnahmen werden den Beteiligten, der vorgesetzten Verwaltungsbehörde und nach seinem/i ihrem Ermessen auch weiteren Stellen zur Kenntnis gebracht.

³ Der/die Beauftragte ist in seiner/ihrer Tätigkeit unabhängig. Er/sie regelt das Verfahren und ernennt seine/ihre Arbeitnehmenden. Er/sie kann jederzeit von der Stadtverwaltung schriftliche oder mündliche Auskünfte einholen, Besichtigungen durchführen und die Akten beiziehen. Behördemitglieder und Arbeitnehmende der Stadt Zürich sind ihm/ihr gegenüber von der Schweigepflicht entbunden. Der/die Beauftragte seinerseits/ihrerseits wahrt das Amtsgeheimnis, soweit es schutzwürdige öffentliche oder private Interessen gebieten.

⁴ Der/die Beauftragte erstattet dem Gemeinderat mindestens einmal jährlich Bericht über seine/ihre Geschäftsführung. Es/sie kann darin auf Mängel im geltenden Recht und in der Verwaltungstätigkeit hinweisen und Aenderungen oder Verbesserungen anregen.

⁵ Der Stellvertreter/die Stellvertreterin übernimmt in Fällen von längerer, ausserordentlicher Abwesenheit alle Aufgaben und Befugnisse des/der Beauftragten. Der Gemeinderat regelt die Entschädigung.

Art. 41 [Besoldung des Ombudsmannes]

Dem Gemeinderat stehen zu:

h) Festsetzung der Besoldungen: ... des Beauftragten in Beschwerdesachen...

Art. 118 Abs.2[Vorsorgeversicherung des Ombudsmannes]

OM99.doc/14. junio 2002/St

ANEXO 7
VERORDNUNG ÜNER DEN BEAUFTRAGTEN IN
BECHWERDESACHEN VON 21. JANUAR 1991)

Der Grosse Gemeinderat erlässt, gestützt auf § 70 Abs. 5 der Gemeindeordnung vom 26. November 1989, folgende Verordnung :

Art. 1 (Aufgabe)

Der Ombudsmann prüft aufgrund einer Beschwerde, auf Anregung oder von sich aus, ob Amtsstellen der Stadt Winterthur nach Recht und Billigkeit verfahren.

Er wirkt in erster Linie vermittelnd.

Art. 2 (Wirkungsbereich)

Als Amtsstellen im Sinne dieser Verordnung gelten alle Behörden und Verwaltungsstellen der Stadt Winterthur sowie alle Institutionen und Organisationen des privaten Rechts, denen öffentliche Aufgaben übertragen wurden und die überwiegend von der Stadt Winterthur finanziert werden.

Nocht als Amtsstellen gelten:

- a) der Grosse Gemeinderat;
- b) die Friedensrichter und die übrigen, verwaltungsunabhängigen richterlichen Behörden;
- c) kirchliche Behörden.

Art. 3 (Verfahren)

Der Ombudsmann prüft den Sachverhalt und shliesst die Untersuchung mit einem Schlussbericht ab, der dem Bechwerdeführer und der Amts-

stelle unter Mitteilung an die vorgesetzten Instanzen suggestiert wird. Er kann eine schriftliche Empfehlung abgeben.

In Ausnahmefällen, wie der Möglichkeit einer angemesseneren Erledigung der Beschwerde oder bei einer schikanösen oder treuwidrigen Beschwerdeerhebung, kann ohne Begründung auf Untersuchung und Schlussbericht verzichtet werden.

Das Verfahren ist kostenlos.

Art. 4 (Befugnisse und Pflichten)

Der Ombudsmann kann mit den betroffenen Amtsstellen Rücksprache und Einsicht in die Akten nehmen sowie städtische Mitarbeiter befragen.

Die Amtsstellen haben das Recht, sich zur Beschwerde zu äussern.

Der Ombudsmann unterliegt der Schweigepflicht.

Art. 5 (Ausschreibungspflicht)

Bei Neubesetzung wird das Amt des Ombudsmannes mindestens in den offiziellen Publikationsorganen der Stadt Winterthur öffentlich ausgeschrieben.

Art. 6 (Wahlverfahren)

Für die Vorbereitung einer Neubewegung wird eine Spezialkommission eingesetzt.

Der Grosse Gemeinderat wählt den Ombudsmann gemäss Art. 33 der Geschäftsordnung nach den Vorschriften des kantonalen Rechtes.

Art. 7 (Amtszeit)

Die Amtszeit des Ombudsmannes beträgt vier Jahre. Die erste volle Amtszeit beginnt am 1. Juli 1992.

Art. 8 (Unvereinbarkeiten)

Der Ombudsmann darf keine Nebentätigkeiten ausüben, die ihn in ei-

nen Interessenkonflikt mit seiner Aufgabe bringen oder welche die Unabhängigkeit seiner Amtsführung beeinträchtigen könnten.

Er darf kein anderes öffentliches Amt, kein Verwaltungsratsmandat und keine leitende Funktion in einer politischen Partei oder in einem Interessenverband ausüben.

Der Grosse Gemeinderat entscheidet Zweifelsfälle und Ausnahmen.

Art. 9 (Stellvertretung)

Bei Ausfall wegen Ausstandes oder längerer Arbeitsunfähigkeit wählt der grosse Gemeinderat auf Antrag des Büros einen Stellvertreter.

Art. 10 (Beschäftigungsgrad)

Der Beschäftigungsgrad des Ombudsmannes beträgt mindestens 60 %.

Art. 11 (Besoldung)

Die Besoldung richtet sich nach besonderem Beschluss des Grossen Gemeinderates.

Art. 12 (Pensionsversicherung)

Der Ombudsmann hat der Pensionskasse der Stadt Winterthur beizutreten. Die Stadt Winterthur unabhängig von seinem Alter die Hälfte des Eintrittsgeldes.

Wird der Ombudsmann aus Gründen, die er nicht zu verantworten hat, nicht wiedergewählt, so hat er nach zwei vollen amtsdauern Anspruch auf eine Pension im Sinne von § 37 ff. Der Pensionskassenstatuten.

Im übrigen gelten die Statuten der Pensionskasse der Stadt Winterthur.

Art. 13 (Kontaktorgan)

Ständiges Kontaktorgan des Ombudsmannes für laufende Angelegenheiten ist das Büro des Grossen Gemeinderates.

Art. 14 (Mitarbeiter)

Der Ombudsmann bestellt sein Sekretariat im Rahmen des vom Grossen Gemeinderat bewilligten Voranschlages.

Die Mitarbeiter arbeiten ausschliesslich nach den Weisungen des Ombudsmannes. Sie unterstehen im übrigen dem Personalstatut der Stadt Winterthur.

Art. 15 (Inkrafttreten)

Diese Verordnung tritt ab 15 februar 1991 in Kraft.

Winterthur, den 21. Januar 1991

Im Namen des grossen gemeinderates

Die Präsidentin: Margit Wälti

Der Sekretär: Dr. Peter Saile

ANEXO 8
REGLAMENTO DEL *OMBUDSMAN* DE LA CIUDAD
DE BERNA, SUIZA

Reglement über die Ombudsstelle der Stadt Bern (Ombudsreglement;
OSR)

Der Stadtrat von Bern,
gestützt auf Artikel 65a der Gemeindeordnung der Stadt Bern vom 30.
Juni 1963

beschliesst:

Art. 1 Grundsatz

Jede Person kann in Fragen der Stadtverwaltung die Ombudsperson mündlich oder schriftlich um Rat ersuchen und bei ihr Beanstandungen anbringen.

Art. 2 Aufgaben der Ombudsperson

1 Die Ombudsperson erteilt Ratsuchenden Auskunft und berät sie über die Vorgehensmöglichkeiten.

2 Sie prüft Beanstandungen und ist für deren Beantwortung besorgt. Sie hilft Konflikte lösen und empfiehlt Verbesserungen.

3 Sie versieht die Aufgaben einer Gemeindeaufsichtsstelle nach kantonalem Datenschutzgesetz

Art. 3 Arbeitsweise

1 Die Ombudsperson kann die Angelegenheit mit der verantwortlichen Dienststelle besprechen, Aussprachen unter den Beteiligten vermitteln und schriftliche Empfehlungen an Dienststellen abgeben.

2 Sie prüft das Verwaltungshandeln auf Rechtmässigkeit, Angemessenheit und Zweckmässigkeit. Die Überprüfung kann sich auf laufende oder abgeschlossene Angelegenheiten beziehen.

3 Die Ombudsperson hat gegenüber den Dienststellen der Stadtverwaltung ein direktes und, vorbehältlich Artikel 4, ein uneingeschränktes Akteneinsichts- und Auskunftsrecht.

Art. 4 Einschränkungen

1 In laufende städtische Verwaltungsverfahren kann die Ombudsperson bis zum Erlass einer Verfügung, in stadtinterne Beschwerdeverfahren nur bei Untätigkeit einer städtischen Dienststelle eingreifen.

2 Die Informationsrechte gemäss Artikel 3 Absatz 3 gelten nicht, wenn eidgenössisches oder kantonales Recht die Weitergabe von Informationen auch innerhalb der Verwaltung ausschliesst.

3 Die Ombudsperson kann Dienststellen gegenüber keine Anordnungen treffen. Vorbehalten bleiben die besonderen Rechte, die ihr als Gemeindeaufsichtsstelle nach kantonalem Datenschutzgesetz zukommen.

Art. 5 Unabhängigkeit

1 Die Ombudsperson handelt nicht auf Weisung.

2 Sie ist verwaltungsunabhängig. Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind verpflichtet, sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Art. 6 Schweigepflicht

Die Ombudsperson und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ombudsstelle sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dies gilt auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses.

Art. 7 Kosten

1 Die Dienste der Ombudsperson sind unentgeltlich. Vorbehalten bleibt die Abgeltung von Aufwendungen der Dienststellen für die Beschaffung archivierter Akten.

2 Die Kosten der Ombudsstelle sind Bestandteil des städtischen Voranschlags der Laufenden Rechnung.

Art. 8 Wahl und Anstellungsverhältnis

1 Der Stadtrat wählt die Ombudsperson auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission. Die Ombudsperson steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis.

2 Sowohl die Ombudsperson wie der Stadtrat, auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission, können das Dienstverhältnis mit einer Frist von drei Monaten auf Ende eines Monats auflösen.

3 Soweit nichts anderes bestimmt wird, finden die für Beamtinnen und Beamte geltenden personalrechtlichen Bestimmungen Anwendung.

Art. 9 Stellvertretung

1 Der Stadtrat bestimmt eine Stellvertretung.

2 Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter wird bei längerer Abwesenheit der Ombudsperson tätig und hat die gleichen Aufgaben und Befugnisse.

3 Der Stadtrat beschliesst die Anstellungsbedingungen.

Art. 10 Sekretariat

1 Der Stadtrat entscheidet über die Einrichtung eines Sekretariats.

2 Die Ombudsperson stellt das Personal im Rahmen des städtischen Personalrechts an.

Art. 11 Pflichtenheft / Berichterstattung

1 Die Ombudsperson erarbeitet für die Ombudsstelle ein Pflichtenheft und legt es dem Stadtrat zur Genehmigung vor.

2 Sie unterbreitet dem Stadtrat jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht, weist darin auf Mängel hin und macht Änderungsvorschläge.

Art. 12 Aufgehobenes Recht

Aufgehoben werden alle Bestimmungen des Datenschutzreglements der Stadt Bern vom 18. Februar 1988, die diesem Reglement widersprechen, insbesondere Artikel 2 (Aufsichtsstelle) und 3 (Gebühren).

Art. 13 Inkrafttreten

Der Stadtrat setzt dieses Reglement nach Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion des Kantons Bern in Kraft.

Bern, 23. Juni 1994

Namens des Stadtrats

Der Präsident:

Jost Koch

Die Stadtschreiberin:

Elsbeth M. Schaad

Genehmigung und Inkraftsetzung

Von der kantonalen Direktion genehmigt am 23. November 1994.

In Kraft getreten am 1. Juli 1995.

ANEXO 9
ARTÍCULOS DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
NAYARIT, REFERENTES A LAS COMISIONES MUNICIPALES
DE DERECHOS HUMANOS

TÍTULO QUINTO

Capítulo I

Atribuciones y prohibiciones de los Ayuntamientos

Artículo 61. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

[...]

III. En materia administrativa, económica y social:

[...]

g) Integrar la Comisión Municipal de Derechos Humanos, pero garantizar su funcionamiento de acuerdo con la capacidad económica presupuestaria del municipio;

[...]

Artículo 65. Son deberes del Presidente Municipal:

[...]

XV. Contestar y atender sin demora los informes y recomendaciones que dicten las comisiones Estatal y Municipal de Derechos Humanos, haciendo que los servidores públicos municipales procedan en los mismos términos cuando fueren requeridos por dichos organismos;

[...]

Artículo 94. Son organismos auxiliares del municipio:

I. La Comisión Municipal de los Derechos Humanos;

[...]

Capítulo III
De la Comisión Municipal de Derechos Humanos

Artículo 102. La Comisión Municipal de Derechos Humanos es un organismo descentralizado de los Ayuntamientos con personalidad jurídica, patrimonio propio e integración plural, que tiene como finalidades esenciales la protección, defensa, promoción, estudio, divulgación y vigilancia de los derechos humanos en el municipio.

Los procedimientos que se sigan ante la comisión deberán ser breves, sencillos y estarán sujetos a las mínimas formalidades esenciales requeridas para la integración del expediente respectivo. Se seguirán, además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, procurando, en la medida de lo posible, el contacto directo con los quejosos, denunciantes, autoridades y servidores públicos, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas, haciéndose efectiva en todos los casos la suplencia de la queja de conformidad con el reglamento que expida el Ayuntamiento.

Artículo 103. Los Ayuntamientos reglamentarán la instalación, funcionamiento y marco atributivo de los integrantes de la Comisión, la situación del personal que preste sus servicios y el procedimiento para elaborar y aprobar su respectivo presupuesto, conforme a las reglas siguientes:

I. La Comisión deberá integrarse e instalarse a más tardar dentro de los primeros noventa días de cada administración municipal;

II. La Comisión se integrará por un Presidente, un Secretario Ejecutivo, un Visitador General y visitadores adjuntos, cuyas funciones serán ejecutivas; contará además por un Consejo Ciudadano que estará integrado preferentemente por un abogado, una mujer, un médico, un maestro y tres ciudadanos más de reconocida solvencia moral, quienes no deberán desempeñar cargo o comisión como servidores públicos municipales y fungirán con carácter honorario; sus funciones serán exclusivamente propositivas, y serán nombrados por el Ayuntamiento, por

mayoría de votos de sus miembros, de conformidad con las disposiciones que emitan;

III. Los Ayuntamientos aprobarán, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la designación del Presidente de la Comisión, Secretario Ejecutivo y Visitador General, la cual se hará previa convocatoria que emita el Ayuntamiento.

Para tal efecto, la Comisión de Gobernación de cada Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones que se emitan, de entre los aspirantes que se hayan registrado, propondrá una terna para ocupar los cargos convocados. La resolución que emita el Ayuntamiento sobre la designación será inatacable;

IV. Para ser miembro de la Comisión se deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano nayarita en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- b) Ser de reconocido prestigio y honesta conducta; y
- c) Contar preferentemente con estudios de licenciatura en derecho.

V. Los miembros de la Comisión durarán en su cargo tres años, contados a partir de su designación, y podrán ser ratificados en su encargo por el Ayuntamiento entrante;

VI. Las funciones del Presidente de la Comisión, así como las del Secretario Ejecutivo y Visitador General, serán incompatibles con cualquier otro cargo o comisión en organismos públicos municipales o estatales, exceptuando las actividades académicas;

VII. El Presidente de la Comisión, el Secretario Ejecutivo y el Visitador General, así como los visitadores adjuntos, no podrán ser reconvenidos, detenidos, multados o juzgados por las opiniones o recomendaciones que formulen o por las investigaciones o actos que realicen en el ejercicio de la competencia propia de sus cargos;

VIII. La Comisión Municipal de Derechos Humanos tiene competencia para proteger, defender, promover, divulgar y vigilar los derechos

humanos en cada demarcación municipal, cuando los actos u omisiones que propicien su violación, sean imputables a la responsabilidad de los servidores públicos municipales, o por actos de particulares cuando estén apoyados por las autoridades municipales;

IX. La Comisión deberá coadyuvar con las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, en todas aquellas acciones que se requieran para ese fin; y

X. La Comisión Municipal de Derechos Humanos no será competente tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

Artículo 104. Son atribuciones de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, las siguientes:

I. Recibir quejas o denuncias y conocer e investigar de oficio de presuntas violaciones de los derechos humanos atribuidas a autoridades municipales y a particulares que presten un servicio público municipal concesionado;

II. Realizar denuncias de oficio o a instancia de cualquier persona ante las comisiones nacional o estatal de derechos humanos, por presuntas violaciones que cometan autoridades federales o estatales;

III. Solicitar a las autoridades municipales señaladas como responsables, informe sobre el asunto sujeto a su investigación. Para dar cumplimiento a la atribución que se precisa en el inciso I, las autoridades municipales estarán obligadas a atender cualquier solicitud de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en el desempeño de sus funciones;

Las autoridades municipales que no atiendan y auxilien en las investigaciones a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, se harán acreedoras a las sanciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en las demás disposiciones jurídicas aplicables dictadas por el Ayuntamiento;

Los particulares que presten servicios públicos municipales concesionados que no colaboren con la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus investigaciones, serán sancionados por la autoridad municipal conforme a derecho;

IV. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, y denuncias y quejas en contra de las autoridades respectivas;

V. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades en los casos de faltas a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno por parte de aquellos;

VI. Orientar a los particulares en la defensa de sus derechos cuando la queja o denuncia presentada ante ella no sea de su competencia;

VII. Tramitar las inconformidades que mediante los recursos de queja o impugnación promuevan en su contra los quejosos o denunciante ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, previstos por el artículo 105 fracción X del presente ordenamiento legal;

VIII. Presentar anualmente un informe al Ayuntamiento sobre el ejercicio de sus atribuciones, mismo que hará público por los medios adecuados;

IX. Formular propuestas de reforma a las disposiciones jurídicas municipales y a las prácticas administrativas que sean de la competencia del Ayuntamiento que redunden en una mejor protección de los derechos humanos de la población;

X. Fomentar la cultura de los derechos humanos en el municipio;

XI. Coordinarse con organismos estatales y nacionales tendientes a lograr una mejor defensa y promoción de los derechos en nuestro estado; y

XII. Las demás que le confiere el reglamento interno u otras disposiciones aplicables.

ANEXO 10
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE TEPIC

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo único
Disposiciones Generales

Artículo 1o. El presente Reglamento regula la organización, ejercicio de atribuciones y el procedimiento a que se sujetará la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, como organismo descentralizado del Ayuntamiento de Tepic.

La competencia de la Comisión se extiende a las actividades de las autoridades administrativas municipales o de cualquier persona que preste servicios públicos concesionados.

Artículo 2o. En la defensa y promoción de la legalidad, eficacia y honradez de los actos de las autoridades y de la prestación de los servicios públicos municipales, la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa se apartará del burocratismo y formalidad excesiva que entorpezca la expedita resolución de los problemas encomendados.

Artículo 3o. La Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa es representante de la ciudadanía y tiene como fines esenciales la defensa y promoción de los derechos e intereses legítimos de los administrados.

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Capítulo Primero

De los Órganos de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa

Artículo 4o. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, se integrará de los siguientes órganos:

- I. De carácter ejecutivo:
 - A. El presidente;
 - B. El Secretario Ejecutivo, y
 - C. El Visitador General.

- II. De naturaleza propositiva:
Los Consejeros

Artículo 5o. Los funcionarios que ejerzan los cargos que provee el artículo anterior, no podrán ser detenidos, multados o destituidos, por las opiniones o recomendaciones que emitan en el ejercicio de las facultades propias de sus cargos.

Artículo 6o. La condición de Presidente, Secretario Ejecutivo y Visitador General es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de cualquier otra administración pública y con cualquier actividad profesional, exceptuando las actividades académicas no remuneradas.

Capítulo segundo

Del Nombramiento de los funcionarios de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa.

Artículo 7o. La Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, estará a cargo de un Presidente quien será nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; durará en su cargo el periodo constitucional del Ayuntamiento de Tepic, siendo prorrogable hasta que el próximo Ayuntamiento designe el nuevo Presidente o en su caso, lo ratifiquen por otro periodo igual.

El Presidente recibirá una remuneración equivalente a la de un regidor del Ayuntamiento del Tepic, la que no podrá suspenderse durante su encargo.

Artículo 8o. El Secretario Ejecutivo y el Visitador General de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa serán nombrados por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa.

El Visitador General se auxiliara de dos visitadores, quienes recibirán las quejas y denuncias, procediendo de inmediato a su investigación cuando fueren procedentes.

Artículo 9o. Los Consejeros serán designados por el Presidente Municipal, durando en su encargo el periodo constitucional del Ayuntamiento, y su nombramiento deberá recaer en personas honestas y de reconocido prestigio para fungir con el carácter de honorarios.

Capítulo tercero

De las facultades y obligaciones de los funcionarios.

Artículo 10. El Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Establecer los lineamientos internos a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión;

II. Representar legalmente a la Comisión para todos los asuntos de su competencia;

III. Nombrar y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

IV. Presentar un informe semestral al Ayuntamiento;

V. Coordinar la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el Municipio con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit;

VI. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión y el informe del ejercicio que haya hecho del mismo;

VII. Dirigir las recomendaciones a las autoridades que violen los Derechos Humanos y los principios que establece el artículo primero del decreto de creación de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, y

VIII. Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su encargo.

Artículo 11. Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo:

I. Colaborar con el Presidente en la elaboración de los informes semestrales que se rindan al Ayuntamiento;

II. Ejercer las facultades que le delegue el Presidente;

III. Organizar los expedientes radicados por la Comisión;

IV. Representar a la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, cuando el Presidente esté ausente, y

V. Las demás que le encomiende el Presidente.

Artículo 12. Son facultades y obligaciones del Visitador General:

I. Admitir o rechazar las quejas o denuncias presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes, realizando las investigaciones que sean pertinentes;

II. Iniciar de oficio las investigaciones cuando las autoridades o los particulares falten a la legalidad, eficacia u honradez y ante la presunta violación de Derechos por parte de aquéllos;

III. Tratar de conciliar a los particulares y autoridades para la pronta solución a la violación de los Derechos Humanos. De igual forma procurará la amigable composición ante las faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno entre los particulares quejosos y las autoridades correspondientes;

IV. Formular los proyectos de las recomendaciones a las autoridades responsables o particulares que presten un servicio público concesionado;

V. Orientar y asesorar a las personas, cuando el asunto motivo de la queja o denuncia no sea de la competencia de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, y

VI. Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO TERCERO

De las atribuciones y competencia de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa

Capítulo primero *De las atribuciones*

Artículo 13. Para dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas en los preceptos anteriores, la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir quejas o denuncias de presuntas violaciones a la legalidad, eficacia y honradez por parte de las autoridades municipales y de particulares que presten un servicio público municipal concesionado;

II. Conocer de las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que se cometan por autoridades municipales. También podrá realizar denuncias de oficio o a instancia de cualquier persona ante organizaciones nacionales, estatales o locales de Derechos Humanos, que cometan autoridades federales o estatales;

III. Solicitar a las autoridades municipales señaladas como responsables, informe sobre el asunto sujeto a su investigación. Para dar cumplimiento a la atribución que se precisa en el párrafo anterior, las autoridades municipales estarán obligadas a atender cualquier solicitud de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, en el desempeño de sus funciones;

Las autoridades municipales que no atiendan o auxilien en las investigaciones a la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, se harán acreedoras a las sanciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en las sanciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en las demás disposiciones jurídicas aplicables dictadas por el Ayuntamiento.

Los particulares que presten servicios públicos municipales concesionados que no colaboren con la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, en el ejercicio de sus investigaciones, serán sancionados por la autoridad municipal conforme a derecho.

IV. Emitir las recomendaciones para que las autoridades o particulares responsables modifiquen o revoquen sus actos que afecten los derechos o intereses legítimos de los particulares. Estas recomendaciones se harán públicas en caso de no observarse. Dichas recomendaciones no tendrán carácter obligatorio;

V. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades en los casos de faltas a los Bandos y Reglamentos de Policía y Buen Gobierno por parte de aquellos;

VI. Orientar a los particulares en la defensa de sus derechos cuando la queja o denuncia presentada ante ella no sea de su competencia;

VII. Formular denuncia ante el Ministerio Público correspondiente cuando de sus investigaciones resulte la Comisión de algún delito por parte de servidores públicos municipales o de particulares;

VIII. Presentar semestralmente un informe al Ayuntamiento sobre el ejercicio de sus atribuciones, mismo que hará público por los medios adecuados;

IX. Formular propuesta de reformas a las disposiciones jurídicas municipales que sean de la competencia del Ayuntamiento;

X. Fomentar la cultura de los Derechos Humanos en el Municipio de Tepic;

XI. Coordinarse con organismos estatales y nacionales tendientes a lograr una mejor defensa y promoción de los derechos en nuestro Estado, y

XII. Las demás que le confiere su reglamento interno y otras disposiciones aplicables.

Capítulo segundo *De la competencia*

Artículo 14. La Comisión Municipal y Justicia Administrativa, podrá conocer de las violaciones a los procedimientos de elección y el funcionamiento de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento.

Artículo 15. Por ningún motivo la Comisión será competente para conocer de:

I. Asuntos de carácter jurisdiccional;

II. Conflictos de carácter político entre las mismas autoridades administrativas, y

III. De los problemas laborales entre el Ayuntamiento y sus empleados

TÍTULO CUARTO DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo primero *De las quejas y denuncias*

Artículo 16. La Comisión podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de las autoridades municipales o de particula-

res que presten un servicio público concesionado presumiblemente contrarios a la legalidad, honradez y eficacia o violatorios a Derechos Humanos

Artículo 17. Las personas físicas o morales, afectadas en sus derechos e intereses legítimos, podrán recurrir a la Comisión para formular sus quejas o denuncias, ya sea en forma verbal o escrita.

También podrán hacer denuncias los familiares de los afectados, las organizaciones sociales o políticas y de los grupos sociales.

Artículo 18. Las quejas y denuncias sólo podrán formularse dentro del término de seis meses, contados a partir de la realización de los hechos impugnados o de que se tenga conocimiento de los mismos.

Artículo 19. Las quejas o denuncias deberán ser suscritas por quien las formule y podrán presentarse a cualquier hora del día.

Artículo 20. La presentación de las quejas ante la Comisión así como la recomendación que emita ésta, no afectará el ejercicio de los medios de defensa que establezcan otras disposiciones jurídicas, ni tampoco interrumpirán su acuerdo de admisión o prescripción. Esta situación se le hará saber al quejoso en el acuerdo de admisión. Cuando el acto de autoridad motivo de la queja o denuncia se encuentre pendiente de resolver por una autoridad administrativa o jurisdiccional, la Comisión se abstendrá de conocerlo.

Artículo 21. Recibida la denuncia o la queja, la Comisión admitirá o la desechará según sea el caso, comunicando de inmediato al promoviente sobre su acuerdo.

Cuando la queja o denuncia sea admitida, iniciara la investigación desde luego, individualizando a la autoridad o particular responsable y solicitándole la rendición de un informe que deberá contener los antecedentes del asunto, su motivación y fundamentación, así como la fecha de emisión del mismo.

Informe que deberá rendir en un plazo de diez días contados a partir del siguiente a la notificación, la falta de rendición del informe o de la documentación requerida, así como su retraso, además de la responsa-

bilidad respectiva, tendrá como efecto la certeza de los hechos denunciados o impugnados, salvo prueba en contrario.

Artículo 22. En la investigación de las quejas y denuncias se admitirán toda clase de pruebas siempre que no sean contrarias a la Ley, a la moral o a las buenas costumbres y no se trate de la confesional, las cuales se valorizan de acuerdo al criterio de la Comisión para llegar a la convicción de los hechos objeto de controversia.

Artículo 23. Con informes o sin ellos, la Comisión abrirá un periodo probatorio que no deberá exceder de diez días hábiles. La Comisión podrá recabar de oficio cualquier prueba aún fuera del término, con el objeto de mejor proveer en la resolución que corresponda.

Artículo 24. Para dar una solución inmediata al conflicto la Comisión tratará de conciliar los intereses de las partes tratando siempre de proteger los Derechos Humanos y la legalidad de los actos.

Artículo 25. Cuando de los acuerdos que logre la Comisión entre el particular y la autoridad responsable se obtenga avenencia satisfactoria, se mandará archivar el expediente.

Artículo 26. La Comisión tendrá facultad para dictar en cualquier momento de la investigación las medidas precautorias que estime pertinentes para evitar la consumación de los actos de las autoridades responsables, que hagan difícil o imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados.

Artículo 27. Concluido el periodo, el Presidente de la Comisión citará a reunión del pleno que deberá celebrarse dentro del término de tres días para que se analicen los hechos reclamados, los informes de las autoridades, las pruebas aportadas, las investigaciones practicadas, y se valorizarán los elementos con que se cuenta, a efecto de determinar si existe o no violación a los Derechos Humanos o se cometieron actos de injusticia administrativa.

Artículo 28. El Presidente de la Comisión, en base a las recomendaciones emitidas por los integrantes del Consejo, resolverá en los siguientes términos:

I. Si de los hechos probados se demuestran que no se afecta derecho alguno emitirá una resolución de no responsabilidad, comunicándolo de inmediato a las partes;

II. Si se comprueba la violación a los Derechos Humanos la Comisión emitirá una recomendación a la autoridad responsable a efecto de que rectifique su conducta, corrigiendo las anomalías que provocaron la acción u omisión de la violación.

Artículo 29. Ante la violación de Derechos Humanos la Comisión formulará la denuncia penal correspondiente ante la autoridad competente cuando exista presunción de la Comisión de un delito.

Artículo 30. La autoridad responsable deberá notificar a la Comisión en un término de diez días hábiles si acepta o no la recomendación, remitiendo las pruebas que demuestren su cumplimiento en caso de considerarla.

Las recomendaciones no serán obligatorias, pero podrán publicarse de inmediato para el conocimiento de la ciudadanía, en caso de no acatarse por parte de la autoridad responsable, remitiendo su contenido al Ayuntamiento de Tepic.

Tampoco podrán anular o modificar los actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

TÍTULO QUINTO Del informe semestral

Capítulo Único *Del informe semestral*

Artículo 31. Rendir el informe semestral por parte de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, se hará del conocimiento del Ayuntamiento y la opinión pública, las investigaciones realizadas y de las recomendaciones acatadas y no aceptadas por

parte de las autoridades municipales, así como de los datos que considere pertinentes.

Artículo 32. Todo lo no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el Ayuntamiento de Tepic.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en las disposiciones del decreto presidencial que creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y asimismo, a lo dispuesto por el decreto que creó la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, y en los Reglamentos que las norman.

DADO en sesión pública del Cabildo en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, a los (29) veintinueve días del mes de mayo de (1992) mil novecientos noventa y dos.

Para su publicación y observancia promulgo el presente Reglamento, en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit a los (2) dos días del mes de junio de (1992) mil novecientos noventa y dos.

El Presidente Municipal constitucional

Ing. Alejandro Rivas Curiel

El Secretario del H. XXII Ayuntamiento

Lic. Francisco Delgadillo Arreola

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Ing. Alejandro Rivas Curiel

José Torres Zamora

Regidores:

- C. Ma. Trinidad Gómez Cuevas
- C. José Luis Santana Pérez
- C. Lic. Ma. Luisa Hermosillo González
- C. Juan Luna Pelayo
- C. Aurelio Altamirano Aguayo
- C. Luis Fernando Rodríguez
- C. Olga María Romero Ceja
- C. Ing. Jesús Ibarra González
- C. Manuel González Castañeda
- C. Francisco Valle Miramontes
- C. Guadalupe A. Cristerna Soto
- C. Amado Ornelas Romero
- C. Patricia López Rosales
- C. Ing. Ángel Burgara Preciado
- C. Francisco M. Navarro García
- C. Antonio Vizcarra Zavala
- C. Profr. Carlos Ruiz Flores
- C. José María Viera Carreón
- C. Lorenzo del Toro Vargas

Rúbricas

ANEXO 11
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
H. XXXI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA, NAYARIT

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 1o. El presente Reglamento regula la organización, ejercicio de atribuciones y el procedimiento a que se sujetará la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, como órgano descentralizado del Ayuntamiento de Compostela.

La competencia de la Comisión se extiende a las actividades de las autoridades administrativas municipales o de cualquier persona que preste servicios públicos concesionados.

Artículo 2o. En la defensa y promoción de la legalidad, eficacia y honradez de los actos de las autoridades y de la prestación de los servicios públicos municipales, la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa se apartará del burocratismo y formalidad excesiva que entorpezcan la expedita resolución de los problemas encomendados.

Artículo 3o. La Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa es representante de la ciudadanía y tiene como fines esenciales la defensa y promoción de los derechos e intereses legítimos de los administrados.

[TÍTULO SEGUNDO]
Integración de la Comisión Municipal
de Derechos Humanos y Justicia Administrativa

Capítulo Primero
De los órganos de la Comisión Municipal
de Derechos Humanos y Justicia Administrativa

Artículo 4o. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, se integrará de los siguientes órganos:

De carácter Ejecutivo:

El Presidente;

El Secretario Ejecutivo, y

El Visitador General.

De la naturaleza propositiva:

Los Consejeros.

Artículo 5o. Los funcionarios que ejerzan los cargos que [prevé] el artículo anterior, no podrán ser detenidos, multados o destituidos, por las opiniones o recomendaciones que emitan en el ejercicio de las facultades propias de sus cargos.

Artículo 6o. La condición de Presidente, Secretario Ejecutivo y Visitador General es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de cualquier otra administración pública y con cualquier actividad profesional, exceptuando las actividades académicas no remuneradas.

Capítulo Segundo
Del nombramiento de los funcionarios de la Comisión Municipal
de Derechos Humanos y Justicia Administrativa

Artículo 7o. La Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, estará a cargo de un Presidente quien será nombrado

por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; durará en su cargo el período constitucional del Ayuntamiento de Compostela, siendo prorrogable hasta que el próximo Ayuntamiento designe el nuevo Presidente o en su caso, lo ratifique por otro período igual.

El Presidente recibirá una remuneración equivalente a la de un Regidor del Ayuntamiento de Compostela, la que no podrá suspenderse durante su encargo.

Artículo 8o. El Secretario Ejecutivo y el Visitador General de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa serán nombrados por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa.

El Visitador General se auxiliará de los visitadores, quienes recibirán las quejas y denuncias, procediendo de inmediato a su investigación cuando fueren procedentes.

Artículo 9o. Los consejeros serán designados por el Presidente Municipal, durando en su encargo el período constitucional del Ayuntamiento, y su nombramiento deberá recaer en personas honestas y de reconocido prestigio para fungir con el carácter de honorarios.

Capítulo Segundo

De las facultades y obligaciones de los funcionarios

Artículo 10. El Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

Establecer los lineamientos internos a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión;

Representar legalmente a la Comisión para todos los asuntos de su competencia;

Nombrar y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

Presentar un informe semestral al Ayuntamiento;

Coordinar la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el Municipio con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit;

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión y del informe del ejercicio que haya hecho del mismo;

Dirigir las recomendaciones a las autoridades que violen los Derechos Humanos y los principios que establece el artículo primero del Decreto de creación de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, y

Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su encargo.

Artículo 11. Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo:

Colaborar con el Presidente en la elaboración de los informes semestrales que se rindan al Ayuntamiento;

Ejercer las facultades que le delegue el Presidente;

Organizar los expedientes radicados por la Comisión;

Representar a la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, cuando el Presidente esté ausente, y

Las demás que le encomiende el Presidente.

Artículo 12. Son facultades y obligaciones del Visitador General:

Admitir o rechazar las quejas o denuncias presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes, realizando las investigaciones que sean pertinentes;

Iniciar de oficio las investigaciones cuando las autoridades o los particulares faltan a la legalidad, eficacia u honradez y ante la presunta violación de derechos por parte de aquéllos;

Tratar de conciliar a los particulares y autoridades para la pronta solución a la violación de los Derechos Humanos. De igual forma procurará la amigable composición ante las faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno entre los particulares quejosos y las autoridades correspondientes;

Formular los proyectos de las recomendaciones a las autoridades responsables o particulares que presten un servicio público concesionado;

Orientar y asesorar a las personas, cuando el asunto motivo de la queja o denuncia no sea de la competencia de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, y

Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO TERCERO

De las atribuciones y competencia de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa

Capítulo Primero *De las atribuciones*

Artículo 13. Para dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas en los preceptos anteriores, la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, tendrá las siguientes atribuciones:

Recibir quejas o denuncias de presuntas violaciones a la legalidad, eficacia y honradez por parte de las autoridades municipales y de particulares que presten un servicio público municipal concesionado;

Conocer de las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que se cometan por autoridades municipales. También podrá realizar denuncias de oficio o a instancia de cualquier persona ante organizaciones nacionales, estatales o locales de Derechos Humanos, que cometan autoridades federales o estatales;

Solicitar a las autoridades municipales señaladas como responsables, informe sobre el asunto sujeto a investigación. Para dar cumplimiento a la atribución que se precisa en el párrafo anterior, las autoridades municipales estarán obligadas a atender cualquier solicitud de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, en el desempeño de sus funciones.

Las autoridades municipales que no atiendan y auxilien en las investigaciones a la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia

Administrativa, se harán acreedoras a las sanciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en las demás disposiciones jurídicas aplicables dictadas por el Ayuntamiento.

Los particulares que presten servicios públicos municipales concesionados que no colaboren con la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, en el ejercicio de sus investigaciones, serán sancionados por la autoridad municipal conforme a Derecho;

Emitir las recomendaciones para que las autoridades o particulares responsables modifiquen o revoquen sus actos que afecten los derechos o intereses legítimos de los particulares. estas recomendaciones se harán públicas en caso de no observarse. Dichas recomendaciones no tendrán carácter obligatorio;

Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades en los casos de faltas los Bandos y Reglamentos de Policía y Buen Gobierno por parte de aquéllos;

Orientar a los particulares en la defensa de sus derechos cuando la queja o denuncia presentada ante ella no sea de su competencia;

Formular denuncia ante el Ministerio Público correspondiente cuando de sus investigaciones resulte la comisión de algún delito por parte de servidores públicos municipales o de particulares;

Presentar semestralmente un informe al Ayuntamiento sobre el ejercicio de sus atribuciones, mismo que hará público por los medios adecuados;

Formular propuesta de reformas a las disposiciones jurídicas municipales que sean de la competencia del Ayuntamiento;

Fomentar la cultura de los Derechos Humanos en el Municipio de Compostela;

Coordinarse con organismos estatales y nacionales tendentes a lograr una mejor defensa y promoción de los Derechos en nuestro Estado, y

Las demás que le confiere su Reglamento Interno y otras disposiciones aplicables.

Capítulo Segundo
De la competencia

Artículo 14. La Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, podrá conocer de las violaciones a los procedimientos de elección y el funcionamiento de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento.

Artículo 15. Por ningún motivo la Comisión será competente para conocer de:

Asuntos de carácter jurisdiccional;

Conflictos de carácter político entre las mismas autoridades administrativas;

De los problemas laborales entre el Ayuntamiento y sus empleados.

TÍTULO CUARTO
Del procedimiento

Capítulo Primero
De las quejas y denuncias

Artículo 16. La Comisión podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de las autoridades municipales o de particulares que presten un servicio público concesionado presumiblemente contrarios a la legalidad, honradez y eficacia o violatorios de Derechos Humanos.

Artículo 17. Las personas físicas o morales, afectadas en sus derechos e intereses legítimos, podrán recurrir a la Comisión para formular las quejas o denuncias, ya sea en forma verbal o escrita.

También podrán hacer denuncia los familiares de los afectados, las organizaciones sociales o políticas y de los grupos sociales.

Artículo 18. Las quejas y denuncias sólo podrán formularse dentro del término de seis meses, contados a partir de la realización de los hechos impugnados o de que se tenga conocimiento de los mismos.

Artículo 19. Las quejas o denuncias deberán ser suscritas por quien las formule y podrán presentarse a cualquier hora del día.

Artículo 20. La presentación de las quejas ante la Comisión así como la Recomendación que emita ésta, no afectará el ejercicio de los medios de defensa que establezcan otras disposiciones jurídicas, ni tampoco interrumpirán su acuerdo de admisión o prescripción. esta situación se le hará saber al quejoso en el acuerdo de admisión. Cuando el acto de autoridad motivo de la queja o denuncia se encuentre pendiente de resolver por una autoridad administrativa o jurisdiccional, la Comisión se abstendrá de conocerlo.

Artículo 21. Recibida la denuncia o la queja, la Comisión la admitirá o la desechará según sea el caso, comunicando de inmediato al promovente sobre su acuerdo.

Cuando la queja o denuncia sea admitida, iniciará la investigación desde luego, individualizando a la autoridad o particular responsable y solicitándole la rendición de un informe que deberá contener los antecedentes del asunto, su motivación y fundamentación, así como la fecha de admisión del mismo.

Informe que deberá rendir en un plazo de diez días contados a partir del siguiente a la notificación, la falta de rendición del informe o de la documentación requerida, así como su retraso, además de la responsabilidad respectiva, tendrá como efecto la certeza de los hechos denunciados o impugnados, salvo prueba en contrario.

Artículo 22. En la investigación de las quejas o denuncias se admitirán toda clase de pruebas siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres y no se trate de la confesional, las cuales se valorizan de acuerdo al criterio de la Comisión para llegar a la convicción de los hechos objeto de la controversia.

Artículo 23. Con informes o sin ellos, la Comisión abrirá un periodo probatorio que no deberá exceder de diez días hábiles. La Comisión

podrá recabar de oficio cualquier prueba aún fuera del término, con el objeto de mejor proveer en la resolución que corresponda.

Artículo 24. Para dar una solución inmediata al conflicto la Comisión tratará de conciliar los intereses de las partes tratando siempre de proteger los Derechos Humanos y la legalidad de los actos

Artículo 25. Cuando de los acuerdos que logre la Comisión entre el particular y la autoridad responsable se obtenga avenencia satisfactoria, se mandará archivar el expediente.

Artículo 26. La Comisión tendrá facultad para dictar en cualquier momento de la investigación las medidas precautorias que estime pertinentes para evitar la consumación de los actos de las autoridades responsables, que hagan difícil o imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados.

Artículo 27. Concluido el período, el Presidente de la Comisión citará a reunión del pleno que deberá celebrarse dentro del término de tres días para que se analicen los hechos reclamados, los informes de las autoridades, las pruebas aportadas, las investigaciones practicadas, y se valorarán los elementos con que se cuenta, a efecto de determinar si existe o no violación a los Derechos Humanos o se cometieron actos de injusticia administrativa.

Artículo 28. El Presidente de la Comisión, en base a las recomendaciones emitidas por los demás integrantes del Consejo, resolverá en los siguientes términos:

Si de los hechos probados se demuestra que no se afecta derecho alguno emitirá una Resolución de No Responsabilidad, comunicándolo de inmediato a las partes;

Si se comprueba la violación a los Derechos Humanos la Comisión emitirá una Recomendación a la autoridad responsable a efecto de que rectifique su conducta, corrigiendo las anomalías que provocaron la acción u omisión motivo de la violación.

Artículo 29. Ante la violación de Derechos Humanos la Comisión formulará la denuncia penal correspondiente ante la autoridad competente cuando exista presunción de la comisión de un delito.

Artículo 30. La autoridad responsable deberá notificar a la Comisión en un término de diez días hábiles si acepta o no la Recomendación, remitiendo las pruebas que demuestren su cumplimiento en caso de considerarla.

Las recomendaciones no serán obligatorias, pero podrán publicarse de inmediato para el conocimiento de la ciudadanía, en caso de no acatarse por parte de la autoridad responsable, remitiendo su contenido al Ayuntamiento de Compostela.

Tampoco podrán anular o modificar los actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

TÍTULO QUINTO Del informe semestral

Capítulo Único *Del informe semestral*

Artículo 31. Rendir el informe semestral por parte de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, se hará del conocimiento del Ayuntamiento y la opinión pública, de las investigaciones realizadas y de las recomendaciones acatadas y no aceptadas por parte de las autoridades municipales, así como de los datos que considere pertinentes.

Artículo 32. Todo lo previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el Ayuntamiento de Compostela.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Periódico Oficial* del Estado.

Artículo Segundo. Para lo previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en las disposiciones del Decreto presidencial que creó la Comisión de Derechos Humanos y asimismo, a lo dispuesto por el Decreto que creó la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, y en los reglamentos que las norman.

Dado en sesión ordinaria de cabildo en la ciudad de Compostela, Nayarit, a los 15 días del mes de agosto de 1992.

Para su publicación y observancia promulgo el presente Reglamento, en la ciudad de Compostela, Nayarit, a los 28 días del mes de octubre de 1992.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Presidente Municipal, C. Macario Aguayo Durán; Ing. Ramón I. Maldonado Ulloa, Secretario General del Gobierno Municipal; C. David Chávez Ayón, Síndico Municipal R. Rúbricas.

Regidores: Profa. Obdulia Delgado Delgado; Prof. Amador Villarreal Spain; Prof. Heriberto Sánchez de León; María Isabel Flores Hernández; Daniel Osuna Gómez; Ernesto Salcedo; Rubén Prado Bueno; Leonel Macías Ávila; Hilda Rodríguez Lizarraraz; Rogelio Reyes Arreola; Juan Delgado Pérez; Cresencio Ortega Uribe; José Luis Díaz Partida; Pedro Galaviz Padrón; Baltazar Urzua Mendoza; Cipriano Cisneros Talavera. Rúbricas.

El Ombudsman municipal en México y en el mundo, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se terminó de imprimir en agosto de 2002 en los talleres de OFFSET UNIVERSAL, S. A., Calle 2 núm. 113, Col. Granjas San Antonio, C. P. 09070, México, D. F. El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones de esta Comisión Nacional. El tiraje consta de 2,000 ejemplares.